

Causa Rol N° 2-2014.-

Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre.

Temuco, veintisiete de junio de dos mil veinticuatro.-

VISTOS:

ÍNDICE

Relación de la Sentencia.....	3-6
Resumen ejecutivo.....	6-8
Actuarios de tramitación y dato técnico.....	8
EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:	
Declaraciones (14).....	9-46
Documentos (21).....	46-55
Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....	55-61
Calificación jurídica de los hechos.....	61-70
Concepto de Lesa Humanidad.....	70-74
Declaración indagatoria de Mamerto Tercero Ávila González y su análisis.....	74-109
Declaración indagatoria de Carlos Emilio Galindo Ruiz y su análisis.....	109-148
En cuanto a las defensas.....	149-164
Consideraciones previas al análisis de la defensa:	
Análisis del auto acusatorio.....	164-168
Estado de Derecho.....	168-175
Obligación de Investigar.....	175-200

Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por Tribunales Alemanes.....	200-214
En cuanto la Complicidad.....	214-215
En cuanto al Encubrimiento.....	215-223
Convenios de Ginebra.....	223
Análisis de las defensas específicas.....	224-236
Acusación particular y su análisis.....	236-238
Adhesión a la acusación y su análisis.....	238-239
Reflexiones sobre Lesa Humanidad.....	239-248
Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:	
Atenuantes de Responsabilidad Penal.....	248-250
Institución de la media prescripción o prescripción gradual	250-256
Agravante de Responsabilidad Penal.....	256
Determinación de la Pena.....	256-259
Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....	259-270
EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:	
Acción civil interpuesta por la abogada Rose Marie Vásquez Garrido en representación de familiares de la víctima Roberto Huaiqui Barría	270-276
Contestación de la demanda civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, en representación del Consejo de Defensa del Estado.....	276-287

Análisis de la contestación de la demanda civil.....	287-302
Acreditación probatoria del daño moral.....	302-303
Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas.....	303
ASPECTOS RESOLUTIVOS.....	303-309

I. RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol 2-2014** del ingreso de la ltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, para investigar los delitos de homicidio calificado en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría y homicidio calificado frustrado en la persona de José Jovin Oporto Del Río y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

1. MAMERTO TERCERO ÁVILA GONZÁLEZ, cédula nacional de identidad N° 4.897.930-0, ex funcionario de Carabineros de Chile, domiciliado en calle Beethoven N°1.052, sector Rahue Alto, comuna de Osorno, nunca antes condenado. (Extracto de filiación y antecedentes de fs. 1.130, tomo IV).

2. CARLOS EMILIO GALINDO RUIZ, cédula nacional de identidad N° 4.127.173-6, ex funcionario de Carabineros de Chile, domiciliado en Avenida Colón N°230, comuna de Puerto Varas, antes condenado. (Extracto de filiación y antecedentes de fs. 1.129 y de 1.463 a fs. 1.464, tomo IV).

A fs. 1 a fs. 43 (tomo I), se inició la causa mediante **querella criminal**, interpuesta por don Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior.

A fs. 1.386 a fs.1.404 (tomo IV), interpone **querella criminal**, la abogada Rose Marie Vásquez Garrido en representación de Dina Uria Huaiqui Barría,

Ismael Baruck Huaiqui Barría, Eliel Enrique Huaiqui Barría y José Leonardo Huaiqui Barría.

A fs. 1.132 a 1.172 (tomo IV) con fecha 9 de diciembre de 2022, se sometió a **proceso** e impuso la medida cautelar de arresto domiciliario total a **CARLOS EMILIO GALINDO RUIZ** y **MAMERTO TERCERO ÁVILA GONZÁLEZ**. Como **autores** del delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Roberto Huaiqui Barría (homicidio calificado consumado) y en la persona de José Jovin Oporto del Río, del delito de **homicidio frustrado**, perpetrado en la comuna de Lago Ranco. Ambos delitos acaecidos según mérito del proceso entre el 15 y el 17 de septiembre de 1973. Procesamiento confirmado por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco a fs. 1.238 (tomo IV).

A fs. 1.437 (tomo IV), con fecha 2 de mayo de 2023, **se declaró cerrado el sumario.**

A fs. 1.467 a fs. 1.504 (tomo IV) con fecha 23 de mayo de 2023, se acusa a **MAMERTO TERCERO ÁVILA GONZÁLEZ** y a **CARLOS EMILIO GALINDO RUIZ**, como **AUTORES** de los delitos de **homicidio calificado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría, (Homicidio calificado consumado) y **homicidio calificado frustrado** en la persona de José Jovin Oporto Del Río, perpetrados en la comuna de Lago Ranco. Ambos delitos acaecidos según mérito de proceso entre el 15 y 17 de septiembre de 1973.

A fs. 1.386 a fs.1.404 (tomo IV) la abogada Rose Marie Vásquez Garrido, en lo principal de su presentación se **adhiere a la acusación fiscal**. Al primer otrosí, dedujo **demanda de indemnización de perjuicios** en contra del Fisco de

Chile, por la suma total de \$800.000.000.- (ochocientos millones de pesos) para los actores civiles.

A fs. 1.584 a fs.1.416 (tomo V) la abogada Catalina Ross Fredes, en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, interpuso **acusación particular**, solicitando que se considere la agravante del numeral 8 del artículo 12 del Código Penal.

A fs. 1.686 a 1.710 (tomo V) contesta la demanda civil, el abogado Procurador Fiscal de Temuco, don Álvaro Sáez Willer, en representación del Consejo de Defensa del Estado, solicitando acoger las siguientes excepciones o defensas opuestas: **1.** Improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas, por preterición legal de los demandantes y por haber sido ya reparados. **2.** Excepción de prescripción extintiva; y por tanto no dar lugar a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por la abogada Rose Marie Vásquez en todas sus partes; y en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de las sumas demandadas por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses y su forma de cómputo.

A fs. 1.722 a fs. 1.760 (tomo V) el abogado Marco Chesta Quiero, **contesta** la acusación fiscal, su adhesión y acusación particular en representación del acusado **MAMERTO TERCERO ÁVILA GONZÁLEZ**. En lo principal de su presentación contesta la acusación fiscal, su adhesión y acusación particular.

A fs. 1.790 a fs. 1.798 (tomo V) el abogado Carlos Ernesto Jiménez Jiménez, **contesta** la acusación fiscal, su adhesión y acusación particular en

representación del acusado **CARLOS EMILIO GALINDO RUIZ**. En lo principal de su presentación opone excepciones de previo y especial pronunciamiento. En el primer otrosí, contesta acusación fiscal, su adhesión y acusación particular.

A fs.1.857 (tomo VI), con fecha 6 de mayo de 2024, **se recibió la causa a prueba**.

A fs.1.918 (tomo VI), con fecha 19 de junio de 2024, se certificó que el **término probatorio se encontraba vencido**.

A fs.1.919 (tomo VI), con fecha 19 de junio de 2024, se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A fs.1.920 y a fs.1.924 (tomo VI) se dictaron **medidas para mejor resolver**.

A fs.1.942 (tomo VI), con fecha 27 de junio de 2024, se trajeron los **autos para fallo**.

RESUMEN EJECUTIVO:

- EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL 1° al °40:

1°) al 2°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones (14) y Documentos (21); 3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 4°) y 5°) Calificación jurídica de los hechos; 6°) y 7°) Concepto de Lesa Humanidad; 8°) Declaración Indagatoria de Mamerto Tercero Ávila González; 9°) y 10°) Análisis de la declaración del acusado Mamerto Tercero Ávila González, ponderación en relación a la prueba del proceso; 11°)

Declaración Indagatoria de Carlos Emilio Galindo Ruiz; 12° y 13°) Análisis de la declaración del acusado Carlos Emilio Galindo Ruiz, ponderación en relación a la prueba del proceso; 14°) Defensa del abogado Marco Chesta Quiero en representación de Mamerto Tercero Ávila González; 15°) Defensa del abogado Carlos Ernesto Jiménez Jiménez en representación de Carlos Emilio Galindo Ruiz; 16°) Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa: A. Análisis del auto acusatorio. B. Estado de Derecho. C. Obligación de investigar. D. Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por los Tribunales Alemanes. E. En cuanto a la Complicidad. F. En cuanto a Encubrimiento. G. Convenios de Ginebra; 17°) Análisis de la defensa específica de Mamerto Tercero Ávila González; 18°) Análisis de la defensa específica de Carlos Emilio Galindo Ruiz; 19°) Acusación particular de la abogada Catalina Ross Fredes; 20°) Análisis acusación particular; 21°) Adhesión acusación fiscal de la abogada Rose Marie Vásquez Garrido; 22°) Análisis adhesión; 23°) al 30°) Reflexiones sobre lesa humanidad; Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal: 31°) Atenuantes de Responsabilidad Penal; 32°) Institución de la media prescripción o prescripción gradual; 33°) Agravante de Responsabilidad Penal; 34°) al 36°) Determinación de la pena; 37°) al 40°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.

- **EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 41° al 47°:**

41°) Demanda civil interpuesta por la abogada Rose Marie Vásquez Garrido por los actores civiles; 42°) Contestación a la demanda civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, en representación del Consejo de Defensa del Estado; 43°) y 44°) Análisis de la contestación a la demanda civil efectuada por

el FISCO de Chile; 45°) Acreditación probatoria del daño moral; 46°) Ponderación daño moral y montos; y 47°) Reajustes e intereses de las sumas demandadas.

ACTUARIOS DE TRAMITACIÓN Y DATO TÉCNICO:

- a. Fecha de inicio de la causa:** 7 de enero de 2014.
- b. Actuarios de Tramitación Sumario:** Yessica Sobarzo Tragol y Pablo Lazcano Cárdenas.
- c. Actuarias de Tramitación Plenario:** Leslie Villalobos Retamal, Cecia Cruces Valdebenito y Francisca Rosales Castillo.
- d. Tomos: VI.**
 - Tomo I: De fs. 1 a fs. 288.-
 - Tomo II: De fs. 289 a fs. 599.-
 - Tomo III: De fs. 600 a fs.
 - Tomo IV: De fs. 1.127 a fs.1.519.-
 - Tomo V: De fs.1.520 a fs.1.807.-
 - Tomo VI: De fs.1.808 en adelante.
- e. Fojas: 310.-**
- f. Considerandos: 47.-**

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL

1°) Que de fs. 1.467 a fs. 1.504 (tomo IV), con fecha 23 de mayo de 2023, se dictó **auto acusatorio** en contra de **MAMERTO TERCERO ÁVILA GONZÁLEZ** y **CARLOS EMILIO GALINDO RUIZ** como **AUTORES** de los delitos de **homicidio calificado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría (homicidio calificado consumado); y **homicidio frustrado**, en la persona de José Jovin Oporto del Río, perpetrados en la comuna de Lago Ranco.

Ambos delitos acaecidos según mérito de proceso entre el 15 y 17 de septiembre de 1973.

2º) Que con el objeto de establecer en autos la existencia de los ilícitos penales señalados, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de fs. 1.467 a 1.504 (tomo IV), como las querellas criminales deducidas antes individualizadas, sin perjuicio del análisis de las pruebas rendidas durante el plenario, que en lo pertinente y sustancial exponen:

A. DECLARACIONES (14)

1. Ismael Baruck Huaiqui Barría.
2. José Jovín Oporto Del Río.
3. Carlos Germán Oñate Jaramillo.
4. Sergio Segundo Calfuléf Traillanca.
5. Luis Rubén Díaz Zumelzu.
6. Rubén Hilario Huaiqui Carrillo.
7. Julián Ávila Riveros.

8. Hernán Daniel Leal Oporto.
9. Dina Uria Huaqui Barría
10. Martín Eduardo Huaiqui Barría.
11. Eliel Enrique Huaiqui Barría.
12. José Leonardo Huaiqui Barría.
13. Luis Omar Lopetegui Ríos.
14. Isaías Reinerio Vásquez Perez.

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

A.1. ISMAEL BARUCK HUAQUI BARRÍA (23 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 323 a fs. 324 (tomo II);

En declaración extrajudicial de fecha 16 de agosto de 2015, rolante de fs. 323 a fs. 324 (Tomo II), copia de fs. 909 a fs. 910 (tomo III). Comenzó indicando que es uno de los 5 hermanos vivos de Roberto Huaiqui Barría, quienes ordenados de mayor a menor, corresponden a Nelly, José, quien declara, Eliel y

Martín. Contó que para el año 1973 vivía junto a sus padres (ambos fallecidos) además de sus seis hermanos, en una casa ubicada en la comuna de Lago Ranco, sector Tringlo. En relación a los hechos que rodearon la muerte de su hermano, dijo que el día 10 de agosto del año 1973 aproximadamente, Roberto salió en compañía de un amigo del sector de nombre José Jovin Oporto Del Río, señalando a sus padres que se trasladaría hasta los alrededores del sector Riñinahue por unos días, con la finalidad de visitar a un pariente de nombre Fernando Ñancucheo. Pasados unos días, el 15 de septiembre de ese año, a eso de las 10:00 horas llegó hasta su casa Fernando Ñancucheo, quien dio aviso a sus padres que a Roberto lo habían matado en la orilla del Río Neltume, cerca de un puente, no especificando quiénes, solo que había escuchado unos disparos y que minutos más tarde había visto el cuerpo de su hermano sin vida, río abajo. Ante tal noticia, al día siguiente, su madre, un tío de nombre Rufino (fallecido), un primo de nombre Rolando Vejar y quien declaro, fueron hasta el lugar que había indicado Fernando Ñancucheo, pero fue en vano ya que personal militar, desconoce de qué Regimiento, impidió que pudiesen seguir avanzando al posible lugar de los hechos, no quedando otra alternativa que regresar a su casa. Añadió que al cabo de unos meses, José Jovin Oporto Del Río, le contó a sus padres que tanto a él como a Roberto, funcionarios del Ejército de Chile les habían disparado por la espalda mientras arrancaban de los mismos. Lo anterior por temor a que les hicieran algo, siendo Roberto herido y que por tratar de salvarse se habría lanzado a las aguas del Río Neltume. En tanto a él (José Jovin Oporto) lo habían tomado detenido y trasladado hasta un lugar que desconocía, para a la postre ser dejado en libertad. El declarante tiene entendido que esta persona se habría ido a Argentina. Menciono que en dicha época, su padre era dirigente del Comité de

Pequeños Agricultores de la comuna de Lago Ranco, así como también militante del Partido Socialista, no le cabe duda que esa situación pudo haber afectado a su hermano Roberto. Señaló que con el pasar de los años nunca se supo nada nuevo acerca del paradero de su hermano, actualmente figura como detenido desaparecido. Finalmente agrego que dos años después de la desaparición de Roberto, su padre fue detenido por Carabineros de Lago Ranco y luego torturado en la cárcel de Valdivia, esas lesiones con el tiempo le causaron la muerte.

A.2. JOSÉ JOVÍN OPORTO DEL RÍO (18 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 327 a fs. 329 (tomo II);

En declaración judicial de fecha 02 de octubre de 2015, rolante de fs. 327 a fs.329 (Tomo II). Relató que el día 11 de septiembre un grupo de jóvenes socialistas, comunistas, etc, todos de la UP, salieron desde la ciudad de Lago Ranco con destino a Arquihue, para poder hacer una reunión política y ver las acciones de resistencia contra, en ese momento, gobierno de facto. Entre ellos estaban Sergio Calfulef, Roberto Huaiqui, Héctor Angulo, Víctor Zavala, Luis Díaz Zumelzu, Alfredo Calfulef, los hermanos Manuel, Jorge y Sergio Furniel Ríos, Evaristo Vera y algunos más cuyas identidades no recordó. Siguió su relato contando que caminaron y pasaron por Riñinahue, pasaron el Puente Nilahue, donde tuvieron algunos inconvenientes con guardias blancas, que era gente de civil que apoyaba el golpe, los cuales les dispararon al verlos sin lograr lesionar a ninguno de ellos. De ahí siguieron caminando a Arquihue, donde se percataron que no había ninguna resistencia ni grupo organizado, así que decidieron volver luego de permanecer hasta el día 15 de dicho mes (septiembre). Anexó que luego de salir de una parte boscosa y pasar cerca de un cobertizo, mientras caminaba con Huaiqui, un sujeto salió a dispararles, así que corrieron hacia el Puente

Nilahue cayendo en una emboscada. Puesto que en el lado opuesto estaban apostados otros civiles, mucha gente, entre los cuales estaba Víctor Lacoste (fallecido), quien dirigía al grupo, los cuales empezaron a dispararles, por lo que debieron saltar del puente y tratar de irse con la corriente del río. Continuo que ya en el agua los disparos siguieron en su contra por parte de los civiles antes referidos, pero también desde dos avionetas, también de propiedad de civiles que sobrevolaban el sector. Conjeturó que una de ellas era de un señor de apellido Heitmann (fallecido). Hasta que de pronto vio que Huaiqui perdía toda vitalidad y la corriente del río se lo llevó, mientras su cuerpo giraba de vez en cuando movido por el oleaje. El declarante dijo haber sentido un golpe en la espalda a la altura del pulmón izquierdo, pero no le impidió seguir nadando, por lo que pudo llegar a la orilla y tenderse sobre una pierna, ya sin fuerzas. Divulgó que en ese instante llegaron los atacantes y uno de ellos de apellido Rivas (fallecido), le golpeó la cabeza con la culata de un revólver causando una herida que empezó a sangrar inmediatamente. Luego lo tomaron a la fuerza y en la pampa más cercana lo empezaron a golpear brutalmente con pies, puños y las propias carabinas. Preciso que ahí también estuvo involucrado Lacoste. Destacó que de pronto Heitmann y Miguel Obando, que conocían a su abuelo, intervinieron a su favor y pararon la golpiza, sacándolo de sus agresores, para luego trasladarlo en su avioneta hasta Río Bueno, donde lo entregaron en la Comisaría para que Carabineros lo llevara al hospital, lo cual obedecieron, pudiendo sobrevivir gracias a los auxilios prestados en ese centro hospitalario. Aclaró que tanto los civiles como los propios Carabineros de Río Bueno, querían terminar con su vida, pero Heitmann tenía tanto poder que todos le obedecieron y ese hecho fue el que logró que no lo mataran. Adoso que las demás personas que iban con ellos se habían quedado

ocultas en una zona boscosa mientras él y Huaiqui revisaban que era seguro pasar por el puente, lo que claramente no fue así. Por esta razón los demás no fueron heridos ni detenidos en esos instantes. Narró que en el hospital de Río Bueno estuvo desde el 15 de septiembre hasta las 10:00 horas del 3 de octubre de 1973, oportunidad en que los Carabineros lo sacan y lo llevan detenido hasta la cárcel del sector Isla Teja. Inquirió que lo vivido en sus detenciones e interrogatorios, el consejo de guerra que se realizó y que finalmente se fue a Argentina. Finalmente, ante la pregunta del Tribunal, respondió que un Carabinero de Riñinahue de apellido Ávila, que luego se fue a la 3° Comisaría de Lago Ranco, estuvo involucrado el día en que les dispararon. A este lo acompañaban otros carabineros, pero desconoce sus identidades. Contó que a Roberto nunca más lo volvió a ver y supo que unos tres o cuatro meses después que el río lo devolvió, pues habría caído en un pozo originalmente. Por lo que supo, a Roberto lo enterraron sus familiares a la orilla de la playa del Río Nilahue, cerca de la cascada que existe, aunque no está seguro de esto, pues solo fueron comentarios que escuchó.

A.3. CARLOS GERMÁN OÑATE JARAMILLO (26 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 360 a fs. 362 y de fs. 461 a fs. 462 (tomo II);

En declaración extrajudicial de fecha 06 de noviembre de 2015, rolante de fs. 360 a fs. 362 (Tomo II). Expuso que perteneció a Carabineros de Chile y para el año 1973 estaba trabajando en el Retén Riñinahue, de donde fueron evacuados después del 11 de septiembre de 1973, quedándose en Llifén. Recordó que para llegar a Riñinahue había tres formas de hacerlo; a vapor y/o bote, a caballo, a pie y en avioneta. Él se trasladaba regularmente a vapor o a caballo, en avioneta solo recuerda que una vez se subió, que fue para cuando

erupcionó el volcán. Siguiendo con su relato, dijo que durante el tiempo que estuvo en Llifén, ese sector también llegaban avionetas, las que se estacionaban en el sector "Chollinco" donde había un aeródromo que era de don Edmundo Provoste, ahí había por lo general 4 o 5 avionetas particulares. Puntualizó que en Llifén no había ninguna base de militares o por lo menos él solo los veía pasar, ellos pasaban al balseadero de Calcurrupe, que había para ese tiempo cerca de Llifén. Además, en el sector de Arquihue había un potrero que era de la familia Lacoste, donde también vio que aterrizaban aviones, inclusive remontándose a esos años, pudo recordar que tras el 11 de septiembre de 1973, estando trabajando en Llifén, junto a unos colegas salieron a trabajar al sector Arquihue, estaban por allá cuando vieron pasar unos aviones de la aviación, los que empezaron a disparar. Se comentó que le dispararon a un grupo de terroristas. Rememora este hecho, ya que inclusive por temor a que les dispararan a ellos se tuvieron que esconder por la cordillera, pero no sabe si estos hechos se relacionan con la persona por la que se le consultó, que corresponde a Roberto Huaiqui Barría, pues ese nombre nunca lo había escuchado. Aseveró que mientras trabajó en Llifén y Riñinahue, nunca observó que sus colegas o los jefes de cuarteles trabajaran con los militares, así que él solo cumplió funciones netamente policiales. Finalmente indicó que el hecho por el cual tras el 11 de septiembre de 1973 a él y a sus colegas Mamerto Ávila Gonzalez, Feliciano Curiñanco y el jefe de Retén, Carlos Galindo Ruiz; los evacuaron y fue porque se supo que para el sector de Riñinahue, específicamente el Retén, iba a ser atacado por personas que iban subiendo armadas. Quien declaró se fue a Llifén y otros se fueron a Lago Ranco, trasladándolos a todos en dos vapores que dispusieron con dicho fin. Este Retén (Riñinahue) permaneció sin Carabineros por aproximadamente un año, pero

no recordó bien, ya que volvió muchos años después de que ese Retén volviera a funcionar.

En declaración judicial de fecha 17 de agosto de 2016, rolante de fs. 461 a fs. 462 (Tomo II). Musito que para el año 1973 se encontraba trabajando en el Retén Riñinahue con el grado de Cabo 1°, siendo el jefe del Retén el Señor Carlos Galindo , sin embargo ocurrido el golpe militar fue levantado el retén y el personal distribuido entre Lago Ranco y Llifén, correspondiéndole integrar esta última unidad. En cuanto al hecho investigado por este Tribunal, afirmo que nada puede decir, que no conoció a la víctima Roberto Huaiqui Barría ni conoce las circunstancias en que éste falleció. Se le dio lectura al testigo el hecho relatado por Carlos Galindo a fs. 450 y siguientes en autos (disparo de civiles contra supuestos saqueadores), a lo cual expreso: “No participé de ese hecho ni recuerdo haber escuchado sobre ese tema”. Espeto que si el jefe del retén u otro colega tuvieron conocimiento de un hecho de esa envergadura debieron informarlo a la autoridad o a los tribunales, pero no recuerda que se haya comentado nada por el estilo. Descargó que no era normal que un Carabinero haya visto un hecho tan grave y se haya hecho el desentendido así como tampoco era normal, ni siquiera en esa época conflictiva del país, que la gente hiciera justicia por mano propia. Lo que sí escuchó es que un grupo de personas trataban de cruzar hacia Argentina por el sector de Nilahue e intentaron robar la casa del Señor Arturo Ávila que vivía frente a la casa de Reinerio Vásquez. Continuo que en ese momento Arturo Ávila no estaba, pero sí su cuidador que además era sastre, ignora su identidad, y este les habría disparado para ahuyentarlos. No supo si se trataran de las mismas personas que investiga el Tribunal. Posteriormente se le consultó al testigo sobre la dotación del Retén Llifén, respondiendo que estaba el Sargento 1°

Cereceda, el Cabo Galindo, el Cabo Juan Carrasco, un carabinero de apellido Salgado, otro de apellido Troncoso y quien declaro. No recordó a nadie más, aunque posiblemente el Retén debe haber estado integrado por unas dos personas más. Finalmente se le consultó al testigo si supo de avionetas particulares armadas que fueran usadas para perseguir a los socialistas que intentaban cruzar hacia Argentina, a lo cual respondió que vio avionetas en Riñinahue, en la pista de aterrizaje en el Fundo Ranquil, también en la que había en el Fundo Chollinco de Llifén, pero jamás supo que las avionetas civiles se usaran con ese fin persecutor.

A.4. SERGIO SEGUNDO CALFULEF TRAILLANCA (16 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 484 a fs.487 (tomo II) y de fs. 722 a fs. 725 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 3 de agosto de 2016, rolante de fs. 484 a fs. 487 (Tomo II), copia de fs. 715 a fs. 718 (tomo III). Relató que para el año 1973 tenía 16 años de edad, por lo que vivía con su grupo familiar en calle Concepción de la comuna de Lago Ranco y trabajaba en un local llamado “La Bodega de la Estación”, el que estaba administrado por Juan Daniel quien era militante del Partido Socialista, por lo que para poder trabajar había que inscribirse en la Juventud Socialista. Informo que una vez ocurrido el golpe militar, llegó a su hogar Ricardo Manzano Castillo y Sergio Duhalde (ambos fallecidos), quienes señalaron que si los volvían a ver los matarían y debido a lo anterior, con la finalidad de resguardar sus vidas, emprendieron camino hacia Argentina con su hermano Eliel Calfulef, Víctor Zabala, Evaristo Vera, Héctor Angulo, Jorge Furnier, Manuel Furnier, los profesores Carlos Velásquez, Carlos Bórquez y Carlos Ancacura, alias “El Calucho”, Luis Illera Ancao, otro sujeto de apellido Fuentes y

Roberto Huaiqui Barría; saliendo alrededor de las 10 de la mañana del día 11 de septiembre de 1973 hasta Riñinahue y posteriormente a Chihuio, cercano a la frontera. Encontrándose en ese lugar con el jefe de estación de Lago Ranco, de nombre Raúl Poblete, quienes también estaba esperando junto a otras personas que no conocía, cruzar hacia Argentina, pero por las condiciones climáticas y la nieve que había en el lugar, se tuvieron que regresar el día 16 de septiembre de 1973 hasta la localidad de Arquihue, tomando en ese lugar un bus que iba hacia Llifén, junto a Víctor Zabala y su hermano Eliel. Adoso que al llegar a Llifén, alrededor de las 9:00 horas, en un control vehicular realizado por cuatro carabineros, frente al Retén Llifén, entre los que recordó a Mamerto Ávila González y Juan Sandoval, quienes subieron al bus en compañía de los detenidos Carlos Bórquez y Carlos Velásquez, quienes se notaban muy golpeados, indicando a ellos sus identidades, siendo detenidos en forma inmediata con golpes de sus fusiles, bajándolos del bus e ingresándolos a la guardia armada, a la entrada del Retén Llifén. Indico que los golpearon en reiteradas oportunidades con unas gomas y pinchazos con los fusiles, finalmente a golpes de puños y pies, recordó que les colocaron una bolsa de nylon en la cabeza, con la finalidad de quitarles oxígeno, consultándoles dónde tenía armamento. Difundió que de los cinco funcionarios que había en el Retén, quien fue más cruel en sus torturas fue Mamerto Ávila. Dijo que alrededor de las once o doce del día, lo pasaron a los calabozos que estaban al interior del Retén junto a su hermano y Víctor Zabala, instante en que llegó nuevamente Mamerto Ávila y les señaló a él y su hermano, que uno de los dos iba a morir, para que se despidieran, tomando la determinación el declarante que tenía que morir, porque su hermano Eliel tenía 13 años. Señaló que lo sacaron en una camioneta, lo trasladaron hasta el sector Los Cerrillos, a

dos kilómetros del camino que va hacia Futrono, golpeándolo con golpes de pies y un churro de goma. En ese lugar había cuatro funcionarios de los cuales solamente ubica a Juan Sandoval y Mamerto Ávila, quien señalaba en todo momento que el declarante era Santana, que dijera la verdad y no se cambiara el nombre. Continúo haciendo un relato de sus detenciones y torturas sufridas. Posteriormente, preguntado por Roberto Huaiqui Barría, afirmo que iban juntos en dirección a Chihuo, paso unos kilómetros del Río Nilahue, un señor de apellido Vásquez, quien vivía en una casa de dos pisos a un costado del puente Nilahue, empezó a disparar junto a otros civiles hacia ellos, por lo tanto el grupo se separó. Roberto Huaiqui junto a José Jovin Oporto regresaron en dirección a Lago Ranco. Ignora qué les pasó a ellos, hasta que José Jovin Oporto llegó a la cárcel de Valdivia, herido en su espalda con impacto de bala y les contó lo sucedido. Anexó que en el año 1980, estuvo detenido por hurto en la cárcel de Río Bueno, con un señor de apellido Rivas, quien se identificó como quien había participado en los hechos en que murió Roberto, por lo tanto se hizo amigo de él con la finalidad de obtener información de lo sucedido, quien con el tiempo le manifestó que para el 16 de septiembre de 1973, había participado en la balacera en la que falleció Roberto, indicando que Vásquez habría matado a Roberto Huaiqui, quien una vez recibido los impactos de bala se tiró al Río Nilahue y José Jovin Oporto también se tiró con la finalidad de rescatar a su compañero, logrando sacarlo hacia la orilla del río, pero como llevaba tantos impactos, soltó a Roberto y se lo llevó la corriente. No obstante a que el mismo Rivas, al momento en que José Jovin sacaba a Roberto también le dispararon por la espalda, a quien lo fueron a buscar a la orilla del río, sacándolo a una pampa, lo amarraron de un árbol, comenzaron a golpearlo junto a 20 personas que participaban en la búsqueda. Según lo comentado por

Rivas, este grupo pertenecía a Patria y Libertad, de los cuales recordó que Gilberto Ancacura en una oportunidad le comentó que después que se llevaron detenido a José Jovin, siguieron con la búsqueda del cuerpo de Roberto Huaiqui, mencionando que lo encontraron cerca del lago, sacándolo hacia la pampa, instante en que un tío que participó en la búsqueda se hizo cargo de él, ignorando el lugar donde lo enterró.

En declaración judicial de fecha 24 de abril de 2018, rolante de fs. 722 a fs. 725 (tomo III). Ratificó su declaración extrajudicial y además de ello agregó que en la golpiza de José Jovin Oporto y la muerte de Roberto Huaiqui también participó Mamerto Ávila y que los disparos no venían de las avionetas, los disparos fueron realizados por los civiles y Carabineros (entre ellos Mamerto Ávila), que se encontraban en el puente, desconociendo ahora los nombres de los otros Carabineros. A continuación detalló algunos datos respecto a personas mencionadas en su declaración extrajudicial y respecto a Roberto Huaiqui, dijo que este era su primo, hijo de un primo de su padre Sergio Calfulef Huaiqui. Sumo que su primo Roberto emprendió viaje a Argentina pues era socialista y decidió arrancar después del golpe ya que temía por su vida. A la pregunta que le hizo el Tribunal, aseveró que no recuerda a ningún José Oporto Del Río, pero el que sí iba con ellos era Jovin Oporto Del Río (actualmente en Argentina), quien era socialista e iba con Roberto Huaiqui Barría cuando los emboscaron, pero no pudo salvarlo pues él igual estaba herido de bala. Expreso que decidieron emprender camino hacia Argentina a pesar de estar en invierno y con condiciones climáticas adversas, pues dos profesores del colegio les advirtieron lo que les sucedería, que si se quedaban los iban a matar los militares, los Carabineros, don Ricardo Manzano o don Sergio Duhalde. El declarante pensó que si antes del golpe militar,

don Sergio Duhalde había sido capaz de dispararle a su primo quedando en la impunidad, después de lo sucedido su vida corría peligro. Pero después de lo que pasaron y lo difícil que fue el viaje se arrepintió de hacerlo. Narró que el circuito que recorrieron desde que salieron de Lago Ranco el 11 de septiembre de 1973 hasta Chihúio fue: Lago Ranco a Riñinahue, desde ahí salieron una noche hasta un complejo maderero que queda antes de llegar a Chihúio, en un lugar llamado Arquihue y les dijeron que esa era la frontera, desde ahí regresaron pues el frío y el hambre no los dejó seguir. Para alimentarse en el trayecto hasta Chihúio, pasaron a la casa de un señor mayor en el Lago Maihue y este les dio agua, harina tostada y los fue a dejar al otro lado del lago en bote, ese señor era conocido de Héctor Angulo. Desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la noche del 15 de septiembre de 1973, dormían donde los encontraba la noche, una vez al lado de un estero, en una cueva y arriba de los árboles amarrados para no caerse. Preguntado por don Raúl Poblete, dijo que este era miembro del Partido Comunista y jefe de la estación de trenes de Lago Ranco y que cuando llegaron a Chihúio este estaba allí, pero ellos siguieron su camino y lograron llegar a Argentina. Espeto que no conocía a las personas que estaban con don Raúl Poblete, pero después supo que en el grupo había dos hermanos de apellido Urrutia del sector de Cayurruca, de la comuna de Río Bueno, los que después estuvieron presos con el declarante en Valdivia. Manifestó que cuando estuvo detenido por Carabineros de Llifén fue interrogado y confundido con Belarmino Santana, era este quien peleó con Mamerto Ávila, cuando ese Carabinero trabajaba en Lago Ranco. Respecto a los hechos que relató en su declaración y que dicen relación con la muerte de Roberto Huaiqui Barría, inquirió que la fecha aproximada en que ocurrió la emboscada debe haber sido el 15 de septiembre de

1973, pues de regreso el grupo se separó ese día. Su grupo estaba compuesto por su hermano (Eliel Calfulef), Víctor Zabala y quien declaró. Se fueron con dirección a Llifén en bus, el 16 de septiembre de 1973 en la mañana, pues se quedaron a pasar la noche en Arquihue, con la intención de tomar el bus el día 16 temprano, mientras que el grupo en que iba su primo Roberto Huaiqui se fue Arquihue el mismo día 15 de septiembre de 1973, con dirección a Lago Ranco por el camino que une a Lago Ranco con Riñinahue, caminando. Lo ocurrido en el río Nilahue lo supo por declaraciones de personas con las que estuvo detenido, pues él no estuvo en ese lugar cuando murió su primo. Aseveró que José Jovin Oporto le contó que pasando por el puente Nilahue los emboscaron un grupo de aproximadamente 15 personas, entre funcionarios de Carabineros (entre ellos Mamerto Ávila), algunos civiles, todos los que dispararon a Roberto Huaiqui y José Jovin Oporto. A Roberto se lo llevó el río y a José Jovin lo detuvieron y se lo llevaron herido de bala para torturarlo. Contó que la emboscada se produjo a la altura del puente, o sea, en el puente mismo, que el nombre del Señor Vásquez es Nello Vásquez, trabajador del predio Nilahue y el otro civil que recuerda es don Osvaldo Rivas, también trabajador del predio de Nilahue, fallecido actualmente. Aseguró que solo supo de la presencia de Carabineros, no de Militares y que de los Carabineros que participaron, solo recordó a Mamerto Ávila. Reiteró no haber estado en la emboscada y que la información que maneja le fue entregada por José Jovin Oporto, sobreviviente de la misma. Respecto a las avionetas, dijo que todos los días que estuvieron en su huida a Argentina, vio avionetas particulares sobrevolar la zona y se escuchaban disparos a lo lejos de las avionetas particulares sobrevolando la zona y escuchaba disparos a lo lejos. Urdió que según los dichos de José Jovin Oporto, los disparos que mataron a Roberto

Huaiqui y que también recibió él, no provenían de las avionetas, provenían de carabineros y civiles, que participaron en la emboscada. Expresó que el grupo se separó el 15 de septiembre de 1973, pues Roberto Huaiqui y José Jovin Oporto bajaron de Arquihue el mismo 15 de septiembre, mientras que los demás permanecieron arriba hasta el 15 de septiembre de 1973, fecha en que bajaron temprano para tomar un bus con dirección a Llifén, es por eso que no estuvo en la emboscada y tampoco pudo volver a ayudar a su primo Roberto Huaiqui. Agregó que don Osvaldo Rivas, del sector Riñinahue, también era trabajador del predio de Nilahue y participó de la emboscada donde murió su primo Roberto Huaiqui. Según lo que supo, don Andrés Montecinos fue la persona que les sirvió de guía para llegar hasta Chihúio, tiene entendido que después de eso, fue torturado para que dijera hacia dónde arrancó la gente que allí se encontraba y luego de las torturas fue arrojado vivo desde un helicóptero. Por último indicó que la persona que sabe cómo sucedieron los hechos, pues estaba junto a su primo cuando murió, es José Jovin Oporto, don Nello Vásquez y Mamerto Ávila.

A.5. LUIS RUBÉN DÍAZ ZUMELZU (17 años de edad a la fecha de la época), quien declaró de fs. 488 a fs. 489 (tomo II) y de fs. 813 a fs. 814 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 3 de agosto de 2016 rolante de fs. 488 a fs.489 (tomo II), copia de fs. 804 a fs.805 (tomo III). Informo que para el año 1973 tenía 17 años, por lo tanto vivía junto a su madre en la comuna de Lago Ranco. Desarrolló que en esa época trabajaba en la empresa agrícola ECA, la cual era de propiedad del Estado y era simpatizante socialista. Debido a lo anterior, cuando ocurrió el golpe militar, el día 11 de septiembre de 1973, los trabajadores de la comercial huyeron hacia Argentina, entre los cuales recuerda a

José Jovin Oporto, Sergio Calfulef, Carlos Ancura Antihual, Eliel Calfulef, Emilio Huaiqui, Víctor Zabala, Evaristo Vera, Héctor Angulo, Jorge Furnier, Manuel Furnier, los profesores Carlos Velásquez y Carlos Bórquez, Luis Higuera Ancao y Roberto Huaiqui Barría, Raúl Poblete, quien era el jefe de estación, Tenchi Rudolf, entre otros que no recordó. Relató que en la tarde del 11 de septiembre de 1973, llegaron hasta Riñinahue, lugar donde pernoctaron, para seguir su camino hasta llegar el día 12 de septiembre al Lago Maihue, lugar donde aviones al parecer civiles tiraban bombas, por lo tanto el grupo se dispersó, juntándose en la tarde donde un lugareño de apellido Rozas, al día siguiente los ayudó a cruzar el lago, siguiendo su camino hasta el complejo maderero Arquihue, precisando que Roberto Huaiqui aún seguía en el grupo. Al llegar a Río Blanco, se devolvieron debido a que había mucha nieve, por lo tanto iniciaron su proceso de regreso hacia Arquihue, permaneciendo en un refugio, dispersándose el grupo para tratar de regresar a Lago Ranco. El declarante regresó con Carlos Ancacura, Juan Figueroa, Gualo Villagrán, tomando la ruta de Arquihue hacia Llifén, logrando cruzar por el sector de Calcurrupe por el desagüe del río Nilahue, llegando a Ensenada, donde un señor llamado Juan Aguilar, quien los cruzó en bote hasta Nilahue, regresando a Lago Ranco un 14 de septiembre de 1973, a su domicilio. Lugar donde fue detenido por parte de Carabineros, entre los que recuerda uno de apellido Carrasco y Villegas, del Retén Lago Ranco, quienes lo trasladaron hasta la unidad policial, comenzando las torturas por parte de los funcionarios policiales, recordando que uno de ellos fue Lopetegui. Respecto a Roberto Huaiqui con José Jovin Oporto, divulgó que este último llegó detenido a la cárcel de Valdivia, quien comentó que ellos venían bajando de la cordillera y al llegar al puente Nilahue, había guardias blancas, que se trataban de lugareños con armas, quienes

dispararon en contra de ellos, hiriendo de muerte a Huaiqui Barría y posteriormente hirieron a José Jovin Oporto, mencionando que en esa oportunidad, habrían participado dos personas del grupo que logró reconocer, uno de apellido Ávila, Rivas y Vásquez. Anexó que fueron detenidos por los Carabineros del Retén Riñinahue. Destaco que posterior a este hecho, la familia lo salió a buscar, sin resultados positivos, ya que el cuerpo nunca apareció por ese sector. No obstante los lugareños si veían a alguna persona extraña en el sector, llamaban en forma inmediata a Carabineros.

En declaración judicial de fecha 11 de febrero de 2019, rolante de fs. 813 a fs. 814 (Tomo III). Ratificó su declaración extrajudicial pero rectificó que el 12 de septiembre de 1973, él regresó a Lago Ranco, ya que lo tomaron detenido el 13 de septiembre de 1973; y entre el 13 y el 14 de septiembre fue trasladado a Río Bueno. Allí estuvo detenido una noche y al día siguiente lo trasladaron a Valdivia. Respecto a José Jovin Oporto, Sergio Calfulef, Carlos Ancacura, Eliel Calfulef, Emilio Huaiqui, Víctor Zabala, Evaristo Vera, Héctor Angulo, Jorge Furnier, Manuel Furnier, los profesores Carlos Velásquez y Carlos Bórquez, Luis Igüera, Raúl Poblete y Roberto Huaiqui; dijo que efectivamente conocía a todas esas personas, que todas ellas formaban parte del grupo con el que arrancaron a Argentina. Aclaró que decidieron huir a Argentina porque les dijeron que los iban a detener por simpatizar con el Partido Socialista. Contó que pasaron a Riñihue a un asentamiento llamado “Salvador Allende”, allí los alimentaron y luego siguieron camino a Argentina. De regreso pasaron la desembocadura del lago y un caballero de nombre Juan Aguilar, los trasladó hasta el sector Nilahue. Preguntado por Raúl Poblete, el jefe de estación, dijo que no recuerda otro nombre o apellido de este y que estaba casado o conviviendo con la señora Tenchi Rudolph. Afirmando que no

recuerda el nombre del lugareño de apellido Rozas que los ayudó a cruzar el Lago Maihue en bote, solo supo que después lo tomaron detenido los militares por haber hecho ese traslado. No recordó a otras personas que los hayan ayudado en su recorrido. Con respecto a la ubicación del Río Blanco, responde que este se situaba saliendo como a 7 km de Arquihue hacia Chihuío. Preguntado por los nombres de lugareños que conformaban la guardia blanca en la época que acaecieron los hechos, apuntó que recuerda un tal Ávila, Vásquez y un Rivas, pero no sabe sus nombres completos ni los nombres de los otros integrantes. Pero eso se lo contaron, porque ellos no pasaron por ese lugar, pasaron por la orilla del lago. Informó que el puente Nilahue queda sobre el río del mismo nombre, a unos 50 metros antes del salto Nilahue. Preguntado por la fecha exacta del homicidio de Roberto Huaiqui, invocó que no lo sabe con certeza, pues estaba detenido cuando se enteró de su presunto homicidio. Respecto a si vio o supo si había militares en la zona cordillerana del Lago Ranco posterior al 11 de septiembre de 1973, dijo que sí había militares, específicamente en la zona de Arquihue y supo que había un Capitán, pero no recordó su nombre, apellido y/o seudónimo. No tiene más antecedentes sobre la muerte de Roberto Huaiqui.

A.6. RUBÉN HILARIO HUAQUI CARRILLO (23 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 490 a fs. 491 (tomo II);

En declaración extrajudicial de fecha 3 de agosto de 2016, rolante de fs. 490 a fs.491 (tomo II). Evidenció que es primo de Roberto Huaiqui, quien pasado el golpe militar salió desde Lago Ranco junto a otras personas con destino a la cordillera, tratando de huir del sector, debido a que era amigo de un inspector del tren de apellido Poblete, quien tenía militancia del Partido Comunista. Infirió que días después, alrededor de las 14:00 horas, sintió llantos en la casa de

Roberto, por lo tanto se trasladó a ese lugar, percatándose que al llegar a la casa de su tío Emilio Huaiqui Calfulef, se encontró con el Capitán de Puerto de la época de apellido Culipan, vestido de Carabinero siendo que era marino. Al ingresar a la casa se encontró militares, quienes tomaban una declaración a Nano Ñancucheo Calfulef y su tía Violanda Barría, quien lloraba por la noticia de su hijo, instante en que el Capitán de Puerto le hizo una señal para que se retirara de la casa, ya que lo conocía con anterioridad, por lo que regresó en forma inmediata a su hogar que estaba a unos 300 metros de distancia. Animo que días después, trataron de salir a buscar a Roberto pero no fueron, porque llegó un señor llamado Dago Ruiz Chenque, quien señaló que la situación en la cordillera estaba muy complicada, por lo tanto se desistió de la búsqueda. No obstante lo anterior, rememoro que pasado un mes lograron subir hasta el sector del Arenal, por medio de una embarcación de Celin Lavado, recordando que la tripulación eran José Pacheco, los padres del declarante y su señora, entre otros que no recordó, logrando andar aproximadamente 500 metros, momento en que salió una señora que vivía en el lugar, suplicándoles que no subieran porque estaba muy peligrosa la situación hacia arriba, regresando nuevamente a Lago Ranco, por el mismo medio de transporte. Sustento que en esa época en el lugar donde le dispararon a Roberto, había un asentamiento del sector de Riñinahue y ellos más la vecindad habrían sido los responsables de los hechos que sucedieron, conociendo solamente a una persona de apellido Ramírez (actualmente fallecido).

A.7. JULIÁN ÁVILA RIVEROS (40 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 551 a fs. 552 (tomo II) y de fs. 645 a fs. 646 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 2017, rolante de fs. 551 a fs.552 (tomo II). Expuso que para septiembre del año 1973, era

presidente del asentamiento “El encanto” del sector de Ranquil, enterándose del golpe militar por un amigo que vivía en Lago Ranco. Respecto al homicidio de Roberto Huaiqui, señaló que este era militante del Partido Socialista, quien una vez ocurrido el golpe militar tuvo que salir arrancando desde Lago Ranco junto a José Jovin Oporto, un señor de apellido Poblete con su hijo, los profesores Velásquez, Horacio Godoy, una señora de apellido Rudolph, entre otros que no recordó. Decantó que en esa fecha tenía una casa a orillas del Lago en el sector de Ranquil, por lo tanto estas personas le decían al cuidador que lo conocían y les dio albergue para refugiarse por las noches. Ellos querían cruzar la cordillera con la finalidad de llegar a Argentina, no obstante se tuvieron que dispersar del grupo Roberto Huaiqui y José Jovin Oporto, quienes tuvieron la intención de regresar a Lago Ranco y comenzaron el descenso hacia la ciudad. Estimo que el Sargento Cereceda del Retén de Llifén, agrupó a los pobladores cercanos del Puente Nilahue, incluso del asentamiento donde trabajaba el declarante, de todo lo cual se enteró por los asentados que dirigía, recordando que la orden que se les dio a los pobladores era que si veían a una persona extraña, tenían la autorización para matarlos. Pasada unas horas de la reunión divisaron a Huaiqui y a Oporto, quienes al ver a los pobladores, Huaiqui se tiró al río, recibiendo gran cantidad de disparos, de parte de Joaquín Garcés, Sixto Asenjo, quien andaba con un revolver, el hermano de Gastón Soto (alcalde de Lago Ranco) y posiblemente Isaías Vásquez, quien era pinochetista, Valdovino Rivas, quien quiso matar a José Jovin Oporto, pero Germán Campos se lo impidió, Quirino Arriagada y su señora (todas las personas mencionadas, están actualmente fallecidas). Musito que en esa reunión con el Sargento en el puente Nilahue, estuvo el primo de Huaiqui de nombre Hernán Leal Oporto, quien en la actualidad viviría en el sector de Ranquil.

Aclaró que a José Jovin Oporto le dispararon con un rifle en la espalda, quedándose en un risco hasta que llegó la misma gente que estaba en el puente, quienes se lo entregaron a unas personas que piloteaban un avión, saliendo rumbo desconocido con este. Respecto al cuerpo de Huaiqui Barría, indicó que al parecer lo encontraron a 1 kilómetro del puente hacia abajo, ignorando si sus familiares lograron sepultarlo en algún lugar.

En declaración judicial de fecha 27 de noviembre de 2017, rolante de fs. 645 a fs. 646 (tomo III). Ratificó íntegramente la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos, pero aclaró que el golpe lo encontró en Lago Ranco, en el sector del pueblo, en esa época, a su señora le tomaron la escuela y ella tuvo que salirse de ahí e irse a otro lugar, mientras que él quedó solo con sus 4 hijos y una empleada. Respecto a lo que se le preguntó, respondió que el Sargento Cereceda de Llifén, dio la orden de citar a todos los pobladores del asentamiento a una reunión en el puente, desconociendo la cantidad de personas que asistieron, ya que no estuvo en la reunión, pero se enteró de lo sucedido por dos asentados, uno de ellos llamado Hernán Daniel Leal Oporto. Este le contó porque una de las víctimas era su primo (Roberto Huaiqui). Añadió que cuando sucedió el golpe, todos en el sector querían arrancar, todos eran socialistas. Le consta que Roberto Huaiqui arrancó con José Jovin Oporto y otras personas, entre ellos el Señor Poblete, quien era conductor. Expresó que a todos los mencionados en su declaración eran conocidos suyos, menos la señora Rudolph. Señaló que la ruta que supuestamente siguió este grupo fue Linahue, luego Ropumeica y finalmente Argentina. Desconoce si el grupo llegó a Argentina en su totalidad, supo a los años que la señora Rudolph se devolvió y el Señor Poblete llegó a Argentina pero desconoce el paradero del

resto. Posteriormente supo que Oporto y Huaiqui volvieron a Lago Ranco ya que en su peregrinar a Argentina, nadie los ayudaba ni les daba comida por ser socialistas. Preciso que Huaiqui una vez descubierto por las personas que estaban en el puente, se tiró al río ya que era muy bueno para el agua. A Oporto le dispararon, desconoce quién lo hizo. Sustentó no recordar los nombres de los pobladores que se reunieron en el puente Lanalhue con el Sargento Cereceda y tampoco supo si fue acompañado por otros uniformados. Desconoce cuál era el papel que jugaba el avión que estaba sobrevolando el sector, pero en ese momento se llevaron a José Jovin Oporto, a quien le dispararon las personas del puente. Hernán Leal nunca mencionó que desde la avioneta se realizaron disparos.

A.8. HERNÁN DANIEL LEAL OPORTO (20 años de edad a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 553 a fs. 554 (tomo II) y de fs. 603 a fs. 605 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 2017, rolante de fs. 553 a fs. 554 (tomo II). Relató que para 1973 se encontraba trabajando en el asentamiento “El encanto” de Riñinahue, desempeñándose como tractorista, recordando que pasado el golpe militar llegó un Carabinero de apellido Cereceda, quien venía del Retén Llifén, comunicando que desde ese momento quedaban bajo sus órdenes, debiendo trasladar a trabajadores del asentamiento hasta el puente Nilahue, para que vieran cómo atrapaban a los posibles extremistas. Cimentó que una vez que llegaron al puente, llegó Carabineros de Riñinahue y Llifén, comenzando la búsqueda de los posibles extremistas. Evidenció que mientras se encontraba en el puente, Carabineros y un avión que sobrevolaba el perímetro, ubicaron a José Jovin Oporto primero, quien iba al parecer herido de su

espalda, siendo testigo desde el puente Nilahue junto a otras personas que se encontraban de civil, pero portando revolver en el cinto, cuando Roberto Huaiqui se lanzó al río a unos 60 metros antes del salto, momento en que las personas que se encontraban a su lado comenzaron a dispararle, se sentían los impactos en el agua y Roberto Huaiqui se quiso tomarse de una piedra, instante en que recibió un disparo, cayó al agua de espalda y pasó bajo el puente, posteriormente bajo el salto, su cuerpo iba sin vida. Dijo que las personas que dispararon a Huaiqui, eran lugareños del sector y de Llifén, quienes usaban sombreros beige o blanco grandes, ignorando sus identidades. Pasado estos hechos, se dirigió a sus tractores junto a Tito Meza Jaramillo, quien vivía cerca del sector Ignao. Preciso que al costado del camino de ese tiempo había un potrero largo, el cual servía como cancha de aterrizaje para el avión que sobrevolaba el área y el cual trasladó a José Jovin Oporto con rumbo desconocido. Afirmando que de los Carabineros que andaban en ese momento, no pudo precisarlo, porque eran Carabineros recién egresados, recordándolo porque había hecho el servicio un año antes que él en Punta Arenas en el año 1971 y eran originarios de la comuna de San Carlos. Afirmando que tiempo después, el cuerpo de Roberto Huaiqui se encontraba en el salto Nilahue y al parecer con el tiempo estaban solamente los huesos, producto de ello, su primo Alonso Barriga Leal, se dirigió a hablar con un señor de que había sido juez del sector, quien le manifestó que dejara el cuerpo en el lugar que estaba, para que no se metiera en problemas.

En declaración judicial de fecha 12 de julio de 2017, rolante de fs. 603 a fs. 605 (tomo III). Ratificó su declaración prestada ante la Policía de Investigaciones. A la pregunta del Tribunal, contestó que él estaba físicamente en el trabajo, en el asentamiento “El Encanto” de Riñinahue. Cereceda llegó solo en

vehículo, reunió a todos los que estaban, eran más de 20 personas en el asentamiento y esto debe haber sido como a las ocho y media de la mañana. Dijo que andaba con un fusil SIG y casco de guerra, les preguntó quién era el presidente de Chile y les indicó que los cuatro miembros de la junta. En ese momento colocó su arma al frente y les dijo que si alguien no seguía las órdenes podía abrir fuego, que estaban en pie de guerra y que tenía todas las atribuciones. Les indicó que suban al tractor para que vieran cómo iba a tomar a “esos”. Comunicó que quienes estaban en ese lugar eran Germán Campos y Waldo Rivas, ambos fallecidos, y tuvieron que ir a ver esto en el coloso del tractor. También se les dio la orden de no hablar nada. Ante la pregunta del Tribunal, respondió que no recuerda a nadie del Retén Llifén, de quienes se le leyó en ese momento. Sugirió a su relato que Cereceda habló de extremistas tales por cuales, que de “El Encanto” fueron hasta el puente Nilahue y que Meza también puede que haya estado, no se acuerda muy bien. Estaba el refuerzo que llegó de abajo, llegaron de los dos retenes. Sumo haber visto más o menos unos 10 carabineros que era una cadena de tiradores, orillando un zanjón que había un poco más allá. A lo que se le preguntó, afirmó que Roberto Huaiqui hizo el servicio cuando él, estuvo en Punta Arenas y lo conocía. Lo vio en el puente Nilahue cuando iba una persona nadando. Seguramente quería cruzar el río. Aseveró que este quiso tomarse de una piedra y ahí fue cuando le dispararon. Cereceda estaba en ese momento. Eran varios los uniformados que disparaban. El cuerpo se fue por el agua hasta el salto. Respecto de los del retén Riñinahue, no pudo confirmar si andaban. Que vio a Carabineros, como había hecho el servicio, los sabría distinguir. Luego se llevaron al que tomaron, a Oporto, que seguro estaría en el mismo lugar en el matorral. A José Jovin Oporto no lo conocía. Lo atraparon

porque andaban los dos ahí y dijeron que a Oporto lo llevarían en avión. No maneja si los civiles andaban con los suboficiales o vivían allá. No supo dónde habrá quedado el cuerpo de Roberto Huaiqui, se decía que había quedado en el salto, tampoco supo si fue enterrado, pero de ser así cree que lo sabría. Añadió que militares anduvieron en jeep porque vio pasar las patrullas que recorrían todo. No supo si dispararon del avión, tampoco supo si Tito Meza fue testigo pero puede decir que cuando Cereceda habló tendría que haber estado porque era tractorista, siempre andaban juntos, trabajaba con él, pero no lo recuerda en el puente. Apuntó que nunca se comentó nada más de lo sucedido, que en ese tiempo él vivía con sus padres. Nunca más vio a Cereceda y nunca más llegó otro oficial que hiciera lo mismo que hizo este. Se hizo el informe y se encontró que toda era gente trabajadora.

A.9. DINA URIA HUAQUI BARRÍA (16 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 109 a fs. 110 (tomo I) y de fs. 632 a fs. 634 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero de 2014, rolante de fs. 109 a fs.110 (tomo I). Narró que para el año 1973, ella residía junto a sus padres Emilio Huaiqui Calfulef, Violanda Barría Santana y sus hermanos en la ciudad de Lago Ranco. Tenía 16 años de edad y sus hermanos José (18 años), Nériida (20 años), Ismael (16 años), Roberto (17 años) y Eliel (12 años). Aquilató que una vez producido el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, su padre era dirigente de agricultores y su hermano Roberto, debido a que no había trabajo, les pidió permiso a sus padres para ir a trabajar a Argentina. Este viaje lo estaba realizando con otras personas y una de ellas se llamaba José Jovin Oporto. Su padre lo autorizó y luego de unos días, al parecer el 20 de septiembre de ese año,

llegó hasta su casa personal de Carabineros de Chile de Lago Ranco, quienes le informaron a su padre que habían matado a su hermano, en el sector del puente del río Nilahue, donde supuestamente iban cruzando y que desde una avioneta le habrían disparado, impacto que dio en su espalda y cayó al río, siendo su cuerpo arrastrado por las aguas río abajo. Ante esta noticia, sus padres quedaron muy mal internamente y la única salida fue que siguieron trabajando en la agricultura. No obstante la historia de su hermano, su familia cayó en una depresión muy fuerte y siguió siendo víctima de abusos por parte de Carabineros y militares, quienes en más de una oportunidad, se dirigieron a su casa en búsqueda de armas y destrozaron todo en la casa. Afínco que en una ocasión se llevaron todas las cosas y también encerraban a su padre en una habitación para torturarlo a golpes, pese a que su padre les señalaba que no tenía ninguna militancia política. Apuntó que a los días que su padre recibió la mala noticia de la muerte de su hermano, tomó la decisión de arrendar un barco con la finalidad de ir a rescatar el cuerpo, el cual según su padre, podría haber quedado atrapado en algún árbol o arbusto en la ribera del río, sin embargo, personal de Carabineros de Riñinahue le impidió llegar al lugar. Posteriormente, su padre fue detenido por personal de Carabineros de Lago Ranco, siendo llevado a la cárcel de Río Bueno en primera instancia, mientras su madre y demás hermanos quedaron en calidad de detenidos en el Retén de Carabineros, una noche y un día. Posteriormente su padre fue derivado a la cárcel de Valdivia, lo cual provocó que ellos dejaran de estudiar y comenzaran a trabajar en la agricultura ayudando a su madre. Relató que luego de que su padre salió de la cárcel, se enfermó y nunca más se habló de la muerte de su hermano Roberto, como tampoco continuó con la búsqueda de su cuerpo, debido a todo lo que había pasado y futuras represalias de Carabineros de

Lago Ranco, como tampoco nunca escuchó ningún comentario de otras personas respecto a qué pudo haberle sucedido a su hermano aquel día.

En declaración judicial de fecha 16 de noviembre de 2017, rolante de fs. 632 a fs. 634 (tomo III). Ratificó lo declarado ante la Policía de Investigaciones de Chile. Comentó que su hermano Roberto, a la fecha de su fallecimiento tenía alrededor de 17 o 18 años de edad aproximadamente. No tenía ninguna militancia política. Dijo que su hermano le pidió permiso a su padre para viajar a Argentina antes del golpe militar. El motivo por el cual decidió viajar era porque en Lago Ranco no había trabajo y estaban todos en la casa. Respecto de las personas que viajaron con su hermano, solo recordó el nombre de José Jovin Oporto, este joven era casi vecino de ellos, vivía un poco más arriba de su casa y su hermano era amigo con él. No supo qué otras persona lo acompañaron en el viaje. En cuanto a los Carabineros de Lago Ranco, que les fueron a entregar la noticia de la muerte de su hermano, escuchó que llegaron como tres funcionarios a su casa, esto sucedió a fines de septiembre de 1973. De estos funcionarios parece que había uno de apellido Martínez. Difundió que antes que llegaran estos funcionarios y mucho antes de la muerte de su hermano, habían ido militares a revisar la casa, para ver si su padre tenía armas. La primera vez, cuando llegaron le preguntaron a su papá si ellos pertenecían a alguna clase política, a lo que este respondió que no y se fueron. Recordó que los militares llegaron en carros grandes, que andaban como 10 personas en su interior, eran jóvenes, el mayor debe haber tenido unos 45 años. Estos venían desde Valdivia hasta la zona de Lago Ranco. Estos militares anduvieron más de un mes por la zona, aparecieron después del golpe. Estimo que primero aparecieron Carabineros y luego Carabineros de Lago Ranco, quienes les avisaron sobre la muerte de su hermano. Puntualizo que cuando

llegaron Carabineros de Lago Ranco, estuvieron afuera en el patio y le informaron a su papá que su hermano había muerto producto de un disparo desde una avioneta. El Tribunal le exhibió a la testigo una nómina de funcionarios de la Tenencia de Lago Ranco, que prestaron servicios para el año 1973, a fin de que indique si alguno de los nombres consignados en dicha nómina, corresponden a él o a los funcionarios de Carabineros que le fueron a notificar el fallecimiento de su hermano Roberto; a lo que la deponente señaló que reconoce a: Alfredo Fernández Martínez y le parece mucho que los otros eran Waldemar Medina Oporto y Conrado Navarro Cárdenas, aunque no está completamente segura, pero sus apellidos le suenan mucho. A la pregunta del Tribunal, informó que después de la muerte de su hermano, los militares fueron varias veces a la casa para agredirlos, a todos los encerraban en diversas habitaciones, encerraban a su padre para golpearlo. Les preguntaban si su padre era político y ellos les indicaban que no. Musito que tenían una bodega de trigo y les decían que debían darles comida a los militares, llevándose todas las cosas que estaban en esa bodega, dejándolos sin comida. Todos estos episodios ocurrieron durante el mes que estuvieron los militares en la zona. Nunca más volvieron a ver a los militares en Lago Ranco. Sumo que en una ocasión concurrieron Carabineros, desconociendo de donde eran, para amedrentarlos, pero no fueron tan violentos como lo fueron los militares. Fundó que después de haber recibido la noticia de la muerte de su hermano, su padre lo único que quería era encontrar a su hijo y darle una sepultura como tenía que ser. Su padre le dijo que había hablado con una persona que tenía un barco en Lago Ranco, de apellido Celin Lavado. También habló con el teniente de Carabineros de Lago Ranco, dándole autorización. Su padre fue con sus hermanos más grandes a buscar a su hermano, pero no

pudieron llegar al río Nilahue porque les impidieron el paso. No supo si habrán sido militares, carabineros o civiles, lo único que supieron es que no lo dejaron pasar, producto de esto su padre llegó muy mal. Dicen que el cuerpo de su hermano estaba en un árbol, en el río Nilahue, no recuerda a qué altura. Respecto al sector donde dieron muerte a su hermano Roberto, les dijeron que fue en el puente Nilahue, desde una avioneta de un particular le dispararon. Adoso que la gente que podría entregar información sobre la muerte de su hermano Roberto era pura gente mayor, no cree que vivan. Pero recordó a Fernando Ñancucheo quien vivía en esa época en el sector del río Nilahue.

A.10. MARTÍN EDUARDO HUAQUI BARRÍA (17 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 432 a fs. 433 (tomo II) y de fs. 901 a fs. 902 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 24 de abril de 2016, rolante de fs. 432 a fs. 433 (Tomo II), copia de fs. 888 a fs. 890 (tomo III). A la pregunta por diferentes personas, de las cuales aportó los siguientes antecedentes: Respecto de Juan Huaiqui, al parecer correspondería a Juan Huaiqui Gómez, quien habitaba en el sector el Arenal Riñinahue; Carlos Ancacura, eran vecinos en calle Concepción, lugar donde en la actualidad vive su hermano Eliel Huaiqui Barría, en la comuna de Lago Ranco, al parecer se llamaba Carlos Ancacura Antihual (actualmente fallecido); Juan Figueroa, quien habría acompañado a su hermano cuando venían bajando de la cordillera en el año 1973, él tenía a la fecha 22 o 23 años, quien vivía como a 300 metros de la casa de su hermano Eliel en Lago Ranco. Este trabajó en Carabineros ingresando en esa institución para el año 1976; Sergio Calfulef, tenía alrededor de 18 años en la época, vivía en calle Concepción a una cuadra del estadio de la ciudad; Héctor Angulo no recordó su

identidad pero al parecer vivía a unas cuadras del Liceo de Lago Ranco; Luis Díaz Zumelzu tenía unos 22 años para el año 1973, vivía a 100 metros del consultorio hacia Lago Ranco; Eliel Calfulef, era hermano de Sergio y al parecer su segundo nombre era Ariel; Los hermano Furnier, Manuel falleció en Santiago, Jorge al parecer está vivo y viviría en Santiago, ellos en la época habitaban cerca del cementerio a 100 metros de la cordillera. Agregó que había un Carabinero de apellido Ávila que era encargado del Retén de Riñinahue y podría aportar información. Dijo que Juan Huaiqui ayudó en la búsqueda de su hermano, él tenía un campo en el arenal Riñinahue, Lago Ranco, quien habría enterrado el cuerpo de su hermano a 1 o 2 metros de distancia de un árbol para no perder su orientación. Expuso que Armando o Juan Ñancucheo “el chico Nano”, fue avisar a su casa que le habían disparado a su hermano. Añadió que Quirino Arriagada habría sido una de las personas que le disparó a su hermano, al parecer en la época tendría unos 40 años.

En declaración judicial de fecha 3 de enero de 2020, rolante de fs. 901 a fs.902 (tomo III). Ratificó lo declarado ante la Policía de Investigaciones de Chile. Atestiguó que cuando tenía 17 años al llegar a su casa, después de haber estado en su colegio ubicado en Lago Ranco, se encontró con la sorpresa que esta estaba llena de Carabineros y militares. Mientras que Carabineros maltrataba a sus padres, Emilio Huaiqui y Violanda Barría; los militares estaban dentro de la casa rompiendo cosas con sus armas, buscaban a su hermano Roberto Huaiqui y además buscaban armas supuestamente escondidas por la familia. En ese acto, los militares lo tomaron y lo golpearon, lo trataron con groserías de alto calibre, preguntándole dónde estaban las armas y dónde estaba su hermano. Aseveró que no tenía idea de esas cosas, nunca se metió en política, pero acompañaba de vez

en cuando a su padre a las reuniones de su junta de vecinos porque era el presidente. Narró que a los días después volvieron a avisarles, que los chiquillos habían vuelto y que al cruzar el río Nilahue hubo disparos, donde mataron a su hermano. Posteriormente llevaron a su padre a Valdivia detenido y después llevaron al declarante detenido hacia el Retén de Carabineros de Río Bueno, donde estuvo en esa calidad como dos semanas. En ese lugar lo sacaban al patio y maltrataban con los mismos fusiles que andaban trayendo los Carabineros, le pegaban en las uñas de las manos con los fusiles, lo quemaban con sus cigarros, le sacaban las uñas con alicates, lo quemaron con cigarrillo en partes de su cuerpo, no lo alimentaron por días y le daban de comer caca de caballo, querían que les dijera donde estaban las armas y donde estaban los dirigentes políticos de Lago Ranco y evidenció que él no sabía nada. Todavía tiene marcas de quemaduras en su cuerpo. Luego de dos semanas salió y se fue a su casa, su madre le dijo que su padre todavía estaba preso en Valdivia. A los días después llegaron a su casa don Fernando Ñancucheo y Juan Huaiqui, pariente de ellos y les avisaron que habían encontrado a su hermano muerto a orillas del río Nilahue y que ellos mismos lo habían sepultado bajo un árbol. Anexó que como a los cuatro meses soltaron a su padre, quien llegó con heridas en las piernas, amoratadas, golpeadas y quemadas. No contándoles nada por respeto a sus hermanos más pequeños y para no hacerlos sufrir más. Espeto que ahí le contaron sobre la muerte de su hermano. Ante la pregunta del Tribunal, contestó que para la época de los hechos tenía 17 años de edad, era estudiante del liceo B-15 donde cursaba cuarto medio. Dijo que en ese tiempo conocían al teniente José Sáez y recordó que le pidieron autorización para la búsqueda de su hermano. Este les dio permiso, pero la gente que vivía alrededor, no. Adujo que no recuerda

nombres de quienes se vieron involucrados en la muerte de su hermano. Añadió que no podría aportar datos sobre el lugar donde presumiblemente se encontraría inhumado su hermano, pero quien podría saber es Juan Huaiqui, él vive en el sector donde lo encontró y lo enterró cerca del sector llamado El Arenal de Riñinahue, cerca de una playa de Lago Ranco, bajo un árbol, él mismo lo dijo. Contó que a su hermano lo acompañaban Carlos Ancacura, José Jovin Oporto y Juan Figueroa, a quienes no ve desde el año 1973.

A.11. ELIEL ENRIQUE HUAQUI BARRÍA (12 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 118 a fs. 120 (tomo I), de fs. 435 (tomo II) y a fs. 926 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 14 de marzo de 2014, rolante de fs. 118 a fs.120 (tomo I), copia de fs. 919 a fs. 921 (tomo III). Proclamó que para el año 1973, él tenía 12 años de edad, vivía junto a sus padres y hermanos en Lago Ranco, dentro de los cuales estaba Roberto, quien tenía alrededor de 18 años. Dentro de lo que recordó, Roberto después del golpe de Estado, decidió viajar a Argentina a tener mejores expectativas laborales y al llegar al sector del puente Calcurrupe, fue interceptado por civiles, quienes le dispararon y cayó al río Nilahue, desapareciendo su cuerpo en el caudal de este. Posteriormente llegó personal de Carabineros de Lago Ranco a la casa, a avisarles a sus padres lo ocurrido con Roberto. Ante esto su padre decidió ir al lugar con la finalidad de ubicar el cuerpo, pero al parecer Carabineros le impidió a la gente del sector efectuara la búsqueda. Finalmente declaró que a la fecha y a través los años, no ha tenido mayor información de lo que realmente ocurrió con su hermano. Agregó que su padre conversó con la familia y dispuso que no era tema lo ocurrido, lo anterior debido al miedo que reinaba en ese tiempo.

En declaración extrajudicial de fecha 3 de mayo de 2016, rolante a fs. 435 (tomo II), copia a fs. 922 (tomo III). Se le preguntó respecto a Carlos Ancacura, Juan Figueroa, Sergio Calfulef, Luis Díaz Zumelzu, Eliel Calfulef, hermanos Furnier, Rubén Huaiqui y Armando Ñancucheo, aportando los datos personales que tiene sobre algunos de ellos, para su ubicación y entrevista.

En declaración judicial de fecha 17 de enero de 2020, rolante a fs. 926 (tomo III). Ratificó sus declaraciones extrajudiciales y añadió que no recuerda la fecha exacta en que su hermano Roberto Huaiqui salió con destino a Argentina, debe haber sido entre septiembre u octubre de 1973. Precisoó que los hechos ocurrieron en el río de nombre Nilahue, en el puente Calcurrupe. Aseveró que no supo los nombres de carabineros o civiles que participaron en el hecho, pero recordó el nombre de un suboficial Martínez de Carabineros de Lago Ranco, que en ese tiempo tuvo contacto con su familia. Comentó que sus padres y su familia se enteraron después de 2 o 3 días de lo ocurrido. Ignora el nombre completo de Fernando Ñancucheo y en cuanto a Rolando Vejar, su segundo apellido es Ancacura y es su primo. No tuvo conocimiento que se hubiese inhumado el cuerpo de su hermano ni menos del lugar en que eso hubiese ocurrido. Relató que cuando ocurrieron los hechos, su hermano andaba con un hombre de nombre José Jovin Oporto, el que estaría radicado en Argentina.

A.12. JOSÉ LEONARDO HUIQUI BARRÍA (19 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 113 a fs.114 (tomo I) y de fs. 932 bis a fs. 932 ter (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero de 2014, rolante de fs. 113 a fs. 114 (tomo I). Inquirió que para el año 1973 residía junto a sus padres Emilio Huaiqui Calfulef y Violanda Barría Santana (ambos fallecidos) más sus

hermanos, en la ciudad de Lago Ranco. Él tenía 19 años de edad y sus hermanos Nériida 21, Ismael 18, Roberto 17, Dina 16, Martín 14, Eliel 12 y Federico 8. Anexó que para esa época, su padre era presidente de los agricultores campesinos del sector Tringlo y una vez producido el golpe militar, el día 11 de septiembre de 1973, su hermano Roberto debido a que no había trabajo y estaba en mala situación el país, le pidió permiso a sus padres para ir a trabajar a Argentina. Este viaje lo realizó con otras personas y un amigo de nombre José Jovin Oporto. Su padre, ante tal requerimiento, lo autorizó y luego de unos días, al parecer el 20 de septiembre de ese año, llegó hasta su casa personal de Carabineros de Lago Ranco, quienes le informaron a sus padres, que habían dado muerte a su hermano en el sector del puente del río Nilahue, donde supuestamente iban cruzando y que desde una avioneta le habría disparado, impacto que dio en su espalda, cayendo al río, siendo su cuerpo arrastrado por el torrente de las aguas, río abajo. Ante esta noticia sus padres quedaron muy mal psicológicamente y su escape fue seguir trabajando en la agricultura. Atestiguó que no obstante la historia de su hermano, su familia cayó en una depresión muy fuerte y siguió siendo víctima de abusos por parte de carabineros y militares. Quienes en más de una oportunidad se dirigieron a su casa en búsqueda de armas, destrozando todo en la casa. Dijo que en una ocasión se llevaron todas sus cosas, recordando que a su padre lo encerraron en una habitación para torturarlo con golpes, pese a que este les señaló que no tenía ninguna militancia política, que solamente era dirigente de los agricultores campesinos.

En declaración judicial de fecha 19 de febrero de 2020, rolante de fs. 932 bis a fs.932 ter (tomo III). Ratificó su declaración extrajudicial. Aclaró que José Jovin Oporto Del Río era amigo de su hermano Roberto. Al parecer se

habrían conocido en un club deportivo o desde el colegio y su hermano se fue con él a Argentina. Puntualizó que su padre era agricultor, solo se dedicaba a sembrar, sin tener militancia política. Ostentó que pasó un tiempo en que los carabineros llegaron a su casa a avisarles de la muerte de su hermano Roberto, señalándoles que le habrían disparado desde un helicóptero, desconociendo la persona que lo habría hecho. Recordó que su padre hizo gestiones para ir a ver a su hermano, pero tanto carabineros como otras personas impidieron la investigación. Destacó que en esa época no se podía decir nada, porque podrían decir que pertenecía a algún partido político. Inquirió que había un carabinero quien era amigo de su padre, pero no recuerda su nombre. Adosó que luego de lo ocurrido, los carabineros de Lago Ranco fueron a buscar a su padre, sin exhibirle alguna autorización, llevándoselo preso a Río Bueno y luego a Valdivia. En la familia no hicieron nada por temor, sin embargo, su madre visitaba a su padre constantemente. Después que su padre salió de la cárcel, le vinieron enfermedades y poco tiempo después falleció. Según su parecer, su hermana Nérída (actualmente fallecida), habría sido quien realizó las primeras gestiones para averiguar sobre la muerte de su hermano. Sumo que luego de que murieron sus padres, a consecuencia de los trámites hereditarios, se dieron cuenta que su hermano Roberto aparecía vivo, por lo que tuvieron que realizar los trámites correspondientes de su muerte. Explicó que su madre fue la única que recibió beneficios luego de la muerte de su hermano y que hasta la fecha nunca pudieron encontrar su cuerpo ni rastros de él. Finalmente proclamó que en ocasiones en que Carabineros llegaban a su casa, sacaban a los miembros de la familia de a uno para golpearlos. Aquella situación ocurrió en varias oportunidades, por lo que

siempre estaban en la casa escondidos, no podían ni salir de la casa a trabajar por temor.

A.13. LUIS OMAR LOPETEGUI RÍOS (43 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 355 a fs. 356 (tomo II);

En declaración extrajudicial de fecha 1 de octubre de 2015, rolante de fs. 355 a fs. 356 (tomo II). Manifestó que para el 11 de Septiembre de 1973, estaba trabajando en la 4° Comisaría de Río Bueno, no obstante el día 18 de Septiembre de 1973, sufrió un accidente laboral. En esa fecha yendo en camioneta sufrieron un choque, donde producto al impacto se enterró en el ojo izquierdo una metralleta, tras lo cual quedó hospitalizado en el Hospital de Carabineros de Santiago. Volviendo a Río Bueno en octubre estando aún hospitalizado, desde donde lo dieron el alta en Noviembre. Señaló que volvió a trabajar de forma normal hasta el año 1977, donde teniendo 25 años de servicio se jubiló. Preciso que trabajó en Riñinahue en el Retén de allá para el año 1965, recordando que él se movilizaba a vapor, pero cree que también había gente que se movilizaba en avioneta. Indico que para allá estaba la hostería de la familia Haittman, quienes si no se equivoca se movilizaban así, pero él solo se movilizaba a vapor.

A.14. ISAIAS REINERIO VASQUEZ PEREZ (26 años a la fecha de los hechos), quien declaró de fs.549 a fs.550 (tomo II) y de fs.1.415 a fs.1.416 (tomo IV);

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 2017, rolante de fs. 549 a fs. 550 (tomo II).Relato que para el año 1973, vivía en el sector de Mallay, junto a sus padres y su hermana. Cuando ocurrió el pronunciamiento militar, en la zona se veían pasar militares hacia la cordillera, imperando el toque

de queda, por lo tanto no salían de su hogar. A la fecha tenía veintiséis años de edad, puntualizando que él vivía a unos tres kilómetros del Arenal Riñinahue. Respecto a los acontecimientos que se investigan, afirmó que ignora todo tipo de antecedentes respecto a la muerte y desaparición de Roberto Huaiqui Barría. Respecto a los hechos que se le imputan, adujo que nunca le disparo alguna persona en el Arenal Riñinahue. Respecto a Julio Ávila, apuntó que podría corresponder a una persona que vive cercano a Riñinahue. Respecto a un señor de apellido Rivas, señaló que ignora de quien podría tratarse. Respecto a Quirino Arriagada, indicó que podría tratarse de un lugareño del sector Las Quemadas, quien habría fallecido hace algún tiempo. Descargó que como familia nunca tuvieron problemas con nadie, como además nunca vieron a personas que huyeran del régimen militar de la época. Por último, explicitó que nunca se vio envuelto en algún hecho de sangre como tampoco en política, ni menos ayudo a militares o Carabineros a detener personas.

En declaración judicial mediante videollamada de fecha 22 de febrero de 2023, rolante de fs.1.415 a fs.1.416 (tomo IV). Tribunal: ¿Usted conoce los hechos de esta causa?. Isaías Vásquez: Afirmo que desconoce los hechos para los que fue citado. Tribunal: Se le leyó declaración extrajudicial de fs.549 a fs.550 de autos y se le pregunto: ¿ratifica lo expuesto?. Isaías Vásquez: Si, ratificó lo expuesto. Tribunal: Se le dio lectura en lo pertinente la declaración de Julián Ávila Riveros de fs.551 a fs.552 de autos: “Es importante señalar que el sargento Cereceda del Reten de Llifén, agrupó a los pobladores cercanos del Puente Nilahue, incluso al asentamiento donde trabajaba yo, haciendo presente que me enteré de todo por los asentados que dirigía, recordando que la orden que se les dio a los pobladores, era que si veían a una persona extraña, tenían autorización

para matarlos. Pasadas unas horas de la reunión divisaron a Huaiqui y a Oporto, quienes al ver a los pobladores, Huaiqui se lanzó al Río, recibiendo gran cantidad de disparos... posiblemente de Isaías Vásquez, quien era pinochetista". ¿Qué puede decir usted respecto a lo que se le leyó, porque el señor Ávila lo nombró a usted?. Isaías Vásquez: Manifestó que desconoce todo lo que se le indico. Tribunal: Dio lectura en lo pertinente a declaración policial de Martin Cardenio Catrihual de fs. 511 de autos, el cual en lo pertinente señaló: "Se enteró por familiares, actualmente fallecidos de lo ocurrido en el antiguo puente río Nilahue, en el sentido de que en dicho lugar, civiles y personal de carabineros esperando en el puente Nilahue a unos jóvenes que iban a pasar por el río Nilahue y desde el puente les dispararon, dándole muerte a uno, agregando que de acuerdo a los comentarios de sus familiares, dentro de los involucrados en dicho incidente se encontraba algunos dueños de tierras con dinero de Riñinahue, dentro de los cuales uno se encuentra con vida y reside en el sector, cuyo nombre es Reinero Vásquez...". ¿Qué puede decir usted respecto a lo que se leyó, porque el señor Catrihual lo nombró a usted?. Isaías Vásquez: No tiene idea de lo que le comentaron, además a Catrihual no lo conoce. Él tenía 20 años a la fecha y vivía con sus padres que tenían 80 años. En ese tiempo había toque de queda y no salían para ningún lado, trabajaban en el campo, no tenían idea de lo que paso. Asevero que no tiene nada que ver, nunca estuvo en esa cosa. Tribunal: ¿Pero usted tuvo conocimiento de lo que ocurrió en el puente Nilahue?. Isaías Vásquez: No, porque él vivía con sus padres retirados del puente Nilahue, por la cordillera, no tenían idea de lo que paso ahí.

B. DOCUMENTOS (21)

- | | |
|--|--|
| 1. Informe Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. | 11. Copia expediente causa 9.661-2009. |
| 2. Certificado de nacimiento Roberto Huaiqui. | 12. Informe Extranjería de Roberto Huaiqui. |
| 3. Resumen Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. | 13. Certificados de defunción. |
| 4. Informe Vicaría. | 14. Hojas de vida ambos acusados. |
| 5. Informe Museo Memoria y DDHH. | 15. Informes LACRIM de Valdivia. |
| 6. Red familiar de Roberto Huaiqui. | 16. Acta inspección personal del Tribunal. |
| 7. Registro de defunción de Roberto Huaiqui. | 17. Extracto de filiación de Carlos Galindo. |
| 8. Copia sentencia causa 9.661-2009 | 18. Extracto de filiación de Mamerto Ávila. |
| 9. Complemento sentencia causa 9.661-2009
ambos acusados. | 19. Cuaderno reservado con hojas de vida |
| 10. Nómina personal Carabineros de Lago Ranco y Riñinahue. | 20. Ordenes de investigar de Policía de
Investigaciones de Chile. |
| de Roberto Huaiqui. | 21. Certificados de nacimiento de hermanos |

B.1. De fs. 1 a fs. 3 (tomo I). Copia simple páginas 396 y 397 del **Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación**, respecto a Roberto Huaiqui Barría, informa que: *“El afectado había salido de Lago Ranco el 11 de septiembre de 1973, junto a otras personas, con la intención de cruzar la cordillera para dirigirse a Argentina. Cuando iban cruzando el río Nilahue les dispararon desde una avioneta tripulada por civiles, dándole muerte e hiriendo en la espalda a uno de los acompañantes, quien fue recogido y llevado a un hospital. El cuerpo sin vida de Roberto Huaiqui cayó al río y fue impulsado aguas abajo por la corriente, sin que pudiese ser recuperado. Es convicción de la Comisión que en esta ejecución se produjo una grave violación a los derechos humanos del afectado, de responsabilidad de civiles que actuaban por instrucciones o con la aceptación de agentes del Estado”.*

B.2. De fs. 27, copia de fs.77, fs. 213, de fs. 251, de fs. 255 (tomo I) y de fs. 1.406 (tomo IV). Certificado de nacimiento de Roberto Eder Huaiqui Barría. Circunscripción Lago Ranco, inscripción N°614 del año 1955. Donde se consigna como padre a Emilio Huaiqui Calfulef y como madre a Violanda Barría Santana.

B.3. De fs. 29 a fs. 32 (tomo I). Copia simple **resumen del caso de la Comisión de Verdad y Reconciliación**, que contiene declaración de Jovino Oporto, que en lo pertinente, señala: *“Nuestro hijo estaba en el colegio y el día del golpe se desapareció. Vinimos a saber de él el día domingo, cuando avisaron que estaba en el hospital. Fuimos a verlo y nos dijo que iba arrancando con Roberto Huaiqui, hacia los pasos fronterizos que hay en Riñinahue y cuando iban cruzando el río Nilahue, les habían disparado. A mi hijo le dieron en la espalda y al otro joven lo mataron. Sabemos que a Huaiqui lo alcanzaron más balazos y se fue río abajo y que fueron civiles los que dispararon. Cuando encontraron a mi hijo parece que lo encontraron parecido a mí y no lo mataron. Lo llevaron al hospital de Río Bueno, donde pudieron verlo y les contó esto. No conocimos la versión que dice que les dispararon desde un avión”.*

B.4. De fs. 48 a fs.49 (tomo I). Informe de **Fundación Vicaría de la solidaridad**. Que acompaña lo siguiente: **1.**Relato de ejecución de Roberto Eder Huaiqui Barría. Que en lo pertinente señala: *“En el caso del compañero Huaiqui (hijo del presidente del comando comunal campesino de Lago Ranco don Emilio Huaiqui) fue ejecutado por conocidos civiles en la zona de Mallay y luego arrojado su cuerpo a las aguas del río Mallay. En la mencionada acción, un compañero de la juventud, Jovino Oporto (José Jovin Oporto), resultó con una bala entre pulmón y pulmón, salvando milagrosamente la vida, hoy fuera del país”.*

B.5. De fs. 51 a fs. 78 (tomo I). Informe de **Museo de la Memoria y los Derechos Humanos**. Que acompaño lo siguiente: **1.** Acta de nacimiento de Roberto Eder Huaiqui Barría de fs.51. **2.** Antecedentes respecto a Roberto Eder Huaiqui Barría de la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación de fs.52 a fs.75 **3.** Certificado de matrimonio de Emilio Huaiqui Calfulef y Violanda Barría Santana de fs.76, copia de fs.1.405 (tomo IV). **4.** Certificado de nacimiento de Roberto Eder Huaiqui Barría de fs.77.

B.6. De fs.86 (tomo I), copia de fs.615 (tomo III). Antecedentes familiares, con **red familiar** de Roberto Eder Huaiqui Barría, remitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

B.7. De fs. 87 a fs.88 (tomo I). Copia autorizada de **registro de defunción** de Roberto Eder Huaiqui Barría, de fecha 27 de junio de 2013, donde se indica causa de la muerte: muerte presunta.

B.8. De fs. 88 bis (tomo I). Copia autorizada **sentencia causa rol N°9.661** del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Río Bueno, de fecha 15 de julio de 2009, que declara la **muerte presunta** de Roberto Eder Huaiqui Barría.

B.9. De fs. 89 (tomo I). Copia autorizada **complemento de sentencia causa rol N°9.661**, de fecha 10 de febrero de 2012, en el siguiente sentido: *“que la persona declarada presuntivamente muerta, don Roberto Huaiqui Barría, es de sexo masculino, nacido el 14 de octubre de 1951, siendo fijado el día presuntivo de su muerte el día 30 de diciembre de 1975, habida consideración que las últimas noticias que se tuvieron de él fueron en el mes de septiembre de 1973”*.

B.10. De fs. 156 a fs. 160 (tomo I), copia de fs.818 a fs.819 (tomo III). Informe del Departamento Derechos Humanos de Carabineros de Chile, el que remite **nómina del personal de Carabineros** que figura como dotación de la

Tenencia de Lago Ranco y el Retén de Riñinahue para septiembre de 1973.

En este último retén figuran: el Cabo Carlos Emilio Galindo Ruiz y los carabineros Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Germán Oñate Jaramillo.

B.11. De fs. 212 a fs. 274 (tomo I). Copia simple del **expediente causa rol 9.661-2008** del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Río Bueno; jurisdicción voluntaria, iniciada el 2 de mayo de 2008, materia: muerte presunta; caratulada “Eliel Enrique Huaiqui Barría”.

B.12. De fs. 642 y de fs. 938 (tomo III). Informe del Departamento de control de fronteras de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de Chile, de fecha 9 de noviembre de 2017, que en lo pertinente, informa que Roberto Eder Huaiqui Barría **no registra movimientos migratorios**, desde septiembre del año 1973 a la fecha.

B.13. De fs. 711, de fs. 746, de fs. 860 a fs. 861 (tomo III); y de fs.1.925 a fs.1.940 (tomo VI). Certificados de defunción de: 1.Conrado Hernán Navarro Cárdenas de fs. 711. 2.Dagoberto Antonio Cereceda Ramírez de fs. 746. 3.Juan Bautista Sandoval Alcapán de fs. 860. 4. Ricardo Misael Manzano Castillo de fs. 861.5. Martín Eduardo Huaiqui Barría de fs.1.925. 6. Federico Graldo Huaiqui Barría de fs.1.926. 7. Nérída Ilsa Huaiqui Barría de fs.1.927. 8. Emilio Huaiqui Calfulef de fs.1.928. 9. Violanda Barría Santana de fs.1.929. 10. Rubén Hilario Huaiqui Carrillo de fs.1.930. 11. Juan Quirino Arriagada Ovando de fs.1.931. 12. Donosor Delgado Silva de fs.1.932. 13. José Jovino Oporto Medina de fs.1.933. 14. Luis Omar Lopetegui Ríos de fs.1.934. 15. Carlos Humberto Ancacura Antihual de fs.1.935. 16. Carlos Otto Hugo Heitmann Koning de fs.1.936. 17. Charles Madge Ferrers de fs.1.937. 18. Blas Alberto Lacoste Gauthier de fs.1.938. 19. Luis

Alberto Salgado Balboa de fs.1.939 y **20**. Moisés Benjamín Morales Reyes de fs.1.940.

B.14. De fs. 816 a fs. 821 (tomo III). Informe del Departamento de Derechos Humanos de Carabinero de Chile, que remite **copia de hojas de vida y transcripciones de las anotaciones del libro de vida**, correspondiente a la trayectoria institucional del personal requerido, junto a sus calificaciones, entre los que se encuentran la de los acusados **Carlos Emilio Galindo Ruiz y Mamerto Tercero Ávila González**.

B.15. De fs. 983 a fs. 989 (tomo III). Informe pericial fotográfico N°80-2021 e Informe pericial planimétrico N°66-2021, elaborados por el Laboratorio de Criminalística Regional Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, correspondiente a inspección al puente Nilahue, sector Riñinahue, en la comuna de Lago Ranco.

B.16. De fs. 1.123 a fs. 1.125 (tomo III). Acta de inspección personal del Tribunal, de fecha 19 de julio de 2022, donde comparece el testigo Hernán Daniel Leal Oporto, que en lo pertinente, señaló: *“Se procede a leer declaración policial de autos del testigo Hernán Daniel Leal Oporto, de fecha 12 de julio de 2017, quien la ratifica en todas sus partes. El Tribunal pregunta si se encontraba en el asentamiento el día que ocurriendo los hechos y si llegó allí Cereceda, señalando que es efectivo. El Tribunal le consulta por que estaba posteriormente en el puente Nilahue, relatando que: “el carabinero Cereceda junto con el grupo con el que llegó, de seis a siete personas, le ordeno que subiera a un tractor y viniera al sector del río para detener a los extremistas que eran buscados”. El Tribunal pregunta si sabía cuántos extremistas eran los buscados por Carabineros y que se sabía de ellos, a lo que señala que no le dijeron nada, solo que fueran hacia el*

puente para que viera como eran detenidos los extremistas. El Tribunal pregunta cuantas personas se subieron al tractor para trasladarse, agregando que eran seis personas aproximadamente, se le consulta si recuerda los nombres de esas personas, nombra a Waldo Rivas, uno de apellido Soto que ya falleció y el mismo. El Tribunal pregunta con cuantas personas andaban acompañado Cereceda ese día, relatando que Cereceda andaba con vehículos policiales al lado del río, no reconociendo a más personas, el tractor quedo cerca donde se ubica el actual letrero del nombre del río. Al bajar desde el puente hacia donde está el caudal del río, el Tribunal pregunta desde donde venían bajando, de qué lado venían los extremistas que eran buscados, apunta que ellos se suponían que venían de vuelta desde Argentina, que seguramente no pasaron y por eso regresaron. El Tribunal pregunta en que momento los vio, relata que tras que le ordenaran venir al puente y al llegar ahí, vio carabineros aproximadamente del retén Riñinahue y probablemente refuerzos de Llifén, ya que Cereceda era del retén Llifén, no reconociendo a nadie más. Al llegar a un punto señalado por el testigo próximo al cauce del río, este narra que comenzó a oír tiros y al mirar desde donde provenían, ve a una persona bajando y manoteando en el río, cerca había una piedra donde intenta agarrarse esta persona, en ese momento no lo identificó, después se supo que era Roberto Huaiqui Barría, agrega que cuando vio a Huaiqui intentar agarrarse de la piedra, escucha unos balazos y luego de esto vio que venía su cuerpo agua abajo. El Tribunal pregunta si vio de dónde venían esos balazos que escuchó, apunta a la parte superior de donde comienza a escurrir el río, donde el cuerpo comienza a bajar tras recibir disparos. El Tribunal pregunta donde estaba Oporto, señala que a él no lo vio en ese momento, que todo fue rápido, que se movió y que seguramente Oporto iba en el avión donde iban los

carabineros. El Tribunal pregunta si vio o escucho una nave o helicóptero ese día, afirmando que vio un avión revoloteando en el sector, que luego de que pasaron los hechos, llego el carabinero Cereceda que les dijo a los que estaban allí, que se fueran y volvieran a su trabajo. El Tribunal pregunta si alguien intento seguir el cuerpo de Huaiqui en el río, alega que todo quedo ahí, que nadie lo siguió, que se fueron al tractor si hacer comentario y de vuelta al trabajo. El Tribunal pregunta si supo posteriormente que paso con Oporto, señala que se suponía que a él lo habían llevado en avión, ya que a él si lo tomaron. El tribunal pregunta que se supo al otro día de Roberto Huaiqui Barría, agrego que se supo por la familia, que el cuerpo que bajo por el río era de Huaiqui, que él tenía un tío de apellido Barriga, que era hermano de la mamá de Huaiqui, el empezó a preguntar que paso ese día. El Tribunal pregunta si tanto Oporto como Huaiqui venían a pie arrancando y de qué sector, afirma que no lo sabe, que debe haber sido desde la frontera.”

B.17. De fs.1.129 y de fs.1.464 (tomo IV). Extracto de filiación y antecedentes del acusado Carlos Emilio Galindo Ruiz.

B.18. De fs. 1.130 (tomo IV). Extracto de filiación y antecedentes del acusado Mamerto Tercero Ávila González.

B.19. De fs.822 (tomo III). Cuaderno reservado en autos, que se desglosa de la siguiente manera:

B.19.1. copia de hojas de vida y transcripciones de las anotaciones del libro de vida, correspondiente a la trayectoria institucional del personal requerido, junto a sus calificaciones, entre los que se encuentran de los **acusados Carlos Emilio Galindo Ruiz y Mamerto Tercero Ávila González.**

B.20. Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada investigadora de delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile:

B.20.1. De fs. 96 a fs. 122 (tomo I) informe policial N° 1875 que contiene declaraciones extrajudiciales de familiares y testigos.

B.20.2. de fs. 123 a fs. 148 (tomo I); que contiene declaraciones extrajudiciales de familiares y testigos.

B.20.3. de fs. 185 a fs. 200 (tomo I); informe policial N° 3 que contiene individualización y declaraciones de ex funcionarios de Carabineros de Chile.

b.20.4. de fs. 202 a fs. 205 (tomo I), informe policial N° 7573 que contiene individualización y ubicación de posible testigo.

B.20.5. de fs. 289 a fs. 298 (tomo II), informe policial N° 2531 que contiene individualización de ex funcionarios de Carabineros de Chile.

B.20.6. de fs. 300 a fs. 306 (tomo II) informe policial N° 2585 que contiene individualización y declaración de testigos.

B.20.7. de fs. 312 a fs. 314 (tomo II) informe policial N° 3761 que contiene declaración extrajudicial de familiar de la víctima.

B.20.8. de fs. 318 a fs. 325 (tomo II) informe policial N° 4840 que contiene declaración de familiar de la víctima e individualización de posibles testigos.

B.20.9. de fs. 331 a fs. 334 (tomo II) informe policial N° 5584 que contiene individualización y ubicación de testigo familiar de la víctima.

B.20.10. de fs. 336 a fs. 337 (tomo II) informe policial N° 647 que contiene gestiones para individualizar a testigo.

B.20.11. de fs. 341 a fs. 365 (tomo II) informe policial N° 721 que contiene declaraciones extrajudiciales de ex funcionarios de Carabineros de Chile.

B.20.12. de fs. 374 a fs. 379 (tomo II) informe policial N° 6907 que contiene individualización y declaración extrajudicial de testigos.

B.20.13. de fs. 392 a fs. 395 (tomo II) informe policial N° 198 que contiene individualización de posible testigo.

B.20.14. de fs. 397 a fs. 401 (tomo II) informe policial N° 202 que contiene individualización de posibles testigos.

B.20.15. De fs. 424 a fs. 437 (Tomo II) informe policial N° 3019 que contiene individualización de testigos e informe de constitución de la policía en el lugar denominado el Arenal de Riñinahue.

B.20.16. de fs. 448 a fs. 459 (tomo II) informe policial N° 4128 que contiene declaraciones extrajudiciales de ex funcionarios de Carabineros de Chile.

B.20.17. de fs. 463 a fs. 469 (tomo II) informe policial N° 663 que contiene declaración y ubicación de testigo.

B.20.18. de fs. 472 a fs. 494 (tomo II) informe policial N° 4383 que contiene declaraciones extrajudiciales

B.20.19. de fs. 510 a fs. 513 (tomo II) informe policial N° 893 que contiene diligencias correspondiente al traslado de la policía hasta el lugar de los hechos, donde ubica y entrevista a testigos.

B.20.20. de fs. 529 a fs. 534 (tomo II) informe policial N° 6989 que contiene declaraciones extrajudiciales.

B.20.21. de fs. 542 a fs. 555 (tomo II) informe policial N° 630 que contiene declaraciones extrajudiciales de testigos.

B.20.22. de fs. 565 a fs.574 (tomo II) informe policial N° 238 que contiene individualización de ex funcionarios de Carabineros de Chile.

B.20.23. de fs. 591 a fs. 594 (tomo II) informe policial N° 3273 que contiene declaraciones extrajudiciales de testigos.

B.20.24. de fs. 625 a fs. 626 (tomo III) informe policial N° 5576 que contiene diligencias para obtener fotografía de la víctima, sin respuesta positiva.

B.20.25. de fs. 684 a fs. 685 (tomo III) informe policial N° 1361 que contiene declaración extrajudicial de ex funcionario de Carabineros.

B.20.26. de fs. 727 a fs. 734 (tomo III) informe policial N° 2403 que contiene declaración extrajudicial de ex funcionario de Carabineros.

B.20.27. de fs. 747 a fs. 754 (tomo III) informe policial N° 3359 que contiene empadronamiento de la zona donde vivía la víctima de autos.

B.20.28. de fs. 781 a fs. 785 (tomo III) informe policial N° 762 que contiene individualización y ubicación de posibles testigos.

B.20.29. de fs. 943 a fs. 945 (tomo III) informe policial N° 5307 que contiene individualización de posibles testigos.

B.20.30. de fs. 952 a fs. 956 (tomo III) informe policial N° 807 que contiene individualización de posibles testigos.

B.21. De fs.1.408 a fs.1.411 (tomo IV). Certificados de nacimiento de: José Leonardo Huaiqui Barría, Dina Uria Huaiqui Barría, Eliel Enrique Huaiqui Barría e Ismael Baruck Huaiqui Barría.

3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado que:

A.- Que Roberto Eder Huaiqui Barría, para el año 1973, tenía 17 años de edad, era estudiante secundario, militante del Partido Socialista e hijo de doña

Violanda Barría Santana y de don Emilio Huaiqui Calfuléf, quien era Presidente del Consejo Comunal Campesino de Lago Ranco y quien también militaba en el Partido Socialista, y los cuales vivían en el sector Tringlo A, del citado lugar. (Según consta entre otros antecedentes a fs. 2, fs. 27, fs. 32, fs. 48, fs. 101, fs. 215 (Tomo I) y fs. 319 (tomo II), fs. 723 (tomo III).

B.- Que para el año 1973, en la Comuna de Lago Ranco, existía la Tenencia de Carabineros de Lago Ranco, estando al mando de ésta, el Teniente Coronel Luis Ernesto Quezada Ramírez, quien tenía a su cargo los Retenes fronterizos de: Riñinahue y Llifén, entre otros, los cuales eran dependientes de la 4° Comisaría de Carabineros de Rio Bueno. Destacar que el Retén de Riñinahue, estaba integrado por los Carabineros Carlos Galindo Ruiz, Mamerto Tercero Ávila González y Carlos German Oñate Jaramillo, (según consta entre otros antecedentes a fs. 450, fs. 451 tomo II). Respecto a las funciones cotidianas que realizaban en estos Retenes, eran labores de guardia durante las 24 horas del día, patrullajes a caballo, en vehículos o infantería por las inmediaciones, además de dar cumplimiento a las órdenes judiciales del Juzgado del Crimen y de Policía Local de Rio Bueno y La Unión, retenes, que posterior al 11 de septiembre de 1973, en reiteradas oportunidades facilitaron sus dependencias a funcionarios del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a fin de que realizaran determinadas operaciones. (Según consta entre otros antecedentes a fs. 188, fs. 189, fs. 194, fs. 196, fs. 197, fs. 302 (tomo I) fs. 632 (tomo III).

C.- Que pasado el 11 de septiembre del año 1973, en la Tenencia de Carabineros se escuchaba vía radial rumores que en la zona de Neltume había enfrentamientos entre guerrilleros y militares, es por lo cual, que en aquel

entonces, Carabineros de los citados retenes, comenzaron a buscar a personas que militasen o fueren simpatizantes políticos en el sector (según consta entre otros antecedentes a fs. 302, fs. 305, fs. 313 tomo II).

D.- Que en el contexto antes descrito, días después del 11 de septiembre de 1973, se efectuó un operativo en el cual el personal del Retén de Riñinahue, fue rodeado por personas, debiendo los Carabineros de citado Reten, huir de aquel lugar hacia Llifén, siendo ayudados por otros colegas. Al día siguiente llegaron refuerzos militares de Valdivia del Regimiento Maturana, los cuales tomaron el control, instalándose en el sector de Arquihue, lugar donde tenían una especie de base, con camiones y patrullas militares, apostándose con Carabineros del Reten de Riñinahue y Llifén e incluso civiles, con el fin de controlar la situación. (Según consta entre otros antecedentes a fs. 342 y en declaración de Germán Oñate Jaramillo (tomo II), fs. 346 a fs. 363, fs. 789 (tomo III).

E.- Que uno de los carabineros que debió salir del Retén en el operativo antes descrito, fue Mamerto Tercero Ávila González, Sargento 1°, quien trabajó en la 4° Comisaria de Carabineros de Rio Bueno, siendo el retén de Riñinahue el destacamento donde le correspondió ejercer funciones durante el periodo del 11 de septiembre 1973, por este suceso fue derivado a Llifén y a Lago Ranco con el objeto de reforzar el mencionado Retén (según consta entre otros antecedentes a fs. 345, fs. 347, fs. 348, fs. 352, fs. 425 (tomo II).

F.- Que siguiendo el orden cronológico de los hechos ocurridos, en declaración de fs. 456 a fs. 458 (tomo II) Carlos Emilio Galindo Ruiz, Carabinero de la Tenencia de Riñinahue, indica que “después del 11 de septiembre de 1973, un Teniente de Lago Ranco le informó por medio radial que alrededor de setenta

extremistas se habían escapado de la localidad de Riñinahue, de igual manera el Teniente de Llifén informó que dichos extremistas esa misma noche atacarían su Cuartel Policial. Acto seguido estando en la localidad de Llifén, junto a un carabinero concurren a Riñinahue, ya que no existía contingente policial, pues habían sido retirados del sector, con la finalidad de verificar la situación que se encontraba en el lugar. Mientras realizaban dicho patrullaje, entre las 16:00 horas y las 18:00 en el sector de Calcurrupe, específicamente en una planicie muy cercana a un río que se ubica a unos 100 metros de la carretera, se percataron de la presencia de un grupo de 60 personas aproximadamente, los cuales pedían a gritos que los ayudaran ya que les estaba saqueando sus casas, por gente que se encontraba escondida al otro lado de la cordillera, por lo cual, concurren con su colega al lugar. De pronto vio que desde unos matorrales y arbustos salen corriendo unas seis personas en diferentes direcciones, recordando una persona que arrancó en dirección donde se encontraban las 60 personas y al observar la huida y al perderlo de vista recuerda que escuchó varios disparos”.

G.- Que las personas que se indican en el párrafo anterior (los que aparecieron de los arbustos, 6 personas), correspondían a un grupo de jóvenes socialistas, comunistas, quienes salieron de la ciudad de Lago Ranco con destino a Argentina, con la intención de pasar por los pasos fronterizos que existen en Riñinahue, y de cruzar la cordillera, sin tener éxito, esto debido a las condiciones climáticas y nieve existente en el lugar, debiendo regresar. Entre ellos estaban Roberto Huaiqui Barría, quien iba acompañado de su amigo José Jovin Oporto Del Río, de Carlos Ancacura Antihual, Sergio Segundo Calfulef Traillanca, y de Luis Rubén Díaz Zumelzu, entre otros. Cuando iban de regreso por Riñinahue, los primeros dos, Roberto y José Jovin más otros cuya identidad se desconoce,

debieron separarse del grupo antes citado. Ellos venían caminando por zona boscosa y unas personas salieron a dispararles, por lo cual corrieron hacia el puente Nilahue. Encontrándose en una emboscada, puesto que al otro lado del camino habían muchas personas civiles y carabineros, entre ellos Mamerto Tercero Ávila González, según consta en declaración de José Jovin Oporto Del Río de fs. 327 a fs. 329 (tomo II) y de fs. 645, fs. 715, fs. 724 (tomo III); viéndolo y reconociéndolo en aquel lugar. Además estuvo allí en esos momentos, en esa actuación, el carabinero Carlos Emilio Galindo Ruiz, según su propia declaración de fs. 450 a fs. 452 (tomo II).

H.- Que según lo relatado en el párrafo anterior y producto de la emboscada, como consta entre otros antecedentes en inspección personal del Tribunal practicada de fs. 1.123 a fs. 1.125, en informe planímetro y fotográfico de fs. 983 a fs. 988 (tomo III) y dichos de Hernán Daniel Leal Oporto de fs. 553 a fs. 554 (tomo II), tractorista que se encontraba en el lugar de los hechos, Roberto Huaiqui y su amigo José Jovin Oporto, se dirigieron al río Nilahue a fin de escapar de los persecutores. Los carabineros encargados de la persecución Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz, observaron que Huaiqui y Oporto se introdujeron al río Nilahue. Produciéndose a continuación una serie de disparos sobre los cuerpos de Roberto Huaiqui y su amigo José Jovin Oporto. Roberto Huaiqui, recibió un impacto de bala, comenzó a perder vitalidad mientras la corriente del río se lo llevaba. Por otra parte José Jovin Oporto, su amigo acompañante, recibió un disparo en la espalda a la altura del pulmón izquierdo acercándose a la orilla para tenderse en aquel lugar, momento en el cual este grupo extenso de personas, lo detuvieron, golpearon en la cabeza con la culata de una carabina y con pies y puño. Para ser luego trasladado en avioneta hasta Río

Bueno y posteriormente, ser dejado en la Comisaría y luego transportado al Hospital y más tarde puesto en prisión. Lugar en el cual se encuentra nuevamente con sus otros dos amigos acompañantes, que se habían escapado de la emboscada tomando otro camino, Sergio Segundo Calfulef Traillanca y Luis Rubén Díaz Zumelzu, a los cuales les comenta lo sucedido indicándoles que un carabinero de Riñinahue de apellido Ávila, había estado involucrado el día en que les dispararon a él y a Roberto Huaiqui, situación que ratifica en declaración judicial Sergio Segundo Calfulef Traillanca de fs. 722 a fs. 724 (tomo III) y Luis Rubén Díaz Zumelzu a fs. 805 (tomo III) (según consta entre otros antecedentes a fs. 3, fs. 28, fs. 29, fs. 60, fs. 87, fs. 232, (tomo I), fs. 313, fs. 319, a fs. 339, fs. 367, fs. 397, a fs. 313, a fs. 425, fs.476, fs. 478, fs. 511, fs. 512 tomo II, y fs. 804 tomo III).

I.- Que tiempo después de ocurrido los hechos, el padre de Roberto Huaiqui arrendó una embarcación para recorrer el río Nilahue en búsqueda de su hijo, pensando que éste pudo haber quedado atrapado entre las rocas o algún arbusto en la ribera del río, situación que no se pudo concretar pues Carabineros de Riñinahue le impidió llegar al lugar donde ocurrieron los hechos. Cabe señalar, que Carabineros de Lago Ranco, en otras oportunidades, habían ido juntos a efectuar allanamientos al hogar de la víctima de autos, deteniendo al padre de Roberto, llevándolo a la cárcel de Río Bueno. Según consta entre otros antecedentes a fs. 98 (tomo I), en declaración de Dina Huaiqui Barría, fs. 100, fs. 101, fs. 137, fs. 139 (tomo I), fs. 319, fs. 478 (tomo II) y fs. 632, fs. 633 (tomo III).

J.- Que transcurridos los años y debido a no saber del paradero de Roberto Huaiqui, con fecha 30 de abril del año 2008, Eliel Huaiqui Barría, hermano de la

victima de autos, presenta ante el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, solicitud de declaración de Muerte Presunta, en la cual con fecha uno de febrero del año 2012, se dicta sentencia definitiva declarando la muerte presunta de la victima de autos. Según consta entre otros antecedentes a fs. 215, fs.223, fs.232, fs. 258 y fs.271 (tomo I).

K.- Que no obstante ambos uniformados citados precedentemente en los párrafos anteriores, ser parte del grupo de personas (carabineros y civiles) que dio muerte a la víctima de la presente causa, no realizaron ninguna acción tendiente a impedir la ejecución del ilícito, colaborando asimismo con aquel; además no denunciaron ni informaron a la superioridad de Carabineros ni a otra autoridad del hecho, ni consta que se haya efectuado una investigación, ni la existencia de un registro, como consecuencia de la comisión de este hecho.

4°) Calificación. Que los hechos antes reseñados en esta etapa procesal, constituyen los delitos de **homicidio calificado consumado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **Roberto Eder Huaiqui Barría**, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1, circunstancia primera del Código Penal vigente a la época de los hechos; y de **homicidio calificado frustrado** en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **José Jovin Oporto Del Río**, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1, circunstancia primera, en relación artículo 7 del Código Penal vigente a la época de los hechos investigados.

5°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de lesa humanidad. Así se ha pronunciado este Tribunal, la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excm. Corte Suprema, en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

A. Causa rol 27.525 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 27.526 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

C. Causa rol 45.345 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 113.990 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

E. Causa rol 113.989 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

F. Causa rol 18.780 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

G. Causa rol 29.877 del ingreso criminal del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

H. Causa rol 45.344 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

J. Causa rol 45.342 del ingreso criminal del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

K. Causa rol 29.869 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

L. Causa rol 27.527 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 113.986 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

O. Causa rol 63.541 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

P. Causa rol 45.363 del ingreso criminal del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Q. Causa rol 114.048 del ingreso criminal el Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos seguida de muerte de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

S. Causa rol 114.003 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

T. Causa rol 10.851 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

U. Causa rol 10.854 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el homicidio calificado de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez,

Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

V. Causa rol 45.359 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

W. Causa rol 54.035 del ingreso criminal del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, seguida por los apremios ilegítimos de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

X. Causa rol 65.535 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos de Manuel Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

Y. Causa rol 45.343 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

Z. Causa rol 1-2013 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pucón, seguida por detención ilegal de Alberto Colpihueque Navarrete, Eleuterio Colpihueque Lican y Abel Florencio Colpihueque Lican; apremios ilegítimos de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Lican; y homicidios

Sentencia N°93.

Homicidio de Roberto Eder Huaiqui Barría y homicidio frustrado de José Jovin Oporto Del Río.

Sentencia definitiva de 309 fojas.

calificados de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Licán, sentencia de 24 de mayo de 2019.

A.1. Causa rol 57.071 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el homicidio calificado de Jorge Toy Vergara, sentencia de 09 abril de 2021.

B.2. Causa rol 113.997 del ingreso del Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el de secuestro calificado de Segundo Elías Llancaqueo Millán, sentencia de 02 de junio de 2021.

C.3. Causa rol 45.354, del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

D.4. Causa rol 45.361 del ingreso criminal Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

E.5. Causa rol 114.000, del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

F.6. Causa rol 4-2010, del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado de Víctor Hugo Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

G.7. Causa rol 45.362 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

H.8. Causa rol 114.007 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Exequiel Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

I.9. Causa rol 114.042 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

J.10. Causa rol 113.996 del ingreso criminal del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado y apremios ilegítimos de Tomás Segundo Esparza Osorio; y apremios ilegítimos de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

K.11. Causa rol 29.979 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

L.12. Causa rol 45.365, del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

M.13. Causa rol 45.367 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

N.14. Causa rol 44.305 del ingreso criminal del Juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

O.15. Causa rol 45.368 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Bernardino Cuevas, sentencia de 30 de marzo de 2019.

P.16. Causa rol 113.991 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

Q.17. Causa rol 113.478 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Luis Omar Torres Antinao, sentencia de 13 de junio de 2019.

R.18. Causa rol 114.051 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de José Edulio Muñoz Concha, sentencia de 30 de abril de 2021.

S.19. Causa rol 5-2013 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por aplicación de tormentos de Harry Cohen Vera, sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019.

T.20. Causa rol 113.999 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por aplicación de tormentos con resultado de muerte de Nolberto Seiffert Dossow, sentencia de fecha 03 de octubre de 2019.

U.21. Causa rol 114.058 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de apremios ilegítimos de Manuel Antivil Huenunqueo, sentencia de 30 de octubre de 2019.

V.22. Causa rol 6.345 del ingreso criminal del Juzgado del Crimen de Chile Chico, seguida por el delito de homicidio calificado de José Ananías Zapata Carrasco, sentencia de fecha 09 de marzo de 2020.

W.23. Causa rol 114.043 del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el homicidio calificado de Gonzalo Hernández Morales, sentencia de fecha 15 de mayo de 2020.

X.24. Causa rol 45.464 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Benedicto Poo Álvarez, sentencia de fecha 06 de junio de 2021.

Y.25. Causa rol 114.103 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de Alejandro Ancao Paine, sentencia de fecha 03 de septiembre de 2021.

Z.26. Causa rol 18.782 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín San Martín, sentencia de fecha 28 de julio de 2022.

AA.1. Causa rol 114.039 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Diego Celso Saldías Cid, sentencia de fecha 21 de septiembre de 2022.

BB.2. Causa rol 45.355 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, sentencia de 20 de abril de 2023.

CC.3. Causa rol 18-2011 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio simple de José Avelino Runca, sentencia de 27 de julio de 2020.

DD.4. Causa rol 63.551 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el secuestro calificado de Patricio Rivas Sepúlveda, sentencia de 23 de diciembre de 2022.

EE.5. Causa rol 113.969 de ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, sentencia de 2 de enero de 2020.

FF.6 Causa rol 2-2013 de ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio de Domingo Perez San Martín, sentencia de 14 de octubre de 2020.

GG.7. Causa rol 24.428 de ingreso criminal del Juzgado de Letras de Traiguén, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Antonio Inostroza Segura y otros.

Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

6°) CONCEPTO DE LESA HUMANIDAD. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad",

surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: *"Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública"* (**Óscar López Goldaracena**. "Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad". 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. **pp. 29 – 34**).

B. Que en la declaración de fecha 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores ("Derechos Humanos: Justicia y Reparación", **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal: "Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad",

Eugenio Raúl Zaffaroni, pp. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

7°) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es; la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así **Bernard Williams** nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder

tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, **Michael Lynch** insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de **Gerome Frank**, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si

realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. **(Michele Taruffo (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, N° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).**

DECLARACIONES INDAGATORIAS

8°) Que prestando declaración indagatoria MAMERTO TERCERO ÁVILA GONZÁLEZ (27 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 358 a fs. 359 (tomo II), de fs. 482 a fs. 483 (tomo II), de fs. 1.070 a fs. 1.071 (tomo III) y de fs.1.357 (tomo IV);

En declaración extrajudicial de fecha 02 de noviembre de 2015, rolante de fs. 358 a fs.359 (tomo II). Musito que en el mes de marzo de 1966, ingresó a Carabineros de Chile y fue el Retén de Riñinahue el destacamento donde le tocó pasar el golpe de estado o pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Ocurrido esto, no recuerda fecha exacta, pero un par de días de ocurrido, el destacamento de Riñinahue fue evacuado por un tiempo, no recordando si fue uno o dos meses, pero está seguro que en el año 1976 se fue a trabajar nuevamente allí. Preciso que en aquellos años para llegar a trabajar a Riñinahue existían tres posibilidades, una por vía a vapor por el lago, o bote; la segunda era a caballo por los senderos y la última por intermedio de avioneta, las cuales salían o despegaban desde el club aéreo de Río Bueno, que quedaba cerca de donde está

ubicado el hospital de esa comuna. Evidenció que estas avionetas eran conducidas por pilotos civiles de ese club, entre los que recuerda estaba Germán Brullie, al menos él lo transportaba. También recuerda al dueño de un predio de Riñinahue llamado Carlos Madlier o algo así, era más conocido como “Charlie”, tenía una avioneta o al menos él llegaba al campo siempre con una. Son los únicos pilotos que recuerda. Dijo que las avionetas aterrizaban en el predio de los señores Heitmann, ellos tenían una especie de pista, cree que su fundo se llamaba “Chahuilco”. Acotó que para el 11 de septiembre de 1973 no llegaron militares a Riñinahue, ellos se quedaron en Lago Ranco, vestían uniforme de campaña, así que no sabría decir si eran militares, aviadores o marinos, pero se movilizaban en camiones y no aviones o helicópteros. Asevero que nunca había escuchado el nombre de Roberto Huaiqui Barría.

En declaración extrajudicial de fecha 2 de agosto de 2016, rolante de fs. 482 a fs. 483 (tomo II). Relató su carrera en Carabineros de Chile. Para el año 1973 se desempeñaba como Carabinero del Retén de Riñinahue, cercano a Lago Ranco, recordando que el jefe de Retén era el Sargento 2° Carlos Galindo Ruiz, lo seguía Carlos Oñate Jaramillo y quien declaró, precisando que eran generalmente tres funcionarios. Afirmó que nunca participó en la búsqueda de un grupo extremista en el sector El Arenal Riñinahue, de hecho nunca se enteró de este hecho, a pesar de integrar el retén de ese mismo nombre. Añadió que nunca en el retén Riñinahue se realizaron detenciones de índole político pasado el pronunciamiento militar y posterior a esto fue agregado a la Tenencia Lago Ranco, por un periodo de 30 días, regresando luego a su unidad. Respecto al homicidio de Roberto Huaiqui, indicó que ignora todo tipo de antecedentes. Aproximó que posterior al 11 de septiembre de 1973 nunca solicitó colaboración a civiles, sus

servicios los realizaba solamente el personal uniformado. No recordó a una persona de apellido Calfuléf que haya estado detenido en dependencias del recinto policial. Aclaró que ellos daban un buen trato a todas las personas que llegaban al lugar, aunque fueran detenidos. Anexó que para el año 1973 trabajó con Juan Carrasco Rifo, quien era uno de los choferes del furgón policial, respecto a Luis Lopetegui Ríos, trabajaba en la 4° Comisaría de Río Bueno.

En diligencia de careo con Carlos Emilio Galindo Ruiz mediante videollamada, de fecha 26 de abril de 2016, rolante de fs. 1.070 a fs.1.071 (tomo III). Ratificó sus declaraciones extrajudiciales en autos. Posteriormente se le preguntó por la persona con la cual se le careo, a lo que respondió que efectivamente la conoce, se trata de Carlos Galindo. Aseguró que se mantiene en sus dichos, pues desconoce totalmente los hechos que expresó el señor Galindo, en el sentido que no estuvo agregado al retén de Llifén, sino que estuvo agregado a la Tenencia de Lago Ranco y nunca tuvo ningún enfrentamiento relacionado con los hechos que se describieron.

En declaración judicial de fecha 2 de marzo de 2023 mediante videollamada, rolante de fs.1.357 (tomo IV). El Tribunal le leyó la declaración de fs. 1.070 a fs. 1.071, la cual ratificó. Posteriormente se le leyó en lo pertinente, la declaración de fs. 1.166 a fs. 1.168 y se le consultó si reconoce los hechos reproducidos y si ubicaba a la persona de Roberto Huaiqui Barría, ante lo cual contestó que desconoce esos hechos, nunca ha tenido participación y nunca ha sido atacado por nadie, ni tampoco ha atacado a nadie. Agregó que en la fecha en que ocurrieron los hechos que se le indicaron, esto es entre el 15 y el 17 de septiembre de 1973, estaba agregado a la Tenencia de Lago Ranco. Desde el 12 de septiembre hasta mediados o hasta fines de octubre del mismo año y el

Sargento Galindo fue agregado al retén Llifén, por lo tanto no tenían ninguna relación a la distancia que se encontraban. Desconoce totalmente ese procedimiento. Luego se le preguntó por los mismos hechos pero respecto a José Jovin Oporto del Río, ante lo cual señaló que no lo conoce, no los conoció y jura decir la verdad.

9°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado **MAMERTO TERCERO ÁVILA GONZÁLEZ**, quien fue **sometido a proceso** a **fs. 1.132 a 1.172 (tomo IV)** con fecha 09 de diciembre de 2022. Procesamiento confirmado por la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco a fs.1.238 (tomo IV), con fecha 17 de enero de 2023. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 1.467 a fs. 1.504 (tomo IV)** con fecha 23 de mayo de 2023. Como **autor** de los delitos de **homicidio calificado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría, (Homicidio calificado consumado); y **homicidio calificado frustrado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de José Jovin Oporto del Río; delitos perpetrados en la comuna de Lago Ranco. Ambos delitos acaecidos según mérito de proceso **entre el 15 y 17 de septiembre de 1973**. Que si bien el acusado niega haber tenido participación en los hechos y además no se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados puntualizando lo siguiente:

DECLARACIONES (9)

1. JOSÉ JOVÍN OPORTO DEL RÍO (18 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 327 a fs. 329 (tomo II);

En declaración judicial de fecha 02 de octubre de 2015, rolante de fs. 327 a fs.329 (Tomo II). Relató que el día 11 de septiembre un grupo de jóvenes socialistas, comunistas, etc, todos de la UP, salieron desde la ciudad de Lago Ranco con destino a Arquihue, para poder hacer una reunión política y ver las acciones de resistencia contra, en ese momento, gobierno de facto. Entre ellos estaban Sergio Calfulef, Roberto Huaiqui, Héctor Angulo, Víctor Zavala, Luis Díaz Zumelzu, Alfredo Calfulef, los hermanos Manuel, Jorge y Sergio Furniel Ríos, Evaristo Vera y algunos más cuyas identidades no recordó. Siguió su relato contando que caminaron y pasaron por Riñinahue, pasaron el Puente Nilahue, donde tuvieron algunos inconvenientes con guardias blancas, que era gente de civil que apoyaba el golpe, los cuales les dispararon al verlos sin lograr lesionar a ninguno de ellos. De ahí siguieron caminando a Arquihue, donde se percataron que no había ninguna resistencia ni grupo organizado, así que decidieron volver luego de permanecer hasta el día 15 de dicho mes (septiembre). Anexó que luego de salir de una parte boscosa y pasar cerca de un cobertizo, mientras caminaba con Huaiqui, un sujeto salió a dispararles, así que corrieron hacia el Puente Nilahue cayendo en una emboscada. Puesto que en el lado opuesto estaban apostados otros civiles, mucha gente, entre los cuales estaba Víctor Lacoste (fallecido), quien dirigía al grupo, los cuales empezaron a dispararles, por lo que debieron saltar del puente y tratar de irse con la corriente del río. Continuo que ya en el agua los disparos siguieron en su contra por parte de los civiles antes referidos, pero también desde dos avionetas, también de propiedad de civiles que sobrevolaban el sector. Conjeturó que una de ellas era de un señor de apellido

Heitmann (fallecido). Hasta que de pronto vio que Huaiqui perdía toda vitalidad y la corriente del río se lo llevó, mientras su cuerpo giraba de vez en cuando movido por el oleaje. El declarante dijo haber sentido un golpe en la espalda a la altura del pulmón izquierdo, pero no le impidió seguir nadando, por lo que pudo llegar a la orilla y tenderse sobre una pierna, ya sin fuerzas. Divulgó que en ese instante llegaron los atacantes y uno de ellos de apellido Rivas (fallecido), le golpeó la cabeza con la culata de un revólver causando una herida que empezó a sangrar inmediatamente. Luego lo tomaron a la fuerza y en la pampa más cercana lo empezaron a golpear brutalmente con pies, puños y las propias carabinas. Preciso que ahí también estuvo involucrado Lacoste. Destacó que de pronto Heitmann y Miguel Obando, que conocían a su abuelo, intervinieron a su favor y pararon la golpiza, sacándolo de sus agresores, para luego trasladarlo en su avioneta hasta Río Bueno, donde lo entregaron en la Comisaría para que Carabineros lo llevara al hospital, lo cual obedecieron, pudiendo sobrevivir gracias a los auxilios prestados en ese centro hospitalario. Aclaró que tanto los civiles como los propios Carabineros de Río Bueno, querían terminar con su vida, pero Heitmann tenía tanto poder que todos le obedecieron y ese hecho fue el que logró que no lo mataran. Adoso que las demás personas que iban con ellos se habían quedado ocultas en una zona boscosa mientras él y Huaiqui revisaban que era seguro pasar por el puente, lo que claramente no fue así. Por esta razón los demás no fueron heridos ni detenidos en esos instantes. Narró que en el hospital de Río Bueno estuvo desde el 15 de septiembre hasta las 10:00 horas del 3 de octubre de 1973, oportunidad en que los Carabineros lo sacan y lo llevan detenido hasta la cárcel del sector Isla Teja. Inquirió que lo vivido en sus detenciones e interrogatorios, el consejo de guerra que se realizó y que finalmente se fue a

Argentina. Finalmente, ante la pregunta del Tribunal, respondió que un Carabinero de Riñinahue de apellido Ávila, que luego se fue a la 3° Comisaría de Lago Ranco, estuvo involucrado el día en que les dispararon. A este lo acompañaban otros carabineros, pero desconoce sus identidades. Contó que a Roberto nunca más lo volvió a ver y supo que unos tres o cuatro meses después que el río lo devolvió, pues habría caído en un pozo originalmente. Por lo que supo, a Roberto lo enterraron sus familiares a la orilla de la playa del Río Nilahue, cerca de la cascada que existe, aunque no está seguro de esto, pues solo fueron comentarios que escuchó.

2. CARLOS GERMÁN OÑATE JARAMILLO (26 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 360 a fs. 362 y de fs. 461 a fs. 462 (tomo II);

En declaración extrajudicial de fecha 06 de noviembre de 2015, rolante de fs. 360 a fs. 362 (Tomo II). Expuso que perteneció a Carabineros de Chile y para el año 1973 estaba trabajando en el Retén Riñinahue, de donde fueron evacuados después del 11 de septiembre de 1973, quedándose en Llifén. Recordó que para llegar a Riñinahue había tres formas de hacerlo; a vapor y/o bote, a caballo, a pie y en avioneta. Él se trasladaba regularmente a vapor o a caballo, en avioneta solo recuerda que una vez se subió, que fue para cuando erupcionó el volcán. Siguiendo con su relato, dijo que durante el tiempo que estuvo en Llifén, ese sector también llegaban avionetas, las que se estacionaban en el sector “Chollinco” donde había un aeródromo que era de don Edmundo Provoste, ahí había por lo general 4 o 5 avionetas particulares. Puntualizó que en Llifén no había ninguna base de militares o por lo menos él solo los veía pasar, ellos pasaban al balseadero de Calcurrupe, que había para ese tiempo cerca de Llifén. Además, en el sector de Arquihue había un potrero que era de la familia Lacoste,

donde también vio que aterrizaban aviones, inclusive remontándose a esos años, pudo recordar que tras el 11 de septiembre de 1973, estando trabajando en Llifén, junto a unos colegas salieron a trabajar al sector Arquihue, estaban por allá cuando vieron pasar unos aviones de la aviación, los que empezaron a disparar. Se comentó que le dispararon a un grupo de terroristas. Rememora este hecho, ya que inclusive por temor a que les dispararan a ellos se tuvieron que esconder por la cordillera, pero no sabe si estos hechos se relacionan con la persona por la que se le consultó, que corresponde a Roberto Huaiqui Barría, pues ese nombre nunca lo había escuchado. Aseveró que mientras trabajó en Llifén y Riñinahue, nunca observó que sus colegas o los jefes de cuarteles trabajaran con los militares, así que él solo cumplió funciones netamente policiales. Finalmente indicó que el hecho por el cual tras el 11 de septiembre de 1973 a él y a sus colegas Mamerto Ávila Gonzalez, Feliciano Curiñanco y el jefe de Retén, Carlos Galindo Ruiz; los evacuaron y fue porque se supo que para el sector de Riñinahue, específicamente el Retén, iba a ser atacado por personas que iban subiendo armadas. Quien declaró se fue a Llifén y otros se fueron a Lago Ranco, trasladándolos a todos en dos vapores que dispusieron con dicho fin. Este Retén (Riñinahue) permaneció sin Carabineros por aproximadamente un año, pero no recordó bien, ya que volvió muchos años después de que ese Retén volviera a funcionar.

En declaración judicial de fecha 17 de agosto de 2016, rolante de fs. 461 a fs. 462 (Tomo II). Musito que para el año 1973 se encontraba trabajando en el Retén Riñinahue con el grado de Cabo 1°, siendo el jefe del Retén el Señor Carlos Galindo , sin embargo ocurrido el golpe militar fue levantado el retén y el personal distribuido entre Lago Ranco y Llifén, correspondiéndole integrar esta última unidad. En cuanto al hecho investigado por este Tribunal, afirmo que nada puede

decir, que no conoció a la víctima Roberto Huaiqui Barría ni conoce las circunstancias en que éste falleció. Se le dio lectura al testigo el hecho relatado por Carlos Galindo a fs. 450 y siguientes en autos (disparo de civiles contra supuestos saqueadores), a lo cual expreso: “No participé de ese hecho ni recuerdo haber escuchado sobre ese tema”. Espeto que si el jefe del retén u otro colega tuvieron conocimiento de un hecho de esa envergadura debieron informarlo a la autoridad o a los tribunales, pero no recuerda que se haya comentado nada por el estilo. Descargó que no era normal que un Carabinero haya visto un hecho tan grave y se haya hecho el desentendido así como tampoco era normal, ni siquiera en esa época conflictiva del país, que la gente hiciera justicia por mano propia. Lo que sí escuchó es que un grupo de personas trataban de cruzar hacia Argentina por el sector de Nilahue e intentaron robar la casa del Señor Arturo Ávila que vivía frente a la casa de Reinerio Vásquez. Continuo que en ese momento Arturo Ávila no estaba, pero sí su cuidador que además era sastre, ignora su identidad, y este les habría disparado para ahuyentarlos. No supo si se trataran de las mismas personas que investiga el Tribunal. Posteriormente se le consultó al testigo sobre la dotación del Retén Llifén, respondiendo que estaba el Sargento 1° Cereceda, el Cabo Galindo, el Cabo Juan Carrasco, un carabinero de apellido Salgado, otro de apellido Troncoso y quien declaro. No recordó a nadie más, aunque posiblemente el Retén debe haber estado integrado por unas dos personas más. Finalmente se le consultó al testigo si supo de avionetas particulares armadas que fueran usadas para perseguir a los socialistas que intentaban cruzar hacia Argentina, a lo cual respondió que vio avionetas en Riñinahue, en la pista de aterrizaje en el Fundo Ranquil, también en la que había

en el Fundo Chollinco de Llifén, pero jamás supo que las avionetas civiles se usaran con ese fin persecutor.

3. SERGIO SEGUNDO CALFULEF TRAILLANCA (16 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 484 a fs.487 (tomo II) y de fs. 722 a fs. 725 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 3 de agosto de 2016, rolante de fs. 484 a fs. 487 (Tomo II), copia de fs. 715 a fs. 718 (tomo III). Relató que para el año 1973 tenía 16 años de edad, por lo que vivía con su grupo familiar en calle Concepción de la comuna de Lago Ranco y trabajaba en un local llamado “La Bodega de la Estación”, el que estaba administrado por Juan Daniel quien era militante del Partido Socialista, por lo que para poder trabajar había que inscribirse en la Juventud Socialista. Informo que una vez ocurrido el golpe militar, llegó a su hogar Ricardo Manzano Castillo y Sergio Duhalde (ambos fallecidos), quienes señalaron que si los volvían a ver los matarían y debido a lo anterior, con la finalidad de resguardar sus vidas, emprendieron camino hacia Argentina con su hermano Eliel Calfulef, Víctor Zabala, Evaristo Vera, Héctor Angulo, Jorge Furnier, Manuel Furnier, los profesores Carlos Velásquez, Carlos Bórquez y Carlos Ancacura, alias “El Calucho”, Luis Illera Ancao, otro sujeto de apellido Fuentes y Roberto Huaiqui Barría; saliendo alrededor de las 10 de la mañana del día 11 de septiembre de 1973 hasta Riñinahue y posteriormente a Chihúio, cercano a la frontera. Encontrándose en ese lugar con el jefe de estación de Lago Ranco, de nombre Raúl Poblete, quienes también estaba esperando junto a otras personas que no conocía, cruzar hacia Argentina, pero por las condiciones climáticas y la nieve que había en el lugar, se tuvieron que regresar el día 16 de septiembre de 1973 hasta la localidad de Arquihue, tomando en ese lugar un bus que iba hacia

Llifén, junto a Víctor Zabala y su hermano Eliel. Adoso que al llegar a Llifén, alrededor de las 9:00 horas, en un control vehicular realizado por cuatro carabineros, frente al Retén Llifén, entre los que recordó a Mamerto Ávila González y Juan Sandoval, quienes subieron al bus en compañía de los detenidos Carlos Bórquez y Carlos Velásquez, quienes se notaban muy golpeados, indicando a ellos sus identidades, siendo detenidos en forma inmediata con golpes de sus fusiles, bajándolos del bus e ingresándolos a la guardia armada, a la entrada del Retén Llifén. Indico que los golpearon en reiteradas oportunidades con unas gomas y pinchazos con los fusiles, finalmente a golpes de puños y pies, recordó que les colocaron una bolsa de nylon en la cabeza, con la finalidad de quitarles oxígeno, consultándoles dónde tenía armamento. Difundió que de los cinco funcionarios que había en el Retén, quien fue más cruel en sus torturas fue Mamerto Ávila. Dijo que alrededor de las once o doce del día, lo pasaron a los calabozos que estaban al interior del Retén junto a su hermano y Víctor Zabala, instante en que llegó nuevamente Mamerto Ávila y les señaló a él y su hermano, que uno de los dos iba a morir, para que se despidieran, tomando la determinación el declarante que tenía que morir, porque su hermano Eliel tenía 13 años. Señaló que lo sacaron en una camioneta, lo trasladaron hasta el sector Los Cerrillos, a dos kilómetros del camino que va hacia Futrono, golpeándolo con golpes de pies y un churro de goma. En ese lugar había cuatro funcionarios de los cuales solamente ubica a Juan Sandoval y Mamerto Ávila, quien señalaba en todo momento que el declarante era Santana, que dijera la verdad y no se cambiara el nombre. Continúo haciendo un relato de sus detenciones y torturas sufridas. Posteriormente, preguntado por Roberto Huaiqui Barría, afirmo que iban juntos en dirección a Chihuahio, paso unos kilómetros del Río Nilahue, un señor de apellido

Vásquez, quien vivía en una casa de dos pisos a un costado del puente Nilahue, empezó a disparar junto a otros civiles hacia ellos, por lo tanto el grupo se separó. Roberto Huaiqui junto a José Jovin Oporto regresaron en dirección a Lago Ranco. Ignora qué les pasó a ellos, hasta que José Jovin Oporto llegó a la cárcel de Valdivia, herido en su espalda con impacto de bala y les contó lo sucedido. Anexó que en el año 1980, estuvo detenido por hurto en la cárcel de Río Bueno, con un señor de apellido Rivas, quien se identificó como quien había participado en los hechos en que murió Roberto, por lo tanto se hizo amigo de él con la finalidad de obtener información de lo sucedido, quien con el tiempo le manifestó que para el 16 de septiembre de 1973, había participado en la balacera en la que falleció Roberto, indicando que Vásquez habría matado a Roberto Huaiqui, quien una vez recibido los impactos de bala se tiró al Río Nilahue y José Jovin Oporto también se tiró con la finalidad de rescatar a su compañero, logrando sacarlo hacia la orilla del río, pero como llevaba tantos impactos, soltó a Roberto y se lo llevó la corriente. No obstante a que el mismo Rivas, al momento en que José Jovin sacaba a Roberto también le dispararon por la espalda, a quien lo fueron a buscar a la orilla del río, sacándolo a una pampa, lo amarraron de un árbol, comenzaron a golpearlo junto a 20 personas que participaban en la búsqueda. Según lo comentado por Rivas, este grupo pertenecía a Patria y Libertad, de los cuales recordó que Gilberto Ancacura en una oportunidad le comentó que después que se llevaron detenido a José Jovin, siguieron con la búsqueda del cuerpo de Roberto Huaiqui, mencionando que lo encontraron cerca del lago, sacándolo hacia la pampa, instante en que un tío que participó en la búsqueda se hizo cargo de él, ignorando el lugar donde lo enterró.

En declaración judicial de fecha 24 de abril de 2018, rolante de fs. 722 a fs. 725 (tomo III). Ratificó su declaración extrajudicial y además de ello agregó que en la golpiza de José Jovin Oporto y la muerte de Roberto Huaiqui también participó Mamerto Ávila y que los disparos no venían de las avionetas, los disparos fueron realizados por los civiles y Carabineros (entre ellos Mamerto Ávila), que se encontraban en el puente, desconociendo ahora los nombres de los otros Carabineros. A continuación detalló algunos datos respecto a personas mencionadas en su declaración extrajudicial y respecto a Roberto Huaiqui, dijo que este era su primo, hijo de un primo de su padre Sergio Calfulef Huaiqui. Sumo que su primo Roberto emprendió viaje a Argentina pues era socialista y decidió arrancar después del golpe ya que temía por su vida. A la pregunta que le hizo el Tribunal, aseveró que no recuerda a ningún José Oporto Del Río, pero el que sí iba con ellos era Jovin Oporto Del Río (actualmente en Argentina), quien era socialista e iba con Roberto Huaiqui Barría cuando los emboscaron, pero no pudo salvarlo pues él igual estaba herido de bala. Expreso que decidieron emprender camino hacia Argentina a pesar de estar en invierno y con condiciones climáticas adversas, pues dos profesores del colegio les advirtieron lo que les sucedería, que si se quedaban los iban a matar los militares, los Carabineros, don Ricardo Manzano o don Sergio Duhalde. El declarante pensó que si antes del golpe militar, don Sergio Duhalde había sido capaz de dispararle a su primo quedando en la impunidad, después de lo sucedido su vida corría peligro. Pero después de lo que pasaron y lo difícil que fue el viaje se arrepintió de hacerlo. Narró que el circuito que recorrieron desde que salieron de Lago Ranco el 11 de septiembre de 1973 hasta Chihuio fue: Lago Ranco a Riñinahue, desde ahí salieron una noche hasta un complejo maderero que queda antes de llegar a Chihuio, en un lugar llamado

Arquihue y les dijeron que esa era la frontera, desde ahí regresaron pues el frío y el hambre no los dejó seguir. Para alimentarse en el trayecto hasta Chihúio, pasaron a la casa de un señor mayor en el Lago Maihue y este les dio agua, harina tostada y los fue a dejar al otro lado del lago en bote, ese señor era conocido de Héctor Angulo. Desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la noche del 15 de septiembre de 1973, dormían donde los encontraba la noche, una vez al lado de un estero, en una cueva y arriba de los árboles amarrados para no caerse. Preguntado por don Raúl Poblete, dijo que este era miembro del Partido Comunista y jefe de la estación de trenes de Lago Ranco y que cuando llegaron a Chihúio este estaba allí, pero ellos siguieron su camino y lograron llegar a Argentina. Espeto que no conocía a las personas que estaban con don Raúl Poblete, pero después supo que en el grupo había dos hermanos de apellido Urrutia del sector de Cayurruca, de la comuna de Río Bueno, los que después estuvieron presos con el declarante en Valdivia. Manifestó que cuando estuvo detenido por Carabineros de Llifén fue interrogado y confundido con Belarmino Santana, era este quien peleó con Mamerto Ávila, cuando ese Carabinero trabajaba en Lago Ranco. Respecto a los hechos que relató en su declaración y que dicen relación con la muerte de Roberto Huaiqui Barría, inquirió que la fecha aproximada en que ocurrió la emboscada debe haber sido el 15 de septiembre de 1973, pues de regreso el grupo se separó ese día. Su grupo estaba compuesto por su hermano (Eliel Calfulef), Víctor Zabala y quien declaró. Se fueron con dirección a Llifén en bus, el 16 de septiembre de 1973 en la mañana, pues se quedaron a pasar la noche en Arquihue, con la intención de tomar el bus el día 16 temprano, mientras que el grupo en que iba su primo Roberto Huaiqui se fue Arquihue el mismo día 15 de septiembre de 1973, con dirección a Lago Ranco por

el camino que une a Lago Ranco con Riñinahue, caminando. Lo ocurrido en el río Nilahue lo supo por declaraciones de personas con las que estuvo detenido, pues él no estuvo en ese lugar cuando murió su primo. Aseveró que José Jovin Oporto le contó que pasando por el puente Nilahue los emboscaron un grupo de aproximadamente 15 personas, entre funcionarios de Carabineros (entre ellos Mamerto Ávila), algunos civiles, todos los que dispararon a Roberto Huaiqui y José Jovin Oporto. A Roberto se lo llevó el río y a José Jovin lo detuvieron y se lo llevaron herido de bala para torturarlo. Contó que la emboscada se produjo a la altura del puente, o sea, en el puente mismo, que el nombre del Señor Vásquez es Nello Vásquez, trabajador del predio Nilahue y el otro civil que recuerda es don Osvaldo Rivas, también trabajador del predio de Nilahue, fallecido actualmente. Aseguró que solo supo de la presencia de Carabineros, no de Militares y que de los Carabineros que participaron, solo recordó a Mamerto Ávila. Reiteró no haber estado en la emboscada y que la información que maneja le fue entregada por José Jovin Oporto, sobreviviente de la misma. Respecto a las avionetas, dijo que todos los días que estuvieron en su huida a Argentina, vio avionetas particulares sobrevolar la zona y se escuchaban disparos a lo lejos de las avionetas particulares sobrevolando la zona y escuchaba disparos a lo lejos. Urdió que según los dichos de José Jovin Oporto, los disparos que mataron a Roberto Huaiqui y que también recibió él, no provenían de las avionetas, provenían de carabineros y civiles, que participaron en la emboscada. Expresó que el grupo se separó el 15 de septiembre de 1973, pues Roberto Huaiqui y José Jovin Oporto bajaron de Arquihue el mismo 15 de septiembre, mientras que los demás permanecieron arriba hasta el 15 de septiembre de 1973, fecha en que bajaron temprano para tomar un bus con dirección a Llifén, es por eso que no estuvo en la

emboscada y tampoco pudo volver a ayudar a su primo Roberto Huaiqui. Agregó que don Osvaldo Rivas, del sector Riñinahue, también era trabajador del predio de Nilahue y participó de la emboscada donde murió su primo Roberto Huaiqui. Según lo que supo, don Andrés Montecinos fue la persona que les sirvió de guía para llegar hasta Chihuio, tiene entendido que después de eso, fue torturado para que dijera hacia dónde arrancó la gente que allí se encontraba y luego de las torturas fue arrojado vivo desde un helicóptero. Por último indicó que la persona que sabe cómo sucedieron los hechos, pues estaba junto a su primo cuando murió, es José Jovin Oporto, don Nello Vásquez y Mamerto Ávila.

4. LUIS RUBÉN DÍAZ ZUMELZU (17 años de edad a la fecha de la época), quien declaró de fs. 488 a fs. 489 (tomo II) y de fs. 813 a fs. 814 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 3 de agosto de 2016 rolante de fs. 488 a fs.489 (tomo II), copia de fs. 804 a fs.805 (tomo III). Informo que para el año 1973 tenía 17 años, por lo tanto vivía junto a su madre en la comuna de Lago Ranco. Desarrolló que en esa época trabajaba en la empresa agrícola ECA, la cual era de propiedad del Estado y era simpatizante socialista. Debido a lo anterior, cuando ocurrió el golpe militar, el día 11 de septiembre de 1973, los trabajadores de la comercial huyeron hacia Argentina, entre los cuales recuerda a José Jovin Oporto, Sergio Calfulef, Carlos Ancura Antihual, Eliel Calfulef, Emilio Huaiqui, Víctor Zabala, Evaristo Vera, Héctor Angulo, Jorge Furnier, Manuel Furnier, los profesores Carlos Velásquez y Carlos Bórquez, Luis Higuera Ancao y Roberto Huaiqui Barría, Raúl Poblete, quien era el jefe de estación, Tenchi Rudolf, entre otros que no recordó. Relató que en la tarde del 11 de septiembre de 1973, llegaron hasta Riñinahue, lugar donde pernoctaron, para seguir su camino hasta llegar el día 12 de septiembre al Lago Maihue, lugar donde aviones al parecer

civiles tiraban bombas, por lo tanto el grupo se dispersó, juntándose en la tarde donde un lugareño de apellido Rozas, al día siguiente los ayudó a cruzar el lago, siguiendo su camino hasta el complejo maderero Arquihue, precisando que Roberto Huaiqui aún seguía en el grupo. Al llegar a Río Blanco, se devolvieron debido a que había mucha nieve, por lo tanto iniciaron su proceso de regreso hacia Arquihue, permaneciendo en un refugio, dispersándose el grupo para tratar de regresar a Lago Ranco. El declarante regresó con Carlos Ancacura, Juan Figueroa, Gualo Villagrán, tomando la ruta de Arquihue hacia Llifén, logrando cruzar por el sector de Calcurrupe por el desagüe del río Nilahue, llegando a Ensenada, donde un señor llamado Juan Aguilar, quien los cruzó en bote hasta Nilahue, regresando a Lago Ranco un 14 de septiembre de 1973, a su domicilio. Lugar donde fue detenido por parte de Carabineros, entre los que recuerda uno de apellido Carrasco y Villegas, del Retén Lago Ranco, quienes lo trasladaron hasta la unidad policial, comenzando las torturas por parte de los funcionarios policiales, recordando que uno de ellos fue Lopetegui. Respecto a Roberto Huaiqui con José Jovin Oporto, divulgó que este último llegó detenido a la cárcel de Valdivia, quien comentó que ellos venían bajando de la cordillera y al llegar al puente Nilahue, había guardias blancas, que se trataban de lugareños con armas, quienes dispararon en contra de ellos, hiriendo de muerte a Huaiqui Barría y posteriormente hirieron a José Jovin Oporto, mencionando que en esa oportunidad, habrían participado dos personas del grupo que logró reconocer, uno de apellido Ávila, Rivas y Vásquez. Anexó que fueron detenidos por los Carabineros del Retén Riñinahue. Destaco que posterior a este hecho, la familia lo salió a buscar, sin resultados positivos, ya que el cuerpo nunca apareció por ese

sector. No obstante los lugareños si veían a alguna persona extraña en el sector, llamaban en forma inmediata a Carabineros.

En declaración judicial de fecha 11 de febrero de 2019, rolante de fs. 813 a fs. 814 (Tomo III). Ratificó su declaración extrajudicial pero rectificó que el 12 de septiembre de 1973, él regresó a Lago Ranco, ya que lo tomaron detenido el 13 de septiembre de 1973; y entre el 13 y el 14 de septiembre fue trasladado a Río Bueno. Allí estuvo detenido una noche y al día siguiente lo trasladaron a Valdivia. Respecto a José Jovin Oporto, Sergio Calfulef, Carlos Ancacura, Eliel Calfulef, Emilio Huaiqui, Víctor Zabala, Evaristo Vera, Héctor Angulo, Jorge Furnier, Manuel Furnier, los profesores Carlos Velásquez y Carlos Bórquez, Luis Iguera, Raúl Poblete y Roberto Huaiqui; dijo que efectivamente conocía a todas esas personas, que todas ellas formaban parte del grupo con el que arrancaron a Argentina. Aclaró que decidieron huir a Argentina porque les dijeron que los iban a detener por simpatizar con el Partido Socialista. Contó que pasaron a Riñihue a un asentamiento llamado “Salvador Allende”, allí los alimentaron y luego siguieron camino a Argentina. De regreso pasaron la desembocadura del lago y un caballero de nombre Juan Aguilar, los trasladó hasta el sector Nilahue. Preguntado por Raúl Poblete, el jefe de estación, dijo que no recuerda otro nombre o apellido de este y que estaba casado o conviviendo con la señora Tenchi Rudolph. Afirmando que no recuerda el nombre del lugareño de apellido Rozas que los ayudó a cruzar el Lago Maihue en bote, solo supo que después lo tomaron detenido los militares por haber hecho ese traslado. No recordó a otras personas que los hayan ayudado en su recorrido. Con respecto a la ubicación del Río Blanco, responde que este se situaba saliendo como a 7 km de Arquihue hacia Chihuío. Preguntado por los nombres de lugareños que conformaban la guardia blanca en la época que

acaecieron los hechos, apuntó que recuerda un tal Ávila, Vásquez y un Rivas, pero no sabe sus nombres completos ni los nombres de los otros integrantes. Pero eso se lo contaron, porque ellos no pasaron por ese lugar, pasaron por la orilla del lago. Informó que el puente Nilahue queda sobre el río del mismo nombre, a unos 50 metros antes del salto Nilahue. Preguntado por la fecha exacta del homicidio de Roberto Huaiqui, invocó que no lo sabe con certeza, pues estaba detenido cuando se enteró de su presunto homicidio. Respecto a si vio o supo si había militares en la zona cordillerana del Lago Ranco posterior al 11 de septiembre de 1973, dijo que sí había militares, específicamente en la zona de Arquihue y supo que había un Capitán, pero no recordó su nombre, apellido y/o seudónimo. No tiene más antecedentes sobre la muerte de Roberto Huaiqui.

5. HERNÁN DANIEL LEAL OPORTO (20 años de edad a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 553 a fs. 554 (tomo II) y de fs. 603 a fs. 605 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 2017, rolante de fs. 553 a fs. 554 (tomo II). Relató que para 1973 se encontraba trabajando en el asentamiento “El encanto” de Riñinahue, desempeñándose como tractorista, recordando que pasado el golpe militar llegó un Carabinero de apellido Cereceda, quien venía del Retén Llifén, comunicando que desde ese momento quedaban bajo sus órdenes, debiendo trasladar a trabajadores del asentamiento hasta el puente Nilahue, para que vieran cómo atrapaban a los posibles extremistas. Cimentó que una vez que llegaron al puente, llegó Carabineros de Riñinahue y Llifén, comenzando la búsqueda de los posibles extremistas. Evidenció que mientras se encontraba en el puente, Carabineros y un avión que sobrevolaba el perímetro, ubicaron a José Jovin Oporto primero, quien iba al parecer herido de su

espalda, siendo testigo desde el puente Nilahue junto a otras personas que se encontraban de civil, pero portando revolver en el cinto, cuando Roberto Huaiqui se lanzó al río a unos 60 metros antes del salto, momento en que las personas que se encontraban a su lado comenzaron a dispararle, se sentían los impactos en el agua y Roberto Huaiqui se quiso tomarse de una piedra, instante en que recibió un disparo, cayó al agua de espalda y pasó bajo el puente, posteriormente bajo el salto, su cuerpo iba sin vida. Dijo que las personas que dispararon a Huaiqui, eran lugareños del sector y de Llifén, quienes usaban sombreros beige o blanco grandes, ignorando sus identidades. Pasado estos hechos, se dirigió a sus tractores junto a Tito Meza Jaramillo, quien vivía cerca del sector Ignao. Preciso que al costado del camino de ese tiempo había un potrero largo, el cual servía como cancha de aterrizaje para el avión que sobrevolaba el área y el cual trasladó a José Jovin Oporto con rumbo desconocido. Afirmando que de los Carabineros que andaban en ese momento, no pudo precisarlo, porque eran Carabineros recién egresados, recordándolo porque había hecho el servicio un año antes que él en Punta Arenas en el año 1971 y eran originarios de la comuna de San Carlos. Afirmando que tiempo después, el cuerpo de Roberto Huaiqui se encontraba en el salto Nilahue y al parecer con el tiempo estaban solamente los huesos, producto de ello, su primo Alonso Barriga Leal, se dirigió a hablar con un señor de que había sido juez del sector, quien le manifestó que dejara el cuerpo en el lugar que estaba, para que no se metiera en problemas.

En declaración judicial de fecha 12 de julio de 2017, rolante de fs. 603 a fs. 605 (tomo III). Ratificó su declaración prestada ante la Policía de Investigaciones. A la pregunta del Tribunal, contestó que él estaba físicamente en el trabajo, en el asentamiento “El Encanto” de Riñinahue. Cereceda llegó solo en vehículo, reunió

a todos los que estaban, eran más de 20 personas en el asentamiento y esto debe haber sido como a las ocho y media de la mañana. Dijo que andaba con un fusil SIG y casco de guerra, les preguntó quién era el presidente de Chile y les indicó que los cuatro miembros de la junta. En ese momento colocó su arma al frente y les dijo que si alguien no seguía las órdenes podía abrir fuego, que estaban en pie de guerra y que tenía todas las atribuciones. Les indicó que suban al tractor para que vieran cómo iba a tomar a “esos”. Comunicó que quienes estaban en ese lugar eran Germán Campos y Waldo Rivas, ambos fallecidos, y tuvieron que ir a ver esto en el coloso del tractor. También se les dio la orden de no hablar nada. Ante la pregunta del Tribunal, respondió que no recuerda a nadie del Retén Llifén, de quienes se le leyó en ese momento. Sugirió a su relato que Cereceda habló de extremistas tales por cuales, que de “El Encanto” fueron hasta el puente Nilahue y que Meza también puede que haya estado, no se acuerda muy bien. Estaba el refuerzo que llegó de abajo, llegaron de los dos retenes. Sumo haber visto más o menos unos 10 carabineros que era una cadena de tiradores, orillando un zanjón que había un poco más allá. A lo que se le preguntó, afirmó que Roberto Huaiqui hizo el servicio cuando él, estuvo en Punta Arenas y lo conocía. Lo vio en el puente Nilahue cuando iba una persona nadando. Seguramente quería cruzar el río. Aseveró que este quiso tomarse de una piedra y ahí fue cuando le dispararon. Cereceda estaba en ese momento. Eran varios los uniformados que disparaban. El cuerpo se fue por el agua hasta el salto. Respecto de los del retén Riñinahue, no pudo confirmar si andaban. Que vio a Carabineros, como había hecho el servicio, los sabría distinguir. Luego se llevaron al que tomaron, a Oporto, que seguro estaría en el mismo lugar en el matorral. A José Jovin Oporto no lo conocía. Lo atraparon porque andaban los dos ahí y dijeron que a Oporto lo

llevarían en avión. No maneja si los civiles andaban con los suboficiales o vivían allá. No supo dónde habrá quedado el cuerpo de Roberto Huaiqui, se decía que había quedado en el salto, tampoco supo si fue enterrado, pero de ser así cree que lo sabría. Añadió que militares anduvieron en jeep porque vio pasar las patrullas que recorrían todo. No supo si dispararon del avión, tampoco supo si Tito Meza fue testigo pero puede decir que cuando Cereceda habló tendría que haber estado porque era tractorista, siempre andaban juntos, trabajaba con él, pero no lo recuerda en el puente. Apuntó que nunca se comentó nada más de lo sucedido, que en ese tiempo él vivía con sus padres. Nunca más vio a Cereceda y nunca más llegó otro oficial que hiciera lo mismo que hizo este. Se hizo el informe y se encontró que toda era gente trabajadora.

6. DINA URIA HUAQUI BARRÍA (16 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 109 a fs. 110 (tomo I) y de fs. 632 a fs. 634 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero de 2014, rolante de fs. 109 a fs.110 (tomo I). Narró que para el año 1973, ella residía junto a sus padres Emilio Huaiqui Calfulef, Violanda Barría Santana y sus hermanos en la ciudad de Lago Ranco. Tenía 16 años de edad y sus hermanos José (18 años), Nériida (20 años), Ismael (16 años), Roberto (17 años) y Eliel (12 años). Aquilató que una vez producido el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, su padre era dirigente de agricultores y su hermano Roberto, debido a que no había trabajo, les pidió permiso a sus padres para ir a trabajar a Argentina. Este viaje lo estaba realizando con otras personas y una de ellas se llamaba José Jovin Oporto. Su padre lo autorizó y luego de unos días, al parecer el 20 de septiembre de ese año, llegó hasta su casa personal de Carabineros de Chile de Lago Ranco, quienes le

informaron a su padre que habían matado a su hermano, en el sector del puente del río Nilahue, donde supuestamente iban cruzando y que desde una avioneta le habrían disparado, impacto que dio en su espalda y cayó al río, siendo su cuerpo arrastrado por las aguas río abajo. Ante esta noticia, sus padres quedaron muy mal internamente y la única salida fue que siguieron trabajando en la agricultura. No obstante la historia de su hermano, su familia cayó en una depresión muy fuerte y siguió siendo víctima de abusos por parte de Carabineros y militares, quienes en más de una oportunidad, se dirigieron a su casa en búsqueda de armas y destrozaron todo en la casa. Afinco que en una ocasión se llevaron todas las cosas y también encerraban a su padre en una habitación para torturarlo a golpes, pese a que su padre les señalaba que no tenía ninguna militancia política. Apuntó que a los días que su padre recibió la mala noticia de la muerte de su hermano, tomó la decisión de arrendar un barco con la finalidad de ir a rescatar el cuerpo, el cual según su padre, podría haber quedado atrapado en algún árbol o arbusto en la ribera del río, sin embargo, personal de Carabineros de Riñinahue le impidió llegar al lugar. Posteriormente, su padre fue detenido por personal de Carabineros de Lago Ranco, siendo llevado a la cárcel de Río Bueno en primera instancia, mientras su madre y demás hermanos quedaron en calidad de detenidos en el Retén de Carabineros, una noche y un día. Posteriormente su padre fue derivado a la cárcel de Valdivia, lo cual provocó que ellos dejaran de estudiar y comenzaran a trabajar en la agricultura ayudando a su madre. Relató que luego de que su padre salió de la cárcel, se enfermó y nunca más se habló de la muerte de su hermano Roberto, como tampoco continuó con la búsqueda de su cuerpo, debido a todo lo que había pasado y futuras represalias de Carabineros de

Lago Ranco, como tampoco nunca escuchó ningún comentario de otras personas respecto a qué pudo haberle sucedido a su hermano aquel día.

En declaración judicial de fecha 16 de noviembre de 2017, rolante de fs. 632 a fs. 634 (tomo III). Ratificó lo declarado ante la Policía de Investigaciones de Chile. Comentó que su hermano Roberto, a la fecha de su fallecimiento tenía alrededor de 17 o 18 años de edad aproximadamente. No tenía ninguna militancia política. Dijo que su hermano le pidió permiso a su padre para viajar a Argentina antes del golpe militar. El motivo por el cual decidió viajar era porque en Lago Ranco no había trabajo y estaban todos en la casa. Respecto de las personas que viajaron con su hermano, solo recordó el nombre de José Jovin Oporto, este joven era casi vecino de ellos, vivía un poco más arriba de su casa y su hermano era amigo con él. No supo qué otras persona lo acompañaron en el viaje. En cuanto a los Carabineros de Lago Ranco, que les fueron a entregar la noticia de la muerte de su hermano, escuchó que llegaron como tres funcionarios a su casa, esto sucedió a fines de septiembre de 1973. De estos funcionarios parece que había uno de apellido Martínez. Difundió que antes que llegaran estos funcionarios y mucho antes de la muerte de su hermano, habían ido militares a revisar la casa, para ver si su padre tenía armas. La primera vez, cuando llegaron le preguntaron a su papá si ellos pertenecían a alguna clase política, a lo que este respondió que no y se fueron. Recordó que los militares llegaron en carros grandes, que andaban como 10 personas en su interior, eran jóvenes, el mayor debe haber tenido unos 45 años. Estos venían desde Valdivia hasta la zona de Lago Ranco. Estos militares anduvieron más de un mes por la zona, aparecieron después del golpe. Estimo que primero aparecieron Carabineros y luego Carabineros de Lago Ranco, quienes les avisaron sobre la muerte de su hermano. Puntualizo que cuando

llegaron Carabineros de Lago Ranco, estuvieron afuera en el patio y le informaron a su papá que su hermano había muerto producto de un disparo desde una avioneta. El Tribunal le exhibió a la testigo una nómina de funcionarios de la Tenencia de Lago Ranco, que prestaron servicios para el año 1973, a fin de que indique si alguno de los nombres consignados en dicha nómina, corresponden a él o a los funcionarios de Carabineros que le fueron a notificar el fallecimiento de su hermano Roberto; a lo que la deponente señaló que reconoce a: Alfredo Fernández Martínez y le parece mucho que los otros eran Waldemar Medina Oporto y Conrado Navarro Cárdenas, aunque no está completamente segura, pero sus apellidos le suenan mucho. A la pregunta del Tribunal, informó que después de la muerte de su hermano, los militares fueron varias veces a la casa para agredirlos, a todos los encerraban en diversas habitaciones, encerraban a su padre para golpearlo. Les preguntaban si su padre era político y ellos les indicaban que no. Musito que tenían una bodega de trigo y les decían que debían darles comida a los militares, llevándose todas las cosas que estaban en esa bodega, dejándolos sin comida. Todos estos episodios ocurrieron durante el mes que estuvieron los militares en la zona. Nunca más volvieron a ver a los militares en Lago Ranco. Sumo que en una ocasión concurrieron Carabineros, desconociendo de donde eran, para amedrentarlos, pero no fueron tan violentos como lo fueron los militares. Fundó que después de haber recibido la noticia de la muerte de su hermano, su padre lo único que quería era encontrar a su hijo y darle una sepultura como tenía que ser. Su padre le dijo que había hablado con una persona que tenía un barco en Lago Ranco, de apellido Celín Lavado. También habló con el teniente de Carabineros de Lago Ranco, dándole autorización. Su padre fue con sus hermanos más grandes a buscar a su hermano, pero no

pudieron llegar al río Nilahue porque les impidieron el paso. No supo si habrán sido militares, carabineros o civiles, lo único que supieron es que no lo dejaron pasar, producto de esto su padre llegó muy mal. Dicen que el cuerpo de su hermano estaba en un árbol, en el río Nilahue, no recuerda a qué altura. Respecto al sector donde dieron muerte a su hermano Roberto, les dijeron que fue en el puente Nilahue, desde una avioneta de un particular le dispararon. Adoso que la gente que podría entregar información sobre la muerte de su hermano Roberto era pura gente mayor, no cree que vivan. Pero recordó a Fernando Ñancucheo quien vivía en esa época en el sector del río Nilahue.

7. MARTÍN EDUARDO HUAQUI BARRÍA (17 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 432 a fs. 433 (tomo II) y de fs. 901 a fs. 902 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 24 de abril de 2016, rolante de fs. 432 a fs. 433 (Tomo II), copia de fs. 888 a fs. 890 (tomo III). A la pregunta por diferentes personas, de las cuales aportó los siguientes antecedentes: Respecto de Juan Huaiqui, al parecer correspondería a Juan Huaiqui Gómez, quien habitaba en el sector el Arenal Riñinahue; Carlos Ancacura, eran vecinos en calle Concepción, lugar donde en la actualidad vive su hermano Eliel Huaiqui Barría, en la comuna de Lago Ranco, al parecer se llamaba Carlos Ancacura Antihual (actualmente fallecido); Juan Figueroa, quien habría acompañado a su hermano cuando venían bajando de la cordillera en el año 1973, él tenía a la fecha 22 o 23 años, quien vivía como a 300 metros de la casa de su hermano Eliel en Lago Ranco. Este trabajó en Carabineros ingresando en esa institución para el año 1976; Sergio Calfulef, tenía alrededor de 18 años en la época, vivía en calle Concepción a una cuadra del estadio de la ciudad; Héctor Angulo no recordó su

identidad pero al parecer vivía a unas cuadras del Liceo de Lago Ranco; Luis Díaz Zumelzu tenía unos 22 años para el año 1973, vivía a 100 metros del consultorio hacia Lago Ranco; Eliel Calfuléf, era hermano de Sergio y al parecer su segundo nombre era Ariel; Los hermano Furnier, Manuel falleció en Santiago, Jorge al parecer está vivo y viviría en Santiago, ellos en la época habitaban cerca del cementerio a 100 metros de la cordillera. Agregó que había un Carabinero de apellido Ávila que era encargado del Retén de Riñinahue y podría aportar información. Dijo que Juan Huaiqui ayudó en la búsqueda de su hermano, él tenía un campo en el arenal Riñinahue, Lago Ranco, quien habría enterrado el cuerpo de su hermano a 1 o 2 metros de distancia de un árbol para no perder su orientación. Expuso que Armando o Juan Ñancucheo “el chico Nano”, fue avisar a su casa que le habían disparado a su hermano. Añadió que Quirino Arriagada habría sido una de las personas que le disparó a su hermano, al parecer en la época tendría unos 40 años.

En declaración judicial de fecha 3 de enero de 2020, rolante de fs. 901 a fs.902 (tomo III). Ratificó lo declarado ante la Policía de Investigaciones de Chile. Atestiguó que cuando tenía 17 años al llegar a su casa, después de haber estado en su colegio ubicado en Lago Ranco, se encontró con la sorpresa que esta estaba llena de Carabineros y militares. Mientras que Carabineros maltrataba a sus padres, Emilio Huaiqui y Violanda Barría; los militares estaban dentro de la casa rompiendo cosas con sus armas, buscaban a su hermano Roberto Huaiqui y además buscaban armas supuestamente escondidas por la familia. En ese acto, los militares lo tomaron y lo golpearon, lo trataron con groserías de alto calibre, preguntándole dónde estaban las armas y dónde estaba su hermano. Aseveró que no tenía idea de esas cosas, nunca se metió en política, pero acompañaba de vez

en cuando a su padre a las reuniones de su junta de vecinos porque era el presidente. Narró que a los días después volvieron a avisarles, que los chiquillos habían vuelto y que al cruzar el río Nilahue hubo disparos, donde mataron a su hermano. Posteriormente llevaron a su padre a Valdivia detenido y después llevaron al declarante detenido hacia el Retén de Carabineros de Río Bueno, donde estuvo en esa calidad como dos semanas. En ese lugar lo sacaban al patio y maltrataban con los mismos fusiles que andaban trayendo los Carabineros, le pegaban en las uñas de las manos con los fusiles, lo quemaban con sus cigarros, le sacaban las uñas con alicates, lo quemaron con cigarrillo en partes de su cuerpo, no lo alimentaron por días y le daban de comer caca de caballo, querían que les dijera donde estaban las armas y donde estaban los dirigentes políticos de Lago Ranco y evidenció que él no sabía nada. Todavía tiene marcas de quemaduras en su cuerpo. Luego de dos semanas salió y se fue a su casa, su madre le dijo que su padre todavía estaba preso en Valdivia. A los días después llegaron a su casa don Fernando Ñancucheo y Juan Huaiqui, pariente de ellos y les avisaron que habían encontrado a su hermano muerto a orillas del río Nilahue y que ellos mismos lo habían sepultado bajo un árbol. Anexó que como a los cuatro meses soltaron a su padre, quien llegó con heridas en las piernas, amoratadas, golpeadas y quemadas. No contándoles nada por respeto a sus hermanos más pequeños y para no hacerlos sufrir más. Espeto que ahí le contaron sobre la muerte de su hermano. Ante la pregunta del Tribunal, contestó que para la época de los hechos tenía 17 años de edad, era estudiante del liceo B-15 donde cursaba cuarto medio. Dijo que en ese tiempo conocían al teniente José Sáez y recordó que le pidieron autorización para la búsqueda de su hermano. Este les dio permiso, pero la gente que vivía alrededor, no. Adujo que no recuerda

nombres de quienes se vieron involucrados en la muerte de su hermano. Añadió que no podría aportar datos sobre el lugar donde presumiblemente se encontraría inhumado su hermano, pero quien podría saber es Juan Huaiqui, él vive en el sector donde lo encontró y lo enterró cerca del sector llamado El Arenal de Riñinahue, cerca de una playa de Lago Ranco, bajo un árbol, él mismo lo dijo. Contó que a su hermano lo acompañaban Carlos Ancacura, José Jovin Oporto y Juan Figueroa, a quienes no ve desde el año 1973.

8. ELIEL ENRIQUE HUAQUI BARRÍA (12 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 118 a fs. 120 (tomo I), de fs. 435 (tomo II) y a fs. 926 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 14 de marzo de 2014, rolante de fs. 118 a fs.120 (tomo I), copia de fs. 919 a fs. 921 (tomo III). Proclamó que para el año 1973, él tenía 12 años de edad, vivía junto a sus padres y hermanos en Lago Ranco, dentro de los cuales estaba Roberto, quien tenía alrededor de 18 años. Dentro de lo que recordó, Roberto después del golpe de Estado, decidió viajar a Argentina a tener mejores expectativas laborales y al llegar al sector del puente Calcurrupe, fue interceptado por civiles, quienes le dispararon y cayó al río Nilahue, desapareciendo su cuerpo en el caudal de este. Posteriormente llegó personal de Carabineros de Lago Ranco a la casa, a avisarles a sus padres lo ocurrido con Roberto. Ante esto su padre decidió ir al lugar con la finalidad de ubicar el cuerpo, pero al parecer Carabineros le impidió a la gente del sector efectuara la búsqueda. Finalmente declaró que a la fecha y a través los años, no ha tenido mayor información de lo que realmente ocurrió con su hermano. Agregó que su padre conversó con la familia y dispuso que no era tema lo ocurrido, lo anterior debido al miedo que reinaba en ese tiempo.

En declaración extrajudicial de fecha 3 de mayo de 2016, rolante a fs. 435 (tomo II), copia a fs. 922 (tomo III). Se le preguntó respecto a Carlos Ancacura, Juan Figueroa, Sergio Calfulef, Luis Díaz Zumelzu, Eliel Calfulef, hermanos Furnier, Rubén Huaiqui y Armando Ñancucheo, aportando los datos personales que tiene sobre algunos de ellos, para su ubicación y entrevista.

En declaración judicial de fecha 17 de enero de 2020, rolante a fs. 926 (tomo III). Ratificó sus declaraciones extrajudiciales y añadió que no recuerda la fecha exacta en que su hermano Roberto Huaiqui salió con destino a Argentina, debe haber sido entre septiembre u octubre de 1973. Precisoó que los hechos ocurrieron en el río de nombre Nilahue, en el puente Calcurrupe. Aseveró que no supo los nombres de carabineros o civiles que participaron en el hecho, pero recordó el nombre de un suboficial Martínez de Carabineros de Lago Ranco, que en ese tiempo tuvo contacto con su familia. Comentó que sus padres y su familia se enteraron después de 2 o 3 días de lo ocurrido. Ignora el nombre completo de Fernando Ñancucheo y en cuanto a Rolando Vejar, su segundo apellido es Ancacura y es su primo. No tuvo conocimiento que se hubiese inhumado el cuerpo de su hermano ni menos del lugar en que eso hubiese ocurrido. Relató que cuando ocurrieron los hechos, su hermano andaba con un hombre de nombre José Jovin Oporto, el que estaría radicado en Argentina.

9. JULIÁN ÁVILA RIVEROS (40 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 551 a fs. 552 (tomo II) y de fs. 645 a fs. 646 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 2017, rolante de fs. 551 a fs.552 (tomo II). Expuso que para septiembre del año 1973, era presidente del asentamiento “El encanto” del sector de Ranquil, enterándose del golpe militar por un amigo que vivía en Lago Ranco. Respecto al homicidio de Roberto Huaiqui,

señaló que este era militante del Partido Socialista, quien una vez ocurrido el golpe militar tuvo que salir arrancando desde Lago Ranco junto a José Jovin Oporto, un señor de apellido Poblete con su hijo, los profesores Velásquez, Horacio Godoy, una señora de apellido Rudolph, entre otros que no recordó. Decantó que en esa fecha tenía una casa a orillas del Lago en el sector de Ranquil, por lo tanto estas personas le decían al cuidador que lo conocían y les dio albergue para refugiarse por las noches. Ellos querían cruzar la cordillera con la finalidad de llegar a Argentina, no obstante se tuvieron que dispersar del grupo Roberto Huaiqui y José Jovin Oporto, quienes tuvieron la intención de regresar a Lago Ranco y comenzaron el descenso hacia la ciudad. Estimo que el Sargento Cereceda del Retén de Llifén, agrupó a los pobladores cercanos del Puente Nilahue, incluso del asentamiento donde trabajaba el declarante, de todo lo cual se enteró por los asentados que dirigía, recordando que la orden que se les dio a los pobladores era que si veían a una persona extraña, tenían la autorización para matarlos. Pasada unas horas de la reunión divisaron a Huaiqui y a Oporto, quienes al ver a los pobladores, Huaiqui se tiró al río, recibiendo gran cantidad de disparos, de parte de Joaquín Garcés, Sixto Asenjo, quien andaba con un revolver, el hermano de Gastón Soto (alcalde de Lago Ranco) y posiblemente Isaías Vásquez, quien era pinochetista, Valdovino Rivas, quien quiso matar a José Jovin Oporto, pero Germán Campos se lo impidió, Quirino Arriagada y su señora (todas las personas mencionadas, están actualmente fallecidas). Musito que en esa reunión con el Sargento en el puente Nilahue, estuvo el primo de Huaiqui de nombre Hernán Leal Oporto, quien en la actualidad viviría en el sector de Ranquil. Aclaró que a José Jovin Oporto le dispararon con un rifle en la espalda, quedándose en un risco hasta que llegó la misma gente que estaba en el puente,

quienes se lo entregaron a unas personas que piloteaban un avión, saliendo rumbo desconocido con este. Respecto al cuerpo de Huaiqui Barría, indicó que al parecer lo encontraron a 1 kilómetro del puente hacia abajo, ignorando si sus familiares lograron sepultarlo en algún lugar.

En declaración judicial de fecha 27 de noviembre de 2017, rolante de fs. 645 a fs. 646 (tomo III). Ratificó íntegramente la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos, pero aclaró que el golpe lo encontró en Lago Ranco, en el sector del pueblo, en esa época, a su señora le tomaron la escuela y ella tuvo que salirse de ahí e irse a otro lugar, mientras que él quedó solo con sus 4 hijos y una empleada. Respecto a lo que se le preguntó, respondió que el Sargento Cereceda de Llifén, dio la orden de citar a todos los pobladores del asentamiento a una reunión en el puente, desconociendo la cantidad de personas que asistieron, ya que no estuvo en la reunión, pero se enteró de lo sucedido por dos asentados, uno de ellos llamado Hernán Daniel Leal Oporto. Este le contó porque una de las víctimas era su primo (Roberto Huaiqui). Añadió que cuando sucedió el golpe, todos en el sector querían arrancar, todos eran socialistas. Le consta que Roberto Huaiqui arrancó con José Jovin Oporto y otras personas, entre ellos el Señor Poblete, quien era conductor. Expresó que a todos los mencionados en su declaración eran conocidos suyos, menos la señora Rudolph. Señaló que la ruta que supuestamente siguió este grupo fue Linahue, luego Ropumeica y finalmente Argentina. Desconoce si el grupo llegó a Argentina en su totalidad, supo a los años que la señora Rudolph se devolvió y el Señor Poblete llegó a Argentina pero desconoce el paradero del resto. Posteriormente supo que Oporto y Huaiqui volvieron a Lago Ranco ya que en su peregrinar a Argentina, nadie los ayudaba ni les daba comida por ser

socialistas. Preciso que Huaiqui una vez descubierto por las personas que estaban en el puente, se tiró al río ya que era muy bueno para el agua. A Oporto le dispararon, desconoce quién lo hizo. Sustentó no recordar los nombres de los pobladores que se reunieron en el puente Lanalhue con el Sargento Cereceda y tampoco supo si fue acompañado por otros uniformados. Desconoce cuál era el papel que jugaba el avión que estaba sobrevolando el sector, pero en ese momento se llevaron a José Jovin Oporto, a quien le dispararon las personas del puente. Hernán Leal nunca mencionó que desde la avioneta se realizaron disparos.

DOCUMENTOS (6)

1. De fs. 1 a fs. 3 (tomo I) Copia simple páginas 396 y 397 del **Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación**, que en lo pertinente, respecto a Roberto Huaiqui Barría, señala: *“el afectado había salido de Lago Ranco el 11 de septiembre de 1973, junto a otras personas, con la intención de cruzar la cordillera para dirigirse a Argentina. Cuando iban cruzando el río Nilahue les dispararon desde una avioneta tripulada por civiles, dándole muerte e hiriendo en la espalda a uno de los acompañantes, quien fue recogido y llevado a un hospital. El cuerpo sin vida de Roberto Huaiqui cayó al río y fue impulsado aguas abajo por la corriente, sin que pudiese ser recuperado. Es convicción de la Comisión que en esta ejecución se produjo una grave violación a los derechos humanos del afectado, de responsabilidad de civiles que actuaban por instrucciones o con la aceptación de agentes del Estado.”*

2. De fs. 156 a fs. 160 (tomo I). Informe del Departamento Derechos Humanos de Carabineros de Chile, el que remite **nómina del personal** de Carabineros que figura como dotación de la **Tenencia de Lago Ranco y el Retén de Riñinahue**

para septiembre de 1973. En este último retén figuran el Cabo Carlos Emilio Galindo Ruiz y el Carabinero Mamerto Tercero Ávila González.

3. De fs. 642 y 938 (tomo III). Informe de Departamento de Control de Fronteras de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de Chile que informa que Roberto Eder Huaiqui Barría **no registra movimientos migratorios**, desde septiembre del año 1973 a la fecha.

4. De fs. 816 a fs. 821 (tomo III). Informe del Departamento de Derechos Humanos de Carabinero de Chile, que remite copia de **hojas de vida y transcripciones de las anotaciones del libro de vida**, correspondiente a la trayectoria institucional del personal requerido, junto a sus calificaciones, entre los que se encuentran los acusados Carlos Emilio Galindo Ruiz y Mamerto Tercero Ávila González. Cuaderno reservado de autos.

5. De fs. 983 a fs. 989 (tomo III). Informe pericial fotográfico N°80-2021 e Informe pericial planimétrico N°66-2021, elaborados por el Laboratorio de Criminalística Regional Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, correspondiente a inspección al puente Nilahue, sector Riñinahue, en la comuna de Lago Ranco.

6. De fs. 1.123 a fs. 1.124 (tomo III). Acta de inspección personal de Tribunal, con fecha 19 de julio de 2022. En el sector del río Nilahue junto al testigo presencial Hernán Daniel Leal Oporto.

10°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos. Ponderados, consistentes en testigos y documentos antes señalados como además se indica en el **auto acusatorio de fs. 1.467 a fs. 1.504 (tomo IV)** con fecha 23 de mayo de 2023, permiten al

Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallado, relacionados y aquilatados llegar a la convicción:

A. Que han existido los delitos de **homicidio calificado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría (homicidio calificado consumado) y de **homicidio calificado frustrado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de José Jovin Oporto del Río.

B. Que en estos ilícitos le ha cabido la responsabilidad en calidad de **autor** en virtud del artículo 15 N° 1 del Código Penal, al acusado **MAMERTO TERCERO ÁVILA GONZÁLEZ**.

11°) Que prestando declaración indagatoria **CARLOS EMILIO GALINDO RUIZ** (23 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 456 a fs. 458 (tomo II), de fs. 873 a fs. 876 (tomo III), de fs. 1.070 a fs. 1.071 (tomo III) y de fs.1.354 a fs.1.356 (tomo IV);

En declaración extrajudicial de fecha 27 de julio de 2016, rolante de fs. 456 a fs.458 (tomo II), copia de fs. 866 a fs. 870 (tomo III). Hizo una breve reseña de su carrera funcionaria, puntualizando que permaneció en el Retén de Llifén hasta mediados del año 1973, ya que fue destinado como jefe del Retén Riñinahue. Al llegar a ese retén como jefe, recordó que estuvo a su cargo de tres funcionarios; Carlos Oñate, Mamerto Ávila y un tercer funcionario que no recuerda su nombre. Difundió que el día 11 de septiembre de 1973, muy temprano, junto a su personal a cargo, comenzaron a escuchar por la radio pública, información que señalaba determinadas órdenes a distintos bandos, que advertían a la ciudadanía que se abstuviera de realizar ciertas acciones, ya que en la ciudad de Santiago se

estaba aplicando el toque de queda y posteriormente se enteraron que se había bombardeado la moneda por efectivos militares. Ante esta situación, instruyó a su personal que se mantuvieran en el Retén a la espera de órdenes superiores. Sugirió que el mismo 11 de septiembre en horas de la noche, el Teniente de Lago Ranco le informó vía radial que alrededor de 70 extremistas se habían escapado de la localidad de Riñinahue, de igual manera el Teniente de Llifén le informó que dichos extremistas esa misma noche atacarían su cuartel policial en busca de armamento y alimentos, por lo que debía tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar lo que podría ocurrir. Según lo informado, le solicitó apoyo y refuerzos a su jefe directo, que correspondía a la Comisaría de Lago Ranco, quien le informó que se encontraba en las mismas condiciones y si lograba pasar la noche sin inconvenientes, al día siguiente lo sacaría en un barco fuera de la localidad de Riñinahue junto a su familia. Al día siguiente llegó un barco el cual lo sacó del lugar junto a su familia, llevándolo hasta la localidad de Llifén por aproximadamente un mes, mientras que sus subalternos fueron llevados a Lago Ranco. Luego de un mes, regresó al retén junto a sus subalternos, con quienes continuaban sus labores conforme a la controversia política que ocurría en el país. Adoso que Riñinahue siempre fue un sector muy tranquilo, por lo que no hubo necesidad de hacer efectivo algún tipo de toque de queda u otra orden similar, puesto que todos se conocían y cualquier problema era sabido rápidamente. Relató que mientras se encontraba en la localidad de Llifén, junto a un Carabinero, concurren a Riñinahue ya que no existía contingente policial pues habían sido sacados del sector, con la finalidad de verificar la situación que se encontraba en el lugar. Mientras realizaban dicho patrullaje, entre las 16:00 y 18:00 horas, recuerda que en el sector de Calcurrupe, específicamente en una

planicie muy cercana a un río que se ubicaba a unos 100 metros de la carretera, se percataron de la presencia de un grupo de 60 personas aprox. Los cuales pedían a gritos que los ayudaran ya que les estaban saqueando sus casas por gente que se encontraba escondida al otro lado de la carretera por la cordillera. Ante esta situación, concurrió con su colega a ver lo que sucedía, solicitándole a la gente que se calmara y se quedara en el lugar. Al iniciar la caminata en dirección a la montaña, para ver lo que ocurría, al avanzar unos 200 metros, sorpresivamente desde unos matorrales y arbustos, salen corriendo unas seis personas, en distintas direcciones, recordando a una que arrancó en dirección donde se encontraban las 60 personas. Al observar su huida y perderlo de vista, recordó haber escuchado varios disparos. Al regresar al grupo de personas que se encontraba en el lugar, les preguntaron qué había pasado y por qué se habían escuchado disparos, ante lo que respondieron que la persona había arrancado hacia donde ellos y al ingresar a la bajada del río comenzaron a dispararle en varias ocasiones, porque era del mismo grupo que andaba robando en el sector. Sustento que ante lo ocurrido, bajó a ver si se encontraba esta persona, pero no fue habida en el lugar, retirándose sin mayor inconveniente. Continuando con sus labores, recordó que la superioridad del lugar le solicitó información con respecto a una persona que había desaparecido en el río de su jurisdicción, situación que la asimiló a la que presenció al momento de realizar el patrullaje en dicho sector, donde diversas personas habían disparado contra un sujeto que huía del lugar en dirección al río y que era sindicado como un extremista que estaba saqueando en el sector. En relación a Roberto Huaiqui Barría, le dio la impresión que podría corresponder a la persona que arrancó hacia el río y que le dispararon un grupo de personas que lo sindicó como extremista.

En declaración judicial de fecha 25 de noviembre de 2019, rolante de fs. 873 a fs. 876 (tomo III). Ratificó su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones. Pregunta 1: Recuerda el nombre de Roberto Huaiqui Barría: Indicó que el nombre de Roberto Huaiqui Barría no le suena para nada, ya que no identificó a ninguna persona con ese nombre durante su carrera como funcionario de Carabineros, al menos lo que recordó. Pregunta 2: ¿El nombre de su superior jerárquico mientras permaneció en el Retén de Riñinahue? Contó que cuando permaneció en el retén de Riñinahue, su superior era un Sargento 1° de apellido Arismendi, no recordando sus nombres. Declaró que estuvo en ese retén alrededor de un año y medio y se recuerda del Sr. Arismendi porque ese retén se quemó y la persona que le prestó auxilio fue su superior Arismendi. Pregunta N°3:Cuál es el nombre del Teniente de Lago Ranco que le informo vía radial, que alrededor de 70 extremistas se habían escapado a la localidad de Riñinahue? Afirmó que no recuerda el nombre del Teniente que le dio la información vía radial, respecto a que alrededor de 70 extremistas se habrían escapado desde Lago Ranco hacia su sector, pero dice que esto fue el 11 de septiembre de 1973 en la noche, por lo que en la documentación de esa época debe estar. Asevero que cuando el retén se quemó, él salvó toda la documentación y fue entregada al prefecto que investigó el incendio. Pregunta N°4: ¿De dónde presumiblemente venían los 70 extremistas y hacia dónde se dirigían? Respondió que de acuerdo a lo que le informó el Teniente de Lago Ranco, iban desde Lago Ranco hacia Riñinahue. Pregunta N°5: ¿El nombre del funcionario de Carabineros de Llifén con el cual se dirigió al Riñinahue a verificar la situación del lugar?: Manifestó que no recuerda el nombre del funcionario de Carabineros que lo acompañó a Riñinahue a verificar la situación ya que estaba recién llegado al Retén Llifén. Pregunta N°6:

Cuándo usted señala el sector de Calcurrupe, a qué lugar se refiere, a que distancia se encuentra de Riñinahue? ¿Cuál es el nombre del río que usted menciona en su declaración? ¿Sobre este río se sitúa el, puente Calcurrupe? Agregó que Calcurrupe pertenece a Riñinahue ya que basta con cruzar el río y se encuentra en el sector de Riñinahue inmediatamente donde está Calcurrupe. Desde el retén Riñinahue está a unos 8 kilómetros hacia el oriente. No recuerda el nombre del río. El puente Calcurrupe se sitúa sobre el río Maihue. Probablemente ese río se llame Calcurrupe pero no tiene la certeza de que así sea. Pregunta N°7: cómo le consta que en el sector de Calcurrupe había un grupo de 60 personas pidiendo ayuda? ¿Recuerda el nombre de algunos de estos lugareños que solicitaban ayuda? Apunto que le consta que en el sector Calcurrupe había un grupo de 60 personas pidiendo ayudar porque él andaba de patrullaje por el sector cuando vio a una distancia de 300 metros, a un grupo de personas que les hacían señas pidiéndoles ayuda, por lo que se dirigieron hasta ellos y ahí les señalaron que un grupo de personas andaba asaltando sus casas en busca de alimentos y armas. Dijo que el grupo de personas que estaba pidiendo ayuda, estaba armado, algunos con escopeta, otros con rifles y otros con palos, para protegerse de los asaltantes quienes habían huido hacia la cordillera y querían ir en busca de ellos, ante lo cual les manifestó que se quedaran en el lugar mientras ellos (los carabineros) iban a patrullar al sector hacia donde habían huido. Desarrollo que le obedecieron y continuó con el patrullaje, y al aproximarse a un bosque del sector a una distancia de unos 100 metros vieron salir huyendo en distintas direcciones a unas 5 o 6 personas, pero ellos no hicieron nada, no les gritaron que se detuvieran ni hubo disparos. Al regresar hasta el grupo de personas que habían sido víctimas de asalto, estos les informaron que había pasado un tipo huyendo hacia el río y

que le habían disparado, pero no sabían si le habían dado o no, por lo que se fue con su acompañante (cuyo nombre no recuerda) a recorrer el río, sin encontrar indicio alguno de alguna persona herida y menos encontraron a alguna persona. Respondió que no se acuerda del nombre de alguna de las personas que vivía en el sector y que estaban siendo víctima de asalto. Pregunta N°8: ¿A qué distancia se encontraba de las 6 personas que salieron sorpresivamente de los arbustos? ¿Recuerda la descripción física de la persona que salió corriendo en dirección donde se encontraban las 60 personas? Informo que cuando las personas salieron huyendo de los arbustos, él estaba a unos 100 o 150 metros de distancia más o menos, que por la distancia y la huida no pudo apreciar alguna descripción física de alguno de ellos, ya que eso se hace camuflado, es decir, salen agachados para no ser identificados. Pregunta N°9: Qué paso con la persona que se enfrentó con el grupo de 60 personas? ¿Recuerda el nombre de las personas que hicieron uso de armas de fuego en aquella época? Desconoce qué sucedió con la persona que se enfrentó con el grupo de 60 personas, dijo esto porque cuando le informaron que le habían disparado, él fue a inspeccionar al río y no encontró ni a la persona ni indicios de algún herido, como manchas de sangre o arrastre. No recuerda nombre de las personas que hicieron uso de sus armas de fuego, además él no estaba ahí en ese momento. Pregunta N°10: ¿Por qué al no encontrar a esta persona se retiraron del lugar y no siguieron investigando, si presumiblemente se trataban de una persona que andaba robando? Expreso que esta situación no se siguió investigando, porque en el momento se inspeccionó el sector y no se encontró siquiera indicio de algún lesionado, además que esta persona estaba huyendo, es más, debían estar atentos a los disparos que se sentían en diferentes sectores del lugar e iban a inspeccionar pero nunca se encontró algún herido ni

nada. Indicó que la persona que andaba robando en el sector también andaba huyendo y lo más probable que se cambió de sector, por eso no lo encontraron, supuestamente se fueron a otro lugar fuera de su sector. Pregunta N°11: ¿Hubo participación de otros uniformados en este procedimiento? Comunico que en el retén Llifén eran tres funcionarios, el sector era demasiado amplio, el jefe de retén era un Sr. Arismendi que vivía ahí y el declarante, en su calidad de agregado a ese retén, era quien tomaba los procedimientos de patrullaje por orden del jefe de retén, junto al funcionario que estaba de libre o saliente de guardia, cuyos nombres no recuerda por el tiempo transcurrido. Pregunta N°12: ¿Si durante los hechos que usted relato, hubo participación de alguna avioneta provista de armamento sobrevolando el sector de Calcurrupe? Divulgó que durante este procedimiento hubo una actuación del Ejército, ya que rastrearon el cerro porque supuestamente un extremista había baleado a un militar y recuerda que se sentían pasar aviones de la Fuerza Aérea, pero no sintió disparos. Esto fue en el sector Calcurrupe. Pregunta N°13: ¿Desea aportar algún nuevo antecedente para la investigación? Añadió que no tiene más antecedentes que aportar, solo señalar que las identidades de los funcionarios de Carabineros que estuvieron en esos retenes mencionados están en los respectivos libros de la época.

En diligencia de careo con Mamerto Tercero Ávila González mediante videollamada de fecha 26 de abril de 2022, rolante de fs. 1.070 a fs. 1.071 (tomo III). Ratificó sus declaraciones de fs. 456 a fs.458 y de fs.873 a fs.876. Dijo que efectivamente conoce a la persona con la cual se le careo, es Mamerto Ávila. Afirmando que se mantiene en sus dichos y que no recuerda a los compañeros que lo acompañaron en aquel suceso, pues eran más de tres carabineros en Llifén, solo que ese día estaban de servicio tres, ya que los demás se encontraban de franco.

Respecto a eso, solo tiene en mente a uno de apellido Arismendi que era el jefe. Ostentó que en ese entonces se movilizaban generalmente a caballo y a veces en vehículo, pero ese día no recuerda bien en qué andaban. Preciso que su tarea era patrullar la zona y ese día en específico la gente del lugar les señaló que andaba un grupo de personas robando y los lugareños del sector le dispararon a uno de ellos, rememoro que vieron a muchas personas corriendo, acto seguido intentaron corroborar la identidad de la persona herida, por lo cual bajaron al río, pero no encontraron rastros de él.

En declaración judicial de fecha 2 de marzo de 2023 mediante videollamada, rolante de fs.1.354 a fs.1.356 (tomo IV). Tribunal: Se le leyó en lo pertinente declaración de fs. 1070 a fs.1071, y le preguntó ¿la ratifica?. Carlos Galindo: si, ratifico totalmente lo que se me leyó. Tribunal: Se leyó de fs. 1.166 a fs.1.168 de autos y consulta: ¿reconoce los hechos reproducidos y si ubica a la persona de Roberto Hualqui Barría y José Jovin Oporto Del Rio y si desea agregar, modificar o ampliar algo?. Carlos Galindo: Si, desea rectificar algo, él personalmente nunca conoció a estos dos personajes. Agregó que él no andaba con el carabinero Ávila, como se dijo ahí. Como él había sido evacuado del Reten que conducía, estaba en Llifén y esto ocurrió el día 12, fue a Llifén no sé si fue el día 14 o 15. El jefe del retén los mandó que fueran a atender a una familia que estaba pidiendo auxilio, fueron con otro carabinero, de quien no recuerda el nombre, pero no fue con Mamerto Ávila, no puede recordar el nombre, pero era del retén de Llifén y él de Riñinahue. Tribunal: ¿Recuerda usted la forma en que murió Roberto Hualqui Barría y/o la forma en que fue herido José Jovin Oporto Del Rio?. Carlos Galindo: Expresó que esta gente que estaba pidiendo auxilio, estaban todos aglomerados, era un grupo como de 60 personas, (mujeres, niños y

varones). Él les dijo que se quedaran ahí, que ellos irían a ver dónde ellos indicaban que estaban escondidas estas personas. Acto seguido fueron y de repente desde un bosque salió un grupo corriendo como de seis personas y se dispersaron y uno de ellos se fue derecho donde estaba el grupo de personas que pedía auxilio. Recuerda que estaban en una planicie y él sintió los disparos y se acercó al lugar y preguntó: ¿qué pasó? y le dijeron que un fulano (del grupo que venía corriendo desde el bosque) había pasado entre ellos y que le habían disparado por la espalda. Escuchado esa declaración, les dijo a los varones que lo acompañaran y el Carabinero que estaba con él también lo acompañó. Fueron a recorrer la ribera del río, el cual no era caudaloso, y no encontraron a nadie herido ni a nadie muerto tampoco. Inquirió que en el río no se veían rastros, el agua que había no era como para que arrastrara objeto o una cosa así. Tribunal: ¿Entonces usted no vio a José Jovin Oporto?. Carlos Galindo: Añadió que no, no lo vieron. Tribunal: ¿Ni tampoco cuando lo recogieron?. Carlos Galindo: No, nunca lo recogieron porque no lo vieron, no encontraron a ninguna persona herida o muerta. Tribunal: ¿Desea agregar algo más?. Carlos Galindo: No, porque se le pone ahí en el expediente que él habría hospedado a militares. Esto es absolutamente falso, nunca ocurrió.

12°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado **CARLOS EMILIO GALINDO RUIZ**, quien fue **sometido a proceso de fs. 1.132 a fs.1.172 (tomo IV)**, con fecha 09 de diciembre de 2022. **Acusado** según el auto acusatorio **de fs. 1.467 fs. 1.504 (tomo IV)**, con fecha 23 de mayo de 2023, como **autor** de los delitos de **homicidio calificado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría, (homicidio calificado consumado); y **homicidio calificado frustrado**, en la persona de José Jovin Oporto del Río,

delitos perpetrado en la comuna de Lago Ranco. Ambos delitos acaecidos según mérito de proceso entre el 15 y 17 de septiembre de 1973. Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, niega su participación en los hechos, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados puntualizando lo siguiente:

DECLARACIONES (9)

1. JOSÉ JOVÍN OPORTO DEL RÍO (18 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 327 a fs. 329 (tomo II);

En declaración judicial de fecha 02 de octubre de 2015, rolante de fs. 327 a fs.329 (Tomo II). Relató que el día 11 de septiembre un grupo de jóvenes socialistas, comunistas, etc, todos de la UP, salieron desde la ciudad de Lago Ranco con destino a Arquihue, para poder hacer una reunión política y ver las acciones de resistencia contra, en ese momento, gobierno de facto. Entre ellos estaban Sergio Calfulef, Roberto Huaiqui, Héctor Angulo, Víctor Zavala, Luis Díaz Zumelzu, Alfredo Calfulef, los hermanos Manuel, Jorge y Sergio Furniel Ríos, Evaristo Vera y algunos más cuyas identidades no recordó. Siguió su relato contando que caminaron y pasaron por Riñinahue, pasaron el Puente Nilahue, donde tuvieron algunos inconvenientes con guardias blancas, que era gente de civil que apoyaba el golpe, los cuales les dispararon al verlos sin lograr lesionar a ninguno de ellos. De ahí siguieron caminando a Arquihue, donde se percataron que no había ninguna resistencia ni grupo organizado, así que decidieron volver luego de permanecer hasta el día 15 de dicho mes (septiembre). Anexó que luego

de salir de una parte boscosa y pasar cerca de un cobertizo, mientras caminaba con Huaiqui, un sujeto salió a dispararles, así que corrieron hacia el Puente Nilahue cayendo en una emboscada. Puesto que en el lado opuesto estaban apostados otros civiles, mucha gente, entre los cuales estaba Víctor Lacoste (fallecido), quien dirigía al grupo, los cuales empezaron a dispararles, por lo que debieron saltar del puente y tratar de irse con la corriente del río. Continuo que ya en el agua los disparos siguieron en su contra por parte de los civiles antes referidos, pero también desde dos avionetas, también de propiedad de civiles que sobrevolaban el sector. Conjeturó que una de ellas era de un señor de apellido Heitmann (fallecido). Hasta que de pronto vio que Huaiqui perdía toda vitalidad y la corriente del río se lo llevó, mientras su cuerpo giraba de vez en cuando movido por el oleaje. El declarante dijo haber sentido un golpe en la espalda a la altura del pulmón izquierdo, pero no le impidió seguir nadando, por lo que pudo llegar a la orilla y tenderse sobre una pierna, ya sin fuerzas. Divulgó que en ese instante llegaron los atacantes y uno de ellos de apellido Rivas (fallecido), le golpeó la cabeza con la culata de un revólver causando una herida que empezó a sangrar inmediatamente. Luego lo tomaron a la fuerza y en la pampa más cercana lo empezaron a golpear brutalmente con pies, puños y las propias carabinas. Preciso que ahí también estuvo involucrado Lacoste. Destacó que de pronto Heitmann y Miguel Obando, que conocían a su abuelo, intervinieron a su favor y pararon la golpiza, sacándolo de sus agresores, para luego trasladarlo en su avioneta hasta Río Bueno, donde lo entregaron en la Comisaría para que Carabineros lo llevara al hospital, lo cual obedecieron, pudiendo sobrevivir gracias a los auxilios prestados en ese centro hospitalario. Aclaró que tanto los civiles como los propios Carabineros de Río Bueno, querían terminar con su vida, pero Heitmann tenía

tanto poder que todos le obedecieron y ese hecho fue el que logró que no lo mataran. Adoso que las demás personas que iban con ellos se habían quedado ocultas en una zona boscosa mientras él y Huaiqui revisaban que era seguro pasar por el puente, lo que claramente no fue así. Por esta razón los demás no fueron heridos ni detenidos en esos instantes. Narró que en el hospital de Río Bueno estuvo desde el 15 de septiembre hasta las 10:00 horas del 3 de octubre de 1973, oportunidad en que los Carabineros lo sacan y lo llevan detenido hasta la cárcel del sector Isla Teja. Inquirió que lo vivido en sus detenciones e interrogatorios, el consejo de guerra que se realizó y que finalmente se fue a Argentina. Finalmente, ante la pregunta del Tribunal, respondió que un Carabinero de Riñinahue de apellido Ávila, que luego se fue a la 3° Comisaría de Lago Ranco, estuvo involucrado el día en que les dispararon. A este lo acompañaban otros carabineros, pero desconoce sus identidades. Contó que a Roberto nunca más lo volvió a ver y supo que unos tres o cuatro meses después que el río lo devolvió, pues habría caído en un pozo originalmente. Por lo que supo, a Roberto lo enterraron sus familiares a la orilla de la playa del Río Nilahue, cerca de la cascada que existe, aunque no está seguro de esto, pues solo fueron comentarios que escuchó.

2. CARLOS GERMÁN OÑATE JARAMILLO (26 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 360 a fs. 362 y de fs. 461 a fs. 462 (tomo II);

En declaración extrajudicial de fecha 06 de noviembre de 2015, rolante de fs. 360 a fs. 362 (Tomo II). Expuso que perteneció a Carabineros de Chile y para el año 1973 estaba trabajando en el Retén Riñinahue, de donde fueron evacuados después del 11 de septiembre de 1973, quedándose en Llifén. Recordó que para llegar a Riñinahue había tres formas de hacerlo; a vapor y/o bote, a caballo, a pie

y en avioneta. Él se trasladaba regularmente a vapor o a caballo, en avioneta solo recuerda que una vez se subió, que fue para cuando erupcionó el volcán. Siguiendo con su relato, dijo que durante el tiempo que estuvo en Llifén, ese sector también llegaban avionetas, las que se estacionaban en el sector “Chollinco” donde había un aeródromo que era de don Edmundo Provoste, ahí había por lo general 4 o 5 avionetas particulares. Puntualizó que en Llifén no había ninguna base de militares o por lo menos él solo los veía pasar, ellos pasaban al balseadero de Calcurrupe, que había para ese tiempo cerca de Llifén. Además, en el sector de Arquihue había un potrero que era de la familia Lacoste, donde también vio que aterrizaban aviones, inclusive remontándose a esos años, pudo recordar que tras el 11 de septiembre de 1973, estando trabajando en Llifén, junto a unos colegas salieron a trabajar al sector Arquihue, estaban por allá cuando vieron pasar unos aviones de la aviación, los que empezaron a disparar. Se comentó que le dispararon a un grupo de terroristas. Rememora este hecho, ya que inclusive por temor a que les dispararan a ellos se tuvieron que esconder por la cordillera, pero no sabe si estos hechos se relacionan con la persona por la que se le consultó, que corresponde a Roberto Huaiqui Barría, pues ese nombre nunca lo había escuchado. Aseveró que mientras trabajó en Llifén y Riñinahue, nunca observó que sus colegas o los jefes de cuarteles trabajaran con los militares, así que él solo cumplió funciones netamente policiales. Finalmente indicó que el hecho por el cual tras el 11 de septiembre de 1973 a él y a sus colegas Mamerto Ávila Gonzalez, Feliciano Curiñanco y el jefe de Retén, Carlos Galindo Ruiz; los evacuaron y fue porque se supo que para el sector de Riñinahue, específicamente el Retén, iba a ser atacado por personas que iban subiendo armadas. Quien declaró se fue a Llifén y otros se fueron a Lago Ranco, trasladándolos a todos en

dos vapores que dispusieron con dicho fin. Este Retén (Riñinahue) permaneció sin Carabineros por aproximadamente un año, pero no recordó bien, ya que volvió muchos años después de que ese Retén volviera a funcionar.

En declaración judicial de fecha 17 de agosto de 2016, rolante de fs. 461 a fs. 462 (Tomo II). Musito que para el año 1973 se encontraba trabajando en el Retén Riñinahue con el grado de Cabo 1°, siendo el jefe del Retén el Señor Carlos Galindo, sin embargo ocurrido el golpe militar fue levantado el retén y el personal distribuido entre Lago Ranco y Llifén, correspondiéndole integrar esta última unidad. En cuanto al hecho investigado por este Tribunal, afirmo que nada puede decir, que no conoció a la víctima Roberto Huaiqui Barría ni conoce las circunstancias en que éste falleció. Se le dio lectura al testigo el hecho relatado por Carlos Galindo a fs. 450 y siguientes en autos (disparo de civiles contra supuestos saqueadores), a lo cual expreso: “No participé de ese hecho ni recuerdo haber escuchado sobre ese tema”. Espeto que si el jefe del retén u otro colega tuvieron conocimiento de un hecho de esa envergadura debieron informarlo a la autoridad o a los tribunales, pero no recuerda que se haya comentado nada por el estilo. Descargó que no era normal que un Carabinero haya visto un hecho tan grave y se haya hecho el desentendido así como tampoco era normal, ni siquiera en esa época conflictiva del país, que la gente hiciera justicia por mano propia. Lo que sí escuchó es que un grupo de personas trataban de cruzar hacia Argentina por el sector de Nilahue e intentaron robar la casa del Señor Arturo Ávila que vivía frente a la casa de Reinerio Vásquez. Continuo que en ese momento Arturo Ávila no estaba, pero sí su cuidador que además era sastre, ignora su identidad, y este les habría disparado para ahuyentarlos. No supo si se trataran de las mismas personas que investiga el Tribunal. Posteriormente se le consultó al

testigo sobre la dotación del Retén Llifén, respondiendo que estaba el Sargento 1° Cereceda, el Cabo Galindo, el Cabo Juan Carrasco, un carabinero de apellido Salgado, otro de apellido Troncoso y quien declaro. No recordó a nadie más, aunque posiblemente el Retén debe haber estado integrado por unas dos personas más. Finalmente se le consultó al testigo si supo de avionetas particulares armadas que fueran usadas para perseguir a los socialistas que intentaban cruzar hacia Argentina, a lo cual respondió que vio avionetas en Riñinahue, en la pista de aterrizaje en el Fundo Ranquil, también en la que había en el Fundo Chollinco de Llifén, pero jamás supo que las avionetas civiles se usaran con ese fin persecutor.

3. SERGIO SEGUNDO CALFULEF TRAILLANCA (16 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 484 a fs.487 (tomo II) y de fs. 722 a fs. 725 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 3 de agosto de 2016, rolante de fs. 484 a fs. 487 (Tomo II), copia de fs. 715 a fs. 718 (tomo III). Relató que para el año 1973 tenía 16 años de edad, por lo que vivía con su grupo familiar en calle Concepción de la comuna de Lago Ranco y trabajaba en un local llamado “La Bodega de la Estación”, el que estaba administrado por Juan Daniel quien era militante del Partido Socialista, por lo que para poder trabajar había que inscribirse en la Juventud Socialista. Informo que una vez ocurrido el golpe militar, llegó a su hogar Ricardo Manzano Castillo y Sergio Duhalde (ambos fallecidos), quienes señalaron que si los volvían a ver los matarían y debido a lo anterior, con la finalidad de resguardar sus vidas, emprendieron camino hacia Argentina con su hermano Eliel Calfulef, Víctor Zabala, Evaristo Vera, Héctor Angulo, Jorge Furnier, Manuel Furnier, los profesores Carlos Velásquez, Carlos Bórquez y Carlos

Ancacura, alias "El Calucho", Luis Illera Ancao, otro sujeto de apellido Fuentes y Roberto Huaiqui Barría; saliendo alrededor de las 10 de la mañana del día 11 de septiembre de 1973 hasta Riñinahue y posteriormente a Chihúio, cercano a la frontera. Encontrándose en ese lugar con el jefe de estación de Lago Ranco, de nombre Raúl Poblete, quienes también estaba esperando junto a otras personas que no conocía, cruzar hacia Argentina, pero por las condiciones climáticas y la nieve que había en el lugar, se tuvieron que regresar el día 16 de septiembre de 1973 hasta la localidad de Arquihue, tomando en ese lugar un bus que iba hacia Llifén, junto a Víctor Zabala y su hermano Eliel. Adoso que al llegar a Llifén, alrededor de las 9:00 horas, en un control vehicular realizado por cuatro carabineros, frente al Retén Llifén, entre los que recordó a Mamerto Ávila González y Juan Sandoval, quienes subieron al bus en compañía de los detenidos Carlos Bórquez y Carlos Velásquez, quienes se notaban muy golpeados, indicando a ellos sus identidades, siendo detenidos en forma inmediata con golpes de sus fusiles, bajándolos del bus e ingresándolos a la guardia armada, a la entrada del Retén Llifén. Indico que los golpearon en reiteradas oportunidades con unas gomas y pinchazos con los fusiles, finalmente a golpes de puños y pies, recordó que les colocaron una bolsa de nylon en la cabeza, con la finalidad de quitarles oxígeno, consultándoles dónde tenía armamento. Difundió que de los cinco funcionarios que había en el Retén, quien fue más cruel en sus torturas fue Mamerto Ávila. Dijo que alrededor de las once o doce del día, lo pasaron a los calabozos que estaban al interior del Retén junto a su hermano y Víctor Zabala, instante en que llegó nuevamente Mamerto Ávila y les señaló a él y su hermano, que uno de los dos iba a morir, para que se despidieran, tomando la determinación el declarante que tenía que morir, porque su hermano Eliel tenía 13 años. Señaló

que lo sacaron en una camioneta, lo trasladaron hasta el sector Los Cerrillos, a dos kilómetros del camino que va hacia Futrono, golpeándolo con golpes de pies y un churro de goma. En ese lugar había cuatro funcionarios de los cuales solamente ubica a Juan Sandoval y Mamerto Ávila, quien señalaba en todo momento que el declarante era Santana, que dijera la verdad y no se cambiara el nombre. Continúo haciendo un relato de sus detenciones y torturas sufridas. Posteriormente, preguntado por Roberto Huaiqui Barría, afirmo que iban juntos en dirección a Chihuo, paso unos kilómetros del Río Nilahue, un señor de apellido Vásquez, quien vivía en una casa de dos pisos a un costado del puente Nilahue, empezó a disparar junto a otros civiles hacia ellos, por lo tanto el grupo se separó. Roberto Huaiqui junto a José Jovin Oporto regresaron en dirección a Lago Ranco. Ignora qué les pasó a ellos, hasta que José Jovin Oporto llegó a la cárcel de Valdivia, herido en su espalda con impacto de bala y les contó lo sucedido. Anexó que en el año 1980, estuvo detenido por hurto en la cárcel de Río Bueno, con un señor de apellido Rivas, quien se identificó como quien había participado en los hechos en que murió Roberto, por lo tanto se hizo amigo de él con la finalidad de obtener información de lo sucedido, quien con el tiempo le manifestó que para el 16 de septiembre de 1973, había participado en la balacera en la que falleció Roberto, indicando que Vásquez habría matado a Roberto Huaiqui, quien una vez recibido los impactos de bala se tiró al Río Nilahue y José Jovin Oporto también se tiró con la finalidad de rescatar a su compañero, logrando sacarlo hacia la orilla del río, pero como llevaba tantos impactos, soltó a Roberto y se lo llevó la corriente. No obstante a que el mismo Rivas, al momento en que José Jovin sacaba a Roberto también le dispararon por la espalda, a quien lo fueron a buscar a la orilla del río, sacándolo a una pampa, lo amarraron de un árbol, comenzaron a golpearlo

junto a 20 personas que participaban en la búsqueda. Según lo comentado por Rivas, este grupo pertenecía a Patria y Libertad, de los cuales recordó que Gilberto Ancacura en una oportunidad le comentó que después que se llevaron detenido a José Jovin, siguieron con la búsqueda del cuerpo de Roberto Huaiqui, mencionando que lo encontraron cerca del lago, sacándolo hacia la pampa, instante en que un tío que participó en la búsqueda se hizo cargo de él, ignorando el lugar donde lo enterró.

En declaración judicial de fecha 24 de abril de 2018, rolante de fs. 722 a fs. 725 (tomo III). Ratificó su declaración extrajudicial y además de ello agregó que en la golpiza de José Jovin Oporto y la muerte de Roberto Huaiqui también participó Mamerto Ávila y que los disparos no venían de las avionetas, los disparos fueron realizados por los civiles y Carabineros (entre ellos Mamerto Ávila), que se encontraban en el puente, desconociendo ahora los nombres de los otros Carabineros. A continuación detalló algunos datos respecto a personas mencionadas en su declaración extrajudicial y respecto a Roberto Huaiqui, dijo que este era su primo, hijo de un primo de su padre Sergio Calfulef Huaiqui. Sumo que su primo Roberto emprendió viaje a Argentina pues era socialista y decidió arrancar después del golpe ya que temía por su vida. A la pregunta que le hizo el Tribunal, aseveró que no recuerda a ningún José Oporto Del Río, pero el que sí iba con ellos era Jovin Oporto Del Río (actualmente en Argentina), quien era socialista e iba con Roberto Huaiqui Barría cuando los emboscaron, pero no pudo salvarlo pues él igual estaba herido de bala. Expreso que decidieron emprender camino hacia Argentina a pesar de estar en invierno y con condiciones climáticas adversas, pues dos profesores del colegio les advirtieron lo que les sucedería, que si se quedaban los iban a matar los militares, los Carabineros, don Ricardo

Manzano o don Sergio Duhalde. El declarante pensó que si antes del golpe militar, don Sergio Duhalde había sido capaz de dispararle a su primo quedando en la impunidad, después de lo sucedido su vida corría peligro. Pero después de lo que pasaron y lo difícil que fue el viaje se arrepintió de hacerlo. Narró que el circuito que recorrieron desde que salieron de Lago Ranco el 11 de septiembre de 1973 hasta Chihúio fue: Lago Ranco a Riñinahue, desde ahí salieron una noche hasta un complejo maderero que queda antes de llegar a Chihúio, en un lugar llamado Arquihue y les dijeron que esa era la frontera, desde ahí regresaron pues el frío y el hambre no los dejó seguir. Para alimentarse en el trayecto hasta Chihúio, pasaron a la casa de un señor mayor en el Lago Maihue y este les dio agua, harina tostada y los fue a dejar al otro lado del lago en bote, ese señor era conocido de Héctor Angulo. Desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la noche del 15 de septiembre de 1973, dormían donde los encontraba la noche, una vez al lado de un estero, en una cueva y arriba de los árboles amarrados para no caerse. Preguntado por don Raúl Poblete, dijo que este era miembro del Partido Comunista y jefe de la estación de trenes de Lago Ranco y que cuando llegaron a Chihúio este estaba allí, pero ellos siguieron su camino y lograron llegar a Argentina. Espeto que no conocía a las personas que estaban con don Raúl Poblete, pero después supo que en el grupo había dos hermanos de apellido Urrutia del sector de Cayurruca, de la comuna de Río Bueno, los que después estuvieron presos con el declarante en Valdivia. Manifestó que cuando estuvo detenido por Carabineros de Llifén fue interrogado y confundido con Belarmino Santana, era este quien peleó con Mamerto Ávila, cuando ese Carabinero trabajaba en Lago Ranco. Respecto a los hechos que relató en su declaración y que dicen relación con la muerte de Roberto Huaiqui Barría, inquirió que la fecha

aproximada en que ocurrió la emboscada debe haber sido el 15 de septiembre de 1973, pues de regreso el grupo se separó ese día. Su grupo estaba compuesto por su hermano (Eliel Calfulef), Víctor Zabala y quien declaró. Se fueron con dirección a Llifén en bus, el 16 de septiembre de 1973 en la mañana, pues se quedaron a pasar la noche en Arquihue, con la intención de tomar el bus el día 16 temprano, mientras que el grupo en que iba su primo Roberto Huaiqui se fue Arquihue el mismo día 15 de septiembre de 1973, con dirección a Lago Ranco por el camino que une a Lago Ranco con Riñinahue, caminando. Lo ocurrido en el río Nilahue lo supo por declaraciones de personas con las que estuvo detenido, pues él no estuvo en ese lugar cuando murió su primo. Aseveró que José Jovin Oporto le contó que pasando por el puente Nilahue los emboscaron un grupo de aproximadamente 15 personas, entre funcionarios de Carabineros (entre ellos Mamerto Ávila), algunos civiles, todos los que dispararon a Roberto Huaiqui y José Jovin Oporto. A Roberto se lo llevó el río y a José Jovin lo detuvieron y se lo llevaron herido de bala para torturarlo. Contó que la emboscada se produjo a la altura del puente, o sea, en el puente mismo, que el nombre del Señor Vásquez es Nello Vásquez, trabajador del predio Nilahue y el otro civil que recuerda es don Osvaldo Rivas, también trabajador del predio de Nilahue, fallecido actualmente. Aseguró que solo supo de la presencia de Carabineros, no de Militares y que de los Carabineros que participaron, solo recordó a Mamerto Ávila. Reiteró no haber estado en la emboscada y que la información que maneja le fue entregada por José Jovin Oporto, sobreviviente de la misma. Respecto a las avionetas, dijo que todos los días que estuvieron en su huida a Argentina, vio avionetas particulares sobrevolar la zona y se escuchaban disparos a lo lejos de las avionetas particulares sobrevolando la zona y escuchaba disparos a lo lejos. Urdió que

según los dichos de José Jovin Oporto, los disparos que mataron a Roberto Huaiqui y que también recibió él, no provenían de las avionetas, provenían de carabineros y civiles, que participaron en la emboscada. Expresó que el grupo se separó el 15 de septiembre de 1973, pues Roberto Huaiqui y José Jovin Oporto bajaron de Arquihue el mismo 15 de septiembre, mientras que los demás permanecieron arriba hasta el 15 de septiembre de 1973, fecha en que bajaron temprano para tomar un bus con dirección a Llifén, es por eso que no estuvo en la emboscada y tampoco pudo volver a ayudar a su primo Roberto Huaiqui. Agregó que don Osvaldo Rivas, del sector Riñinahue, también era trabajador del predio de Nilahue y participó de la emboscada donde murió su primo Roberto Huaiqui. Según lo que supo, don Andrés Montecinos fue la persona que les sirvió de guía para llegar hasta Chihuio, tiene entendido que después de eso, fue torturado para que dijera hacia dónde arrancó la gente que allí se encontraba y luego de las torturas fue arrojado vivo desde un helicóptero. Por último indicó que la persona que sabe cómo sucedieron los hechos, pues estaba junto a su primo cuando murió, es José Jovin Oporto, don Nello Vásquez y Mamerto Ávila.

4. LUIS RUBÉN DÍAZ ZUMELZU (17 años de edad a la fecha de la época), quien declaró de fs. 488 a fs. 489 (tomo II) y de fs. 813 a fs. 814 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 3 de agosto de 2016 rolante de fs. 488 a fs.489 (tomo II), copia de fs. 804 a fs.805 (tomo III). Informo que para el año 1973 tenía 17 años, por lo tanto vivía junto a su madre en la comuna de Lago Ranco. Desarrolló que en esa época trabajaba en la empresa agrícola ECA, la cual era de propiedad del Estado y era simpatizante socialista. Debido a lo anterior, cuando ocurrió el golpe militar, el día 11 de septiembre de 1973, los trabajadores de la comercial huyeron hacia Argentina, entre los cuales recuerda a

José Jovin Oporto, Sergio Calfulef, Carlos Ancura Antihual, Eliel Calfulef, Emilio Huaiqui, Víctor Zabala, Evaristo Vera, Héctor Angulo, Jorge Furnier, Manuel Furnier, los profesores Carlos Velásquez y Carlos Bórquez, Luis Higuera Ancao y Roberto Huaiqui Barría, Raúl Poblete, quien era el jefe de estación, Tenchi Rudolf, entre otros que no recordó. Relató que en la tarde del 11 de septiembre de 1973, llegaron hasta Riñinahue, lugar donde pernoctaron, para seguir su camino hasta llegar el día 12 de septiembre al Lago Maihue, lugar donde aviones al parecer civiles tiraban bombas, por lo tanto el grupo se dispersó, juntándose en la tarde donde un lugareño de apellido Rozas, al día siguiente los ayudó a cruzar el lago, siguiendo su camino hasta el complejo maderero Arquihue, precisando que Roberto Huaiqui aún seguía en el grupo. Al llegar a Río Blanco, se devolvieron debido a que había mucha nieve, por lo tanto iniciaron su proceso de regreso hacia Arquihue, permaneciendo en un refugio, dispersándose el grupo para tratar de regresar a Lago Ranco. El declarante regresó con Carlos Ancacura, Juan Figueroa, Gualo Villagrán, tomando la ruta de Arquihue hacia Llifén, logrando cruzar por el sector de Calcurrupe por el desagüe del río Nilahue, llegando a Ensenada, donde un señor llamado Juan Aguilar, quien los cruzó en bote hasta Nilahue, regresando a Lago Ranco un 14 de septiembre de 1973, a su domicilio. Lugar donde fue detenido por parte de Carabineros, entre los que recuerda uno de apellido Carrasco y Villegas, del Retén Lago Ranco, quienes lo trasladaron hasta la unidad policial, comenzando las torturas por parte de los funcionarios policiales, recordando que uno de ellos fue Lopetegui. Respecto a Roberto Huaiqui con José Jovin Oporto, divulgó que este último llegó detenido a la cárcel de Valdivia, quien comentó que ellos venían bajando de la cordillera y al llegar al puente Nilahue, había guardias blancas, que se trataban de lugareños con armas, quienes

dispararon en contra de ellos, hiriendo de muerte a Huaiqui Barría y posteriormente hirieron a José Jovin Oporto, mencionando que en esa oportunidad, habrían participado dos personas del grupo que logró reconocer, uno de apellido Ávila, Rivas y Vásquez. Anexó que fueron detenidos por los Carabineros del Retén Riñinahue. Destaco que posterior a este hecho, la familia lo salió a buscar, sin resultados positivos, ya que el cuerpo nunca apareció por ese sector. No obstante los lugareños si veían a alguna persona extraña en el sector, llamaban en forma inmediata a Carabineros.

En declaración judicial de fecha 11 de febrero de 2019, rolante de fs. 813 a fs. 814 (Tomo III). Ratificó su declaración extrajudicial pero rectificó que el 12 de septiembre de 1973, él regresó a Lago Ranco, ya que lo tomaron detenido el 13 de septiembre de 1973; y entre el 13 y el 14 de septiembre fue trasladado a Río Bueno. Allí estuvo detenido una noche y al día siguiente lo trasladaron a Valdivia. Respecto a José Jovin Oporto, Sergio Calfulef, Carlos Ancacura, Eliel Calfulef, Emilio Huaiqui, Víctor Zabala, Evaristo Vera, Héctor Angulo, Jorge Furnier, Manuel Furnier, los profesores Carlos Velásquez y Carlos Bórquez, Luis Iguera, Raúl Poblete y Roberto Huaiqui; dijo que efectivamente conocía a todas esas personas, que todas ellas formaban parte del grupo con el que arrancaron a Argentina. Aclaró que decidieron huir a Argentina porque les dijeron que los iban a detener por simpatizar con el Partido Socialista. Contó que pasaron a Riñihue a un asentamiento llamado “Salvador Allende”, allí los alimentaron y luego siguieron camino a Argentina. De regreso pasaron la desembocadura del lago y un caballero de nombre Juan Aguilar, los trasladó hasta el sector Nilahue. Preguntado por Raúl Poblete, el jefe de estación, dijo que no recuerda otro nombre o apellido de este y que estaba casado o conviviendo con la señora Tenchi Rudolph. Afirmando que no

recuerda el nombre del lugareño de apellido Rozas que los ayudó a cruzar el Lago Maihue en bote, solo supo que después lo tomaron detenido los militares por haber hecho ese traslado. No recordó a otras personas que los hayan ayudado en su recorrido. Con respecto a la ubicación del Río Blanco, responde que este se situaba saliendo como a 7 km de Arquihue hacia Chihuío. Preguntado por los nombres de lugareños que conformaban la guardia blanca en la época que acaecieron los hechos, apuntó que recuerda un tal Ávila, Vásquez y un Rivas, pero no sabe sus nombres completos ni los nombres de los otros integrantes. Pero eso se lo contaron, porque ellos no pasaron por ese lugar, pasaron por la orilla del lago. Informó que el puente Nilahue queda sobre el río del mismo nombre, a unos 50 metros antes del salto Nilahue. Preguntado por la fecha exacta del homicidio de Roberto Huaiqui, invocó que no lo sabe con certeza, pues estaba detenido cuando se enteró de su presunto homicidio. Respecto a si vio o supo si había militares en la zona cordillerana del Lago Ranco posterior al 11 de septiembre de 1973, dijo que sí había militares, específicamente en la zona de Arquihue y supo que había un Capitán, pero no recordó su nombre, apellido y/o seudónimo. No tiene más antecedentes sobre la muerte de Roberto Huaiqui.

5. HERNÁN DANIEL LEAL OPORTO (20 años de edad a la fecha de los hechos), quien declaró de fs. 553 a fs. 554 (tomo II) y de fs. 603 a fs. 605 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 2017, rolante de fs. 553 a fs. 554 (tomo II). Relató que para 1973 se encontraba trabajando en el asentamiento “El encanto” de Riñinahue, desempeñándose como tractorista, recordando que pasado el golpe militar llegó un Carabinero de apellido Cereceda, quien venía del Retén Llifén, comunicando que desde ese momento quedaban

bajo sus órdenes, debiendo trasladar a trabajadores del asentamiento hasta el puente Nilahue, para que vieran cómo atrapaban a los posibles extremistas. Cimentó que una vez que llegaron al puente, llegó Carabineros de Riñinahue y Llifén, comenzando la búsqueda de los posibles extremistas. Evidenció que mientras se encontraba en el puente, Carabineros y un avión que sobrevolaba el perímetro, ubicaron a José Jovin Oporto primero, quien iba al parecer herido de su espalda, siendo testigo desde el puente Nilahue junto a otras personas que se encontraban de civil, pero portando revolver en el cinto, cuando Roberto Huaiqui se lanzó al río a unos 60 metros antes del salto, momento en que las personas que se encontraban a su lado comenzaron a dispararle, se sentían los impactos en el agua y Roberto Huaiqui se quiso tomarse de una piedra, instante en que recibió un disparo, cayó al agua de espalda y pasó bajo el puente, posteriormente bajo el salto, su cuerpo iba sin vida. Dijo que las personas que dispararon a Huaiqui, eran lugareños del sector y de Llifén, quienes usaban sombreros beige o blanco grandes, ignorando sus identidades. Pasado estos hechos, se dirigió a sus tractores junto a Tito Meza Jaramillo, quien vivía cerca del sector Ignao. Preciso que al costado del camino de ese tiempo había un potrero largo, el cual servía como cancha de aterrizaje para el avión que sobrevolaba el área y el cual trasladó a José Jovin Oporto con rumbo desconocido. Afirma que de los Carabineros que andaban en ese momento, no pudo precisarlo, porque eran Carabineros recién egresados, recordándolo porque había hecho el servicio un año antes que él en Punta Arenas en el año 1971 y eran originarios de la comuna de San Carlos. Afirma que tiempo después, el cuerpo de Roberto Huaiqui se encontraba en el salto Nilahue y al parecer con el tiempo estaban solamente los huesos, producto de ello, su primo Alonso Barriga Leal, se dirigió a hablar con un señor de que

había sido juez del sector, quien le manifestó que dejara el cuerpo en el lugar que estaba, para que no se metiera en problemas.

En declaración judicial de fecha 12 de julio de 2017, rolante de fs. 603 a fs. 605 (tomo III). Ratificó su declaración prestada ante la Policía de Investigaciones. A la pregunta del Tribunal, contestó que él estaba físicamente en el trabajo, en el asentamiento “El Encanto” de Riñinahue. Cereceda llegó solo en vehículo, reunió a todos los que estaban, eran más de 20 personas en el asentamiento y esto debe haber sido como a las ocho y media de la mañana. Dijo que andaba con un fusil SIG y casco de guerra, les preguntó quién era el presidente de Chile y les indicó que los cuatro miembros de la junta. En ese momento colocó su arma al frente y les dijo que si alguien no seguía las órdenes podía abrir fuego, que estaban en pie de guerra y que tenía todas las atribuciones. Les indicó que suban al tractor para que vieran cómo iba a tomar a “esos”. Comunicó que quienes estaban en ese lugar eran Germán Campos y Waldo Rivas, ambos fallecidos, y tuvieron que ir a ver esto en el coloso del tractor. También se les dio la orden de no hablar nada. Ante la pregunta del Tribunal, respondió que no recuerda a nadie del Retén Llifén, de quienes se le leyó en ese momento. Sugirió a su relato que Cereceda habló de extremistas tales por cuales, que de “El Encanto” fueron hasta el puente Nilahue y que Meza también puede que haya estado, no se acuerda muy bien. Estaba el refuerzo que llegó de abajo, llegaron de los dos retenes. Sumo haber visto más o menos unos 10 carabineros que era una cadena de tiradores, orillando un zanjón que había un poco más allá. A lo que se le preguntó, afirmó que Roberto Huaiqui hizo el servicio cuando él, estuvo en Punta Arenas y lo conocía. Lo vio en el puente Nilahue cuando iba una persona nadando. Seguramente quería cruzar el río. Aseveró que este quiso tomarse de una piedra y ahí fue cuando le dispararon.

Cereceda estaba en ese momento. Eran varios los uniformados que disparaban. El cuerpo se fue por el agua hasta el salto. Respecto de los del retén Riñinahue, no pudo confirmar si andaban. Que vio a Carabineros, como había hecho el servicio, los sabría distinguir. Luego se llevaron al que tomaron, a Oporto, que seguro estaría en el mismo lugar en el matorral. A José Jovin Oporto no lo conocía. Lo atraparon porque andaban los dos ahí y dijeron que a Oporto lo llevarían en avión. No maneja si los civiles andaban con los suboficiales o vivían allá. No supo dónde habrá quedado el cuerpo de Roberto Huaiqui, se decía que había quedado en el salto, tampoco supo si fue enterrado, pero de ser así cree que lo sabría. Añadió que militares anduvieron en jeep porque vio pasar las patrullas que recorrían todo. No supo si dispararon del avión, tampoco supo si Tito Meza fue testigo pero puede decir que cuando Cereceda habló tendría que haber estado porque era tractorista, siempre andaban juntos, trabajaba con él, pero no lo recuerda en el puente. Apuntó que nunca se comentó nada más de lo sucedido, que en ese tiempo él vivía con sus padres. Nunca más vio a Cereceda y nunca más llegó otro oficial que hiciera lo mismo que hizo este. Se hizo el informe y se encontró que toda era gente trabajadora.

6. DINA URIA HUAQUI BARRÍA (16 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 109 a fs. 110 (tomo I) y de fs. 632 a fs. 634 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero de 2014, rolante de fs. 109 a fs.110 (tomo I). Narró que para el año 1973, ella residía junto a sus padres Emilio Huaiqui Calfulef, Violanda Barría Santana y sus hermanos en la ciudad de Lago Ranco. Tenía 16 años de edad y sus hermanos José (18 años), Nériida (20 años), Ismael (16 años), Roberto (17 años) y Eliel (12 años). Aquilató que una vez

producido el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, su padre era dirigente de agricultores y su hermano Roberto, debido a que no había trabajo, les pidió permiso a sus padres para ir a trabajar a Argentina. Este viaje lo estaba realizando con otras personas y una de ellas se llamaba José Jovin Oporto. Su padre lo autorizó y luego de unos días, al parecer el 20 de septiembre de ese año, llegó hasta su casa personal de Carabineros de Chile de Lago Ranco, quienes le informaron a su padre que habían matado a su hermano, en el sector del puente del río Nilahue, donde supuestamente iban cruzando y que desde una avioneta le habrían disparado, impacto que dio en su espalda y cayó al río, siendo su cuerpo arrastrado por las aguas río abajo. Ante esta noticia, sus padres quedaron muy mal internamente y la única salida fue que siguieron trabajando en la agricultura. No obstante la historia de su hermano, su familia cayó en una depresión muy fuerte y siguió siendo víctima de abusos por parte de Carabineros y militares, quienes en más de una oportunidad, se dirigieron a su casa en búsqueda de armas y destrozaron todo en la casa. Afincó que en una ocasión se llevaron todas las cosas y también encerraban a su padre en una habitación para torturarlo a golpes, pese a que su padre les señalaba que no tenía ninguna militancia política. Apuntó que a los días que su padre recibió la mala noticia de la muerte de su hermano, tomó la decisión de arrendar un barco con la finalidad de ir a rescatar el cuerpo, el cual según su padre, podría haber quedado atrapado en algún árbol o arbusto en la ribera del río, sin embargo, personal de Carabineros de Riñinahue le impidió llegar al lugar. Posteriormente, su padre fue detenido por personal de Carabineros de Lago Ranco, siendo llevado a la cárcel de Río Bueno en primera instancia, mientras su madre y demás hermanos quedaron en calidad de detenidos en el Retén de Carabineros, una noche y un día. Posteriormente su

padre fue derivado a la cárcel de Valdivia, lo cual provocó que ellos dejaran de estudiar y comenzaran a trabajar en la agricultura ayudando a su madre. Relató que luego de que su padre salió de la cárcel, se enfermó y nunca más se habló de la muerte de su hermano Roberto, como tampoco continuó con la búsqueda de su cuerpo, debido a todo lo que había pasado y futuras represalias de Carabineros de Lago Ranco, como tampoco nunca escuchó ningún comentario de otras personas respecto a qué pudo haberle sucedido a su hermano aquel día.

En declaración judicial de fecha 16 de noviembre de 2017, rolante de fs. 632 a fs. 634 (tomo III). Ratificó lo declarado ante la Policía de Investigaciones de Chile. Comentó que su hermano Roberto, a la fecha de su fallecimiento tenía alrededor de 17 o 18 años de edad aproximadamente. No tenía ninguna militancia política. Dijo que su hermano le pidió permiso a su padre para viajar a Argentina antes del golpe militar. El motivo por el cual decidió viajar era porque en Lago Ranco no había trabajo y estaban todos en la casa. Respecto de las personas que viajaron con su hermano, solo recordó el nombre de José Jovin Oporto, este joven era casi vecino de ellos, vivía un poco más arriba de su casa y su hermano era amigo con él. No supo qué otra persona lo acompañaron en el viaje. En cuanto a los Carabineros de Lago Ranco, que les fueron a entregar la noticia de la muerte de su hermano, escuchó que llegaron como tres funcionarios a su casa, esto sucedió a fines de septiembre de 1973. De estos funcionarios parece que había uno de apellido Martínez. Difundió que antes que llegaran estos funcionarios y mucho antes de la muerte de su hermano, habían ido militares a revisar la casa, para ver si su padre tenía armas. La primera vez, cuando llegaron le preguntaron a su papá si ellos pertenecían a alguna clase política, a lo que este respondió que no y se fueron. Recordó que los militares llegaron en carros grandes, que andaban

como 10 personas en su interior, eran jóvenes, el mayor debe haber tenido unos 45 años. Estos venían desde Valdivia hasta la zona de Lago Ranco. Estos militares anduvieron más de un mes por la zona, aparecieron después del golpe. Estimo que primero aparecieron Carabineros y luego Carabineros de Lago Ranco, quienes les avisaron sobre la muerte de su hermano. Puntualizo que cuando llegaron Carabineros de Lago Ranco, estuvieron afuera en el patio y le informaron a su papá que su hermano había muerto producto de un disparo desde una avioneta. El Tribunal le exhibió a la testigo una nómina de funcionarios de la Tenencia de Lago Ranco, que prestaron servicios para el año 1973, a fin de que indique si alguno de los nombres consignados en dicha nómina, corresponden a él o a los funcionarios de Carabineros que le fueron a notificar el fallecimiento de su hermano Roberto; a lo que la deponente señaló que reconoce a: Alfredo Fernández Martínez y le parece mucho que los otros eran Waldemar Medina Oporto y Conrado Navarro Cárdenas, aunque no está completamente segura, pero sus apellidos le suenan mucho. A la pregunta del Tribunal, informó que después de la muerte de su hermano, los militares fueron varias veces a la casa para agredirlos, a todos los encerraban en diversas habitaciones, encerraban a su padre para golpearlo. Les preguntaban si su padre era político y ellos les indicaban que no. Musito que tenían una bodega de trigo y les decían que debían darles comida a los militares, llevándose todas las cosas que estaban en esa bodega, dejándolos sin comida. Todos estos episodios ocurrieron durante el mes que estuvieron los militares en la zona. Nunca más volvieron a ver a los militares en Lago Ranco. Sumo que en una ocasión concurrieron Carabineros, desconociendo de donde eran, para amedrentarlos, pero no fueron tan violentos como lo fueron los militares. Fundó que después de haber recibido la noticia de la

muerte de su hermano, su padre lo único que quería era encontrar a su hijo y darle una sepultura como tenía que ser. Su padre le dijo que había hablado con una persona que tenía un barco en Lago Ranco, de apellido Celin Lavado. También habló con el teniente de Carabineros de Lago Ranco, dándole autorización. Su padre fue con sus hermanos más grandes a buscar a su hermano, pero no pudieron llegar al río Nilahue porque les impidieron el paso. No supo si habrán sido militares, carabineros o civiles, lo único que supieron es que no lo dejaron pasar, producto de esto su padre llegó muy mal. Dicen que el cuerpo de su hermano estaba en un árbol, en el río Nilahue, no recuerda a qué altura. Respecto al sector donde dieron muerte a su hermano Roberto, les dijeron que fue en el puente Nilahue, desde una avioneta de un particular le dispararon. Adoso que la gente que podría entregar información sobre la muerte de su hermano Roberto era pura gente mayor, no cree que vivan. Pero recordó a Fernando Ñancucheo quien vivía en esa época en el sector del río Nilahue.

7. MARTÍN EDUARDO HUAQUI BARRÍA (17 años de edad a la época de los hechos), quien declaró de fs. 432 a fs. 433 (tomo II) y de fs. 901 a fs. 902 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 24 de abril de 2016, rolante de fs. 432 a fs. 433 (Tomo II), copia de fs. 888 a fs. 890 (tomo III). A la pregunta por diferentes personas, de las cuales aportó los siguientes antecedentes: Respecto de Juan Huaiqui, al parecer correspondería a Juan Huaiqui Gómez, quien habitaba en el sector el Arenal Riñinahue; Carlos Ancacura, eran vecinos en calle Concepción, lugar donde en la actualidad vive su hermano Eliel Huaiqui Barría, en la comuna de Lago Ranco, al parecer se llamaba Carlos Ancacura Antihual (actualmente fallecido); Juan Figueroa, quien habría acompañado a su hermano

cuando venían bajando de la cordillera en el año 1973, él tenía a la fecha 22 o 23 años, quien vivía como a 300 metros de la casa de su hermano Eliel en Lago Ranco. Este trabajó en Carabineros ingresando en esa institución para el año 1976; Sergio Calfulef, tenía alrededor de 18 años en la época, vivía en calle Concepción a una cuadra del estadio de la ciudad; Héctor Angulo no recordó su identidad pero al parecer vivía a unas cuadras del Liceo de Lago Ranco; Luis Díaz Zumelzu tenía unos 22 años para el año 1973, vivía a 100 metros del consultorio hacia Lago Ranco; Eliel Calfulef, era hermano de Sergio y al parecer su segundo nombre era Ariel; Los hermano Furnier, Manuel falleció en Santiago, Jorge al parecer está vivo y viviría en Santiago, ellos en la época habitaban cerca del cementerio a 100 metros de la cordillera. Agregó que había un Carabinero de apellido Ávila que era encargado del Retén de Riñinahue y podría aportar información. Dijo que Juan Huaiqui ayudó en la búsqueda de su hermano, él tenía un campo en el arenal Riñinahue, Lago Ranco, quien habría enterrado el cuerpo de su hermano a 1 o 2 metros de distancia de un árbol para no perder su orientación. Expuso que Armando o Juan Ñancucheo “el chico Nano”, fue avisar a su casa que le habían disparado a su hermano. Añadió que Quirino Arriagada habría sido una de las personas que le disparó a su hermano, al parecer en la época tendría unos 40 años.

En declaración judicial de fecha 3 de enero de 2020, rolante de fs. 901 a fs.902 (tomo III). Ratificó lo declarado ante la Policía de Investigaciones de Chile. Atestiguó que cuando tenía 17 años al llegar a su casa, después de haber estado en su colegio ubicado en Lago Ranco, se encontró con la sorpresa que esta estaba llena de Carabineros y militares. Mientras que Carabineros maltrataba a sus padres, Emilio Huaiqui y Violanda Barría; los militares estaban dentro de la

casa rompiendo cosas con sus armas, buscaban a su hermano Roberto Huaiqui y además buscaban armas supuestamente escondidas por la familia. En ese acto, los militares lo tomaron y lo golpearon, lo trataron con groserías de alto calibre, preguntándole dónde estaban las armas y dónde estaba su hermano. Aseveró que no tenía idea de esas cosas, nunca se metió en política, pero acompañaba de vez en cuando a su padre a las reuniones de su junta de vecinos porque era el presidente. Narró que a los días después volvieron a avisarles, que los chiquillos habían vuelto y que al cruzar el río Nilahue hubo disparos, donde mataron a su hermano. Posteriormente llevaron a su padre a Valdivia detenido y después llevaron al declarante detenido hacia el Retén de Carabineros de Río Bueno, donde estuvo en esa calidad como dos semanas. En ese lugar lo sacaban al patio y maltrataban con los mismos fusiles que andaban trayendo los Carabineros, le pegaban en las uñas de las manos con los fusiles, lo quemaban con sus cigarros, le sacaban las uñas con alicates, lo quemaron con cigarrillo en partes de su cuerpo, no lo alimentaron por días y le daban de comer caca de caballo, querían que les dijera donde estaban las armas y donde estaban los dirigentes políticos de Lago Ranco y evidenció que él no sabía nada. Todavía tiene marcas de quemaduras en su cuerpo. Luego de dos semanas salió y se fue a su casa, su madre le dijo que su padre todavía estaba preso en Valdivia. A los días después llegaron a su casa don Fernando Ñancucheo y Juan Huaiqui, pariente de ellos y les avisaron que habían encontrado a su hermano muerto a orillas del río Nilahue y que ellos mismos lo habían sepultado bajo un árbol. Anexó que como a los cuatro meses soltaron a su padre, quien llegó con heridas en las piernas, amoratadas, golpeadas y quemadas. No contándoles nada por respeto a sus hermanos más pequeños y para no hacerlos sufrir más. Espeto que ahí le

contaron sobre la muerte de su hermano. Ante la pregunta del Tribunal, contestó que para la época de los hechos tenía 17 años de edad, era estudiante del liceo B-15 donde cursaba cuarto medio. Dijo que en ese tiempo conocían al teniente José Sáez y recordó que le pidieron autorización para la búsqueda de su hermano. Este les dio permiso, pero la gente que vivía alrededor, no. Adujo que no recuerda nombres de quienes se vieron involucrados en la muerte de su hermano. Añadió que no podría aportar datos sobre el lugar donde presumiblemente se encontraría inhumado su hermano, pero quien podría saber es Juan Huaiqui, él vive en el sector donde lo encontró y lo enterró cerca del sector llamado El Arenal de Riñinahue, cerca de una playa de Lago Ranco, bajo un árbol, él mismo lo dijo. Contó que a su hermano lo acompañaban Carlos Ancacura, José Jovin Oporto y Juan Figueroa, a quienes no ve desde el año 1973.

8. ELIEL ENRIQUE HUAQUI BARRÍA (12 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 118 a fs. 120 (tomo I), de fs. 435 (tomo II) y a fs. 926 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 14 de marzo de 2014, rolante de fs. 118 a fs.120 (tomo I), copia de fs. 919 a fs. 921 (tomo III). Proclamó que para el año 1973, él tenía 12 años de edad, vivía junto a sus padres y hermanos en Lago Ranco, dentro de los cuales estaba Roberto, quien tenía alrededor de 18 años. Dentro de lo que recordó, Roberto después del golpe de Estado, decidió viajar a Argentina a tener mejores expectativas laborales y al llegar al sector del puente Calcurrupe, fue interceptado por civiles, quienes le dispararon y cayó al río Nilahue, desapareciendo su cuerpo en el caudal de este. Posteriormente llegó personal de Carabineros de Lago Ranco a la casa, a avisarles a sus padres lo ocurrido con Roberto. Ante esto su padre decidió ir al lugar con la finalidad de

ubicar el cuerpo, pero al parecer Carabineros le impidió a la gente del sector efectuara la búsqueda. Finalmente declaró que a la fecha y a través los años, no ha tenido mayor información de lo que realmente ocurrió con su hermano. Agregó que su padre conversó con la familia y dispuso que no era tema lo ocurrido, lo anterior debido al miedo que reinaba en ese tiempo.

En declaración extrajudicial de fecha 3 de mayo de 2016, rolante a fs. 435 (tomo II), copia a fs. 922 (tomo III). Se le preguntó respecto a Carlos Ancacura, Juan Figueroa, Sergio Calfuléf, Luis Díaz Zumelzu, Eliel Calfuléf, hermanos Furnier, Rubén Huaiqui y Armando Ñancucheo, aportando los datos personales que tiene sobre algunos de ellos, para su ubicación y entrevista.

En declaración judicial de fecha 17 de enero de 2020, rolante a fs. 926 (tomo III). Ratificó sus declaraciones extrajudiciales y añadió que no recuerda la fecha exacta en que su hermano Roberto Huaiqui salió con destino a Argentina, debe haber sido entre septiembre u octubre de 1973. Precisó que los hechos ocurrieron en el río de nombre Nilahue, en el puente Calcurrupe. Aseveró que no supo los nombres de carabineros o civiles que participaron en el hecho, pero recordó el nombre de un suboficial Martínez de Carabineros de Lago Ranco, que en ese tiempo tuvo contacto con su familia. Comentó que sus padres y su familia se enteraron después de 2 o 3 días de lo ocurrido. Ignora el nombre completo de Fernando Ñancucheo y en cuanto a Rolando Vejar, su segundo apellido es Ancacura y es su primo. No tuvo conocimiento que se hubiese inhumado el cuerpo de su hermano ni menos del lugar en que eso hubiese ocurrido. Relató que cuando ocurrieron los hechos, su hermano andaba con un hombre de nombre José Jovin Oporto, el que estaría radicado en Argentina.

9. JULIÁN ÁVILA RIVEROS (40 años a la época de los hechos), quien declaró de fs. 551 a fs. 552 (tomo II) y de fs. 645 a fs. 646 (tomo III);

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 2017, rolante de fs. 551 a fs.552 (tomo II). Expuso que para septiembre del año 1973, era presidente del asentamiento “El encanto” del sector de Ranquil, enterándose del golpe militar por un amigo que vivía en Lago Ranco. Respecto al homicidio de Roberto Huaiqui, señaló que este era militante del Partido Socialista, quien una vez ocurrido el golpe militar tuvo que salir arrancando desde Lago Ranco junto a José Jovin Oporto, un señor de apellido Poblete con su hijo, los profesores Velásquez, Horacio Godoy, una señora de apellido Rudolph, entre otros que no recordó. Decantó que en esa fecha tenía una casa a orillas del Lago en el sector de Ranquil, por lo tanto estas personas le decían al cuidador que lo conocían y les dio albergue para refugiarse por las noches. Ellos querían cruzar la cordillera con la finalidad de llegar a Argentina, no obstante se tuvieron que dispersar del grupo Roberto Huaiqui y José Jovin Oporto, quienes tuvieron la intención de regresar a Lago Ranco y comenzaron el descenso hacia la ciudad. Estimo que el Sargento Cereceda del Retén de Llifén, agrupó a los pobladores cercanos del Puente Nilahue, incluso del asentamiento donde trabajaba el declarante, de todo lo cual se enteró por los asentados que dirigía, recordando que la orden que se les dio a los pobladores era que si veían a una persona extraña, tenían la autorización para matarlos. Pasada unas horas de la reunión divisaron a Huaiqui y a Oporto, quienes al ver a los pobladores, Huaiqui se tiró al río, recibiendo gran cantidad de disparos, de parte de Joaquín Garcés, Sixto Asenjo, quien andaba con un revolver, el hermano de Gastón Soto (alcalde de Lago Ranco) y posiblemente Isaías Vásquez, quien era pinochetista, Valdovino Rivas, quien quiso matar a José

Jovin Oporto, pero Germán Campos se lo impidió, Quirino Arriagada y su señora (todas las personas mencionadas, están actualmente fallecidas). Musito que en esa reunión con el Sargento en el puente Nilahue, estuvo el primo de Huaiqui de nombre Hernán Leal Oporto, quien en la actualidad viviría en el sector de Ranquil. Aclaró que a José Jovin Oporto le dispararon con un rifle en la espalda, quedándose en un risco hasta que llegó la misma gente que estaba en el puente, quienes se lo entregaron a unas personas que piloteaban un avión, saliendo rumbo desconocido con este. Respecto al cuerpo de Huaiqui Barría, indicó que al parecer lo encontraron a 1 kilómetro del puente hacia abajo, ignorando si sus familiares lograron sepultarlo en algún lugar.

En declaración judicial de fecha 27 de noviembre de 2017, rolante de fs. 645 a fs. 646 (tomo III). Ratificó íntegramente la declaración extrajudicial prestada ante la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos, pero aclaró que el golpe lo encontró en Lago Ranco, en el sector del pueblo, en esa época, a su señora le tomaron la escuela y ella tuvo que salirse de ahí e irse a otro lugar, mientras que él quedó solo con sus 4 hijos y una empleada. Respecto a lo que se le preguntó, respondió que el Sargento Cereceda de Llifén, dio la orden de citar a todos los pobladores del asentamiento a una reunión en el puente, desconociendo la cantidad de personas que asistieron, ya que no estuvo en la reunión, pero se enteró de lo sucedido por dos asentados, uno de ellos llamado Hernán Daniel Leal Oporto. Este le contó porque una de las víctimas era su primo (Roberto Huaiqui). Añadió que cuando sucedió el golpe, todos en el sector querían arrancar, todos eran socialistas. Le consta que Roberto Huaiqui arrancó con José Jovin Oporto y otras personas, entre ellos el Señor Poblete, quien era conductor. Expresó que a todos los mencionados en su declaración eran conocidos suyos,

menos la señora Rudolph. Señaló que la ruta que supuestamente siguió este grupo fue Linahue, luego Ropumeica y finalmente Argentina. Desconoce si el grupo llegó a Argentina en su totalidad, supo a los años que la señora Rudolph se devolvió y el Señor Poblete llegó a Argentina pero desconoce el paradero del resto. Posteriormente supo que Oporto y Huaiqui volvieron a Lago Ranco ya que en su peregrinar a Argentina, nadie los ayudaba ni les daba comida por ser socialistas. Preciso que Huaiqui una vez descubierto por las personas que estaban en el puente, se tiró al río ya que era muy bueno para el agua. A Oporto le dispararon, desconoce quién lo hizo. Sustentó no recordar los nombres de los pobladores que se reunieron en el puente Lanahue con el Sargento Cereceda y tampoco supo si fue acompañado por otros uniformados. Desconoce cuál era el papel que jugaba el avión que estaba sobrevolando el sector, pero en ese momento se llevaron a José Jovin Oporto, a quien le dispararon las personas del puente. Hernán Leal nunca mencionó que desde la avioneta se realizaron disparos.

DOCUMENTOS (6)

1. De fs. 1 a fs. 3 (tomo I) Copia simple páginas 396 y 397 del **Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación**, que en lo pertinente, respecto a Roberto Huaiqui Barría, señala: *“el afectado había salido de Lago Ranco el 11 de septiembre de 1973, junto a otras personas, con la intención de cruzar la cordillera para dirigirse a Argentina. Cuando iban cruzando el río Nilahue les dispararon desde una avioneta tripulada por civiles, dándole muerte e hiriendo en la espalda a uno de los acompañantes, quien fue recogido y llevado a un hospital. El cuerpo sin vida de Roberto Huaiqui cayó al río y fue impulsado aguas abajo por la corriente, sin que pudiese ser recuperado. Es convicción de la Comisión que en*

esta ejecución se produjo una grave violación a los derechos humanos del afectado, de responsabilidad de civiles que actuaban por instrucciones o con la aceptación de agentes del Estado.”

2. De fs. 156 a fs. 160 (tomo I). Informe del Departamento Derechos Humanos de Carabineros de Chile, el que remite **nómina del personal** de Carabineros que figura como dotación de la **Tenencia de Lago Ranco y el Retén de Riñinahue para septiembre de 1973**. En este último retén figuran el Cabo Carlos Emilio Galindo Ruiz y el Carabinero Mamerto Tercero Ávila González.

3. De fs. 642 y 938 (tomo III). Informe de Departamento de Control de Fronteras de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de Chile que informa que Roberto Eder Huaiqui Barría **no registra movimientos migratorios**, desde septiembre del año 1973 a la fecha.

4. De fs. 816 a fs. 821 (tomo III). Informe del Departamento de Derechos Humanos de Carabinero de Chile, que remite copia de **hojas de vida y transcripciones de las anotaciones del libro de vida**, correspondiente a la trayectoria institucional del personal requerido, junto a sus calificaciones, entre los que se encuentran los acusados Carlos Emilio Galindo Ruiz y Mamerto Tercero Ávila González. Cuaderno reservado de autos.

5. De fs. 983 a fs. 989 (tomo III). Informe pericial fotográfico N°80-2021 e Informe pericial planimétrico N°66-2021, elaborados por el Laboratorio de Criminalística Regional Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, correspondiente a inspección al puente Nilahue, sector Riñinahue, en la comuna de Lago Ranco.

6. De fs. 1.123 a fs. 1.124 (tomo III). Acta de inspección personal de Tribunal, con fecha 19 de julio de 2022. En el sector del río Nilahue junto al testigo presencial Hernán Daniel Leal Oporto.

13°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos. Ponderados, consistentes en testigos y documentos antes señalados como además se indica en el **auto acusatorio de fs. 1.467 a fs. 1.504 (tomo IV)** con fecha 23 de mayo de 2023, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallado, relacionados y aquilatados llegar a la convicción:

A. Que han existido los delitos de **homicidio calificado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría, (homicidio calificado consumado); y **homicidio calificado frustrado**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de José Jovin Oporto del Río.

B. Que en estos ilícitos le ha cabido la responsabilidad en calidad de **autor** en virtud del artículo 15 N° 1 del Código Penal, al acusado **CARLOS EMILIO GALINDO RUIZ**.

EN CUANTO A LAS DEFENSAS

14°) Que de fs. 1.722 a fs. 1.760 (tomo V), el abogado Marco Chesta Quiero, en representación del acusado **MAMERTO TERCERO ÁVILA GONZÁLEZ**. En lo principal de su presentación contesta acusación fiscal, su adhesión y acusación particular. En el primer otrosí, constesta demanda civil. En el

segundo otrosí, que se tenga presente. Conforme a antecedentes de hecho y derecho; en resumen su presentación se estructura de la siguiente manera:

A. Absolución de Don Mamerto Ávila González, basado en su falta de participación en los dos hechos acusados. Expresa que se ha imputado participación a su representado, expresando en el auto acusatorio las siguientes afirmaciones: Esta absolución requerida, respecto de los dos hechos acusados, se funda en primer término, en que resultan del todo insuficientes los antecedentes que obran en autos respecto de la supuesta participación de su representado en aquellos. Continúa argumentando que si se observa la forma como se da inicio a este procedimiento, a través de querrela de fojas 33, en el relato que se hace de los hechos. Apunta que el relato en primer término que reproduce su padre (Jovino Oporto) a fojas 29, da cuenta de lo que su hijo le narra están en el hospital de Río Bueno, informando que habrían sido civiles quienes le dispararon, sin mencionar la presencia de su representado en ese hechos, testimonio que fue recogido en el año 1990. En relación con las declaraciones de Oporto, de fojas 327 y siguientes de fecha 2 de octubre de 2015, esta da cuenta de un detallado relato, donde sindicaba a un grupo de civiles como quienes lo atacan, mencionando incluso sus nombres. En todo el episodio del ataque, solo nombra civiles, luego al término de esa declaración expresa *“a su pregunta señalo que un Carabinero de Riñinahue de apellido Ávila que luego se fue a la Tenencia de Lago Ranco, estuvo involucrado el día en que nos dispararon. A él lo acompañaban otros Carabineros, pero desconozco sus identidades”*. Al respecto, esta defensa se plantea las siguientes dudas *“a su pregunta”* ¿Cuál pregunta? ¿En qué términos se hizo esa pregunta? ¿Cuánta información contenía esa pregunta? Y ¿Qué quiere decir que estuvo involucrado? El abogado expresa que a pesar de que se afirma en el

enunciado que Oporto habría visto y reconocido a Ávila, no hay razón de sus dichos. Pregunta ¿dónde lo vio? ¿Cómo lo reconoció? ¿No estaba acaso siendo agredido por civiles y que luego ellos lo subieron a una avioneta? ¿en qué momento pudo verlo si el tractorista Sr. Leal (que conoce y conocía a Oporto) relata que él no vio ni identificó a su representado? Y por lo demás tampoco daría cuenta de la presencia de Mamerto Ávila en el lugar, pero sí de otro carabinero. Entonces, la sola afirmación del Sr. Oporto en cuanto a que un carabinero de apellido Ávila, estuvo involucrado, resulta del todo insuficiente para fundar participación y además es contradictoria con la declaración de otros testigos presenciales que no dudaron en identificar al Sargento Cereceda como partícipe de los hechos. Así consta de las declaraciones de Julio Ávila Riveros y Hernán Leal Oporto. Continúa su defensa haciendo presente que según dan cuenta las distintas piezas sumariales, el Sr. Oporto tenía su domicilio en Lago Ranco y don Mamerto Ávila vivía en Riñinahue, que para la época de los hechos era de difícil acceso, por lo que se pregunta cómo un joven de 17 años pudo reconocer y determinar que el Carabinero que él supuestamente vio era Ávila. Lo cierto es que hay otras personas de apellido Ávila en el sector de Riñinahue, asignándole a uno o dos un eventual interés en la secuencia de los hechos. Por otra parte, hace mención del examen físico médico Protocolo de Estambul N° 3-2015 que rola a fojas 367, argumentando que en el relato que ahí hace el Sr. Oporto en ningún momento da cuenta de que el Carabinero Ávila lo ataca, lo agrediera o lo persiguiera ni señala participación en los acontecimientos que él relata. Recuerda perfectamente los nombres de los civiles que lo agreden y no hay mención alguna a la participación bajo cualquier forma de su representado. Advierte que en el sumario figuran otras personas de apellido Ávila, distintas de su representado,

dentro de los participantes. Menciona la declaración de Carlos Oñate de fs. 461 y la de Luis Díaz Zumelzu de fs. 488. Que este Ministro da cuenta de la participación de su representado según acápite H de la acusación, tomando en consideración lo señalado supuestamente por Luis Díaz Zumelzu, sin embargo la conclusión del informe emitido por la PDI de fs. 480, da cuenta como resultado de la investigación criminalística que Luis Díaz Zumelzu fue detenido el 14 de septiembre de 1973 por Carabineros de Lago Ranco, Carrasco y Villegas, sufriendo apremios por funcionarios policiales, destacando en ese rol al Carabinero Lopetegui y señala que en la muerte de Huaiqui estuvieron involucrados Osvaldo Rivas, Isaías Vásquez y Julio Ávila. La defensa plantea la siguiente duda “¿no pudo acaso entender Oporto que cuando comentaban que había estado involucrado Ávila (descartando la validez del supuesto reconocimiento de Oporto que, como ya lo señaló no parece espontáneo y no hay forma de vincular si conocía a Mamerto Ávila previo a los hechos) no resulta acaso más coherente que sea este civil del mismo apellido de mi representado, Julián Ávila Riveros quien pudiera haber tenido participación en los hechos?” Se sustenta en que es a él a quien intentaron robar su casa y quien además en su declaración de fojas 551 y 645 da cuenta de motivaciones para haber participado, negándolo, pero resulta muy evidente y clarificador de sus dichos de la odiosidad a estos jóvenes a quienes además identifica por su orientación política. Recalca que Julián Ávila da cuenta que las personas que trataban de huir utilizaban su casa, sabe los nombres de esas personas que huían, que el cuidador les daba albergue, ratifica la actuación del Carabinero Cereceda (coincidiendo con la declaración de Leal Oporto), sindicando como autores de los disparos a Joaquín Garcés, Sixto Asenjo, Germán Soto, Isaías Vásquez, Valdovino Rivas, señalando

que este último quiso matar a Oporto y que Germán Campos se lo impidió. Anexa que resulta un relato muy preciso como para no concluir que efectivamente él estuvo en el lugar de los hechos o al menos estuvo muy bien informado. La defensa se cuestiona si era él la persona de apellido Ávila y no su representado y resultaba más útil involucrar a un carabinero. Agrega que este testigo coincide además con Oporto en vincular a Rivas en los disparos y con la declaración de Sergio Calfulef (fs. 718) quien recibe una confesión de Rivas, respecto de su participación como autor de los disparos de Oporto. Luego el abogado vuelve a referirse a la declaración de fs. 20 de Donosor Delgado, donde menciona a otro Carabinero a quien se le sindicaba la autoría de los disparos y además revela cierto parentesco con Oporto, por lo cual este podría haberlo reconocido y dice que justamente ese es el elemento que falta para entender el reconocimiento de Oporto a Ávila, en síntesis, no hay como explicarlo. Además a fs. 42 su declaración de Martín Huaiqui expone que “Quirino Arriagada habría sido el que le disparó a mi hermano, tío de Isaías Trofián.” Recalca que nadie de los testigos presenciales o que comentan de los hechos, salvo Oporto, menciona a su representado y ni siquiera Oporto lo hace en sus primeras declaraciones. De esta forma, la posible participación de su representado quedaría totalmente huérfana de respaldo, no estimando como suficiente la sola mención de Oporto a su supuesta participación, más que nada resaltando lo difícil que además haya podido percibir los hechos si él trata de ayudar a Huaiqui, le disparan en la espalda y luego da cuenta que son los civiles quienes lo golpean y lo llevan en avioneta al hospital. En el punto N° 9 de su defensa, se refiere a la declaración de Sergio Calfulef Traillanca, donde relata un hecho en que da cuenta de recibir golpes y torturas por parte de Mamerto Ávila, lo cual no será comentado por

cuando no es materia de investigación y que en todo caso esto ha sido negado por su defendido. Pero que con respecto a la narración de los hechos que le habrían sucedido a Roberto Huaiqui y José Oporto, es claro en señalar que de oídas y por relato de un señor de apellido Rivas da cuenta que él había participado en la balacera en que falleció Roberto. Posteriormente el mismo Sr. Calfulef presta nuevamente declaración y en relación a la consulta relacionada a lo ocurrido en el río Nilahue, expresa claramente que él no estuvo cuando sucedieron los hechos investigados. La defensa recalca que no hay versión unívoca respecto de participación, sino que además surgen más nombres, en este sentido menciona el informe policial n° 893, donde consta la declaración de Martín Catrighual quien señala que en estos hechos habrían estado involucrados los dueños de tierras Rainiero Vásquez, Arturo Ávila, Bruno Obando y Baldomero Rivas. Por lo anterior, esta circunstancia no podría ser considerada como suficiente para desde ahí formular una acusación de autor de homicidio, considerando además lo dispuesto en el art. 459 del Código de Procedimiento Penal.

B. Absolución de Don Mamerto Avila González basado en falta de tipicidad de conductas imputadas. Violación principio de tipicidad. Plasma el concepto de tipo penal y tipicidad que hace la doctrina (Politoff) y reproduciendo además el art. 391 N° 1 del Código Penal. Luego reflexiona que el verbo retor y la acción del delito de homicidio es “el que mate a otro”. Luego expresa que de la lectura del auto acusatorio, se desprende que las conductas supuestas atribuidas a su representado son: “Considerando 32 letra G: al otro lado habían muchas personas civiles y carabinero, entre ellos Mamerto Ávila González” sobre esto indica que la supuesta acción sería “estar un grupo de personas”. “Considerando 32 letra H: Los carabineros encargados de la persecución...observaron que

Huaiqui y Oporto se introdujeron al río Nilahue” la supuesta acción “perseguir y observar como se introducen a un río. “Considerando 32 letra K: que ambos uniformados no realizaron ninguna acción tendiente a impedir la ejecución del ilícito, colaborando asimismo con aquel, además no denunciaron, ni informaron a la superioridad de Carabineros ni a otra autoridad, ni consta que se haya efectuado una investigación, ni la existencia de un registro como consecuencia de la comisión de este hecho” Supuesta acción sería “no realizar acción tendiente a impedir el hecho, colaborar con aquel, no denunciar ni informar, ni hacer investigación ni hacer un registro”. Agrega que en el caso en concreto y en relación a este punto, no debe confundirse esta supuesta acción, que en sí no es típica, con lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, en el sentido de la autoría indirecta, por cuanto dicha norma presupone “que se tome parte en la ejecución del hecho”. Cita doctrina pertinente y concluye que no hay como atribuir esta autoría indirecta a su representado, no existe ningún elemento en autos que permita siquiera establecer un nivel de participación, directa o indirecta respecto de don Mamerto Ávila. Menos se desprendería el dolo propio que igualmente debiera concurrir, debe existir también el elemento subjetivo, que en el caso concreto tampoco se observa respecto de su defendido. Por otro lado, dice que permanecer en un lugar junto a otras personas, resulta atípico. Perseguir y observar resulta atípico y no realizar acción tendiente a impedir el hecho, es una conducta omisiva que debiere explicitarse claramente como para determinar en qué momento es atípica y no configura una ley penal en blanco. A continuación expone que no resulta certera la afirmación en cuanto a que no hubo denuncia a la superioridad, ni investigación, toda vez que, del relato del padre de José Jovin Oporto Del Río, él lo va a visitar al hospital, por lo tanto, no hubo ocultamiento de

la información. Que el Sr. Oporto expone que estuvo hasta el 3 de octubre en el hospital y luego Carabineros se lo lleva hasta la cárcel de Isla Teja. Afirma que en ese momento la situación no era de control de carabinero, al exponer Oporto quien ya estaba sometido a la justicia militar y donde Carabineros no tiene ninguna participación. Por otra parte, en relación a la situación de Roberto Huaiqui, destaca la declaración de doña Dina Huaiqui de fs. 632, donde recuerda que había un funcionario de apellido Martínez, que le informaron que su hermano habría fallecido por disparos de una avioneta y que son los Carabineros quienes le informaron que a su hijo le habrían disparado. Entonces acá no hubo conductas omisivas ni ocultamiento, por lo que Carabineros adoptaron un procedimiento y a lo menos informaron a familiares, siendo probable que por el transcurso del tiempo ya no estén los registros pertinentes, pero claramente hubo actividad administrativa luego de los hechos. Reitera que en todo caso, no denunciar ni informar a la superioridad, ni hacer investigación podrían constituir algún tipo de infracción administrativa u otro hecho, que en ningún caso aplica al caso de autos, ni menos considerar a su representado autor del delito de homicidio.

C. Absolución en razón de no estar acreditada la existencia del delito de homicidio calificado consumado de Roberto Huaiqui Barría, situación a considerar conforme a las propias diligencias de la investigación en torno a ubicar el cuerpo del delito. Alega que esa aseveración que se hace da por justificada, al tenor del artículo 274 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, la existencia del delito que se investiga, en lo que respecta al homicidio de Huaiqui Barría. Esto significa según la doctrina “que se haya comprobado la existencia del cuerpo del delito, esto es el hecho material que al parecer es delictuoso”, es en el sentido que da cuenta el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal. Anexa

que de aquella circunstancia, la probabilidad que el Sr. Huaiqui hubiese recibido un disparo y que ese disparo le hubiese producido la muerte, es necesario señalar que existen múltiples declaraciones de testigos presenciales que sí dan cuenta que hubo disparos contra Roberto Huaiqui, pero ¿qué certeza hay respecto a que esos disparos le hubiesen ocasionado la muerte? No hay como saberlo. Los relatos acerca que supuestamente se habría encontrado el cuerpo y luego habría sido enterrado a orillas del río, no pudieron ser comprobados. El que se haya tramitado la muerte presunta de don Roberto Huaiqui o que se hubiere rastreado el río sin encontrar el cuerpo, no permiten per se, atribuir la existencia de un delito de homicidio. Continúa planteandose interrogantes en torno a esto y cuestiona la existencia del delito a su respecto en los término del N° del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. Concluyendo este punto, acota que se entiende que este Ministro acata el cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero este deber no obsta a citar, eludir o no aplicar el derecho interno en cuanto a acreditar debidamente la existencia del delito y la participación de los responsables.

D. Carácter de lesa humanidad de los delitos investigados. Hecho aislado y ejecutado por civiles. Manifiesta que de la lectura de los diversos acápites fundantes del auto acusatorio, en su arista doctrinaria, no se hace referencia a qué se entiende por delito de lesa humanidad o cuales son los elementos que hacen conformar los hechos investigados en delitos de lesa humanidad, más aun cuando de esas mismas piezas de investigación surge participación de civiles, situación que tiene trascendencia para aplicar ciertas instituciones procesales beneficiosas para su representado, como por ejemplo, la prescripción. En esos términos cabe dilucidar si efectivamente los hechos

investigados por este Minsitro tienen o no el carácter de delitos de lesa humanidad. Al respecto cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y doctrina, señalando los requisitos por los cuales está configurado el tipo penal, de acuerdo a la definición expresa en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Además conforme al artículo 7 párrafo 1 del Estatuto de Roma, para que una conducta pueda calificarse como crímenes de lesa humanidad, ésta debe formar parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, exigencia que correspondería al elemento contextual del tipo. A continuación se extiende respecto a lo que incluiría el término “población civil” y “el carácter generalizado del ataque”, para más adelante reproducir las letras A a la H del considerando 32 del auto acusatorio. Sobre lo anterior, reitera que su representado no participó en estos hechos bajo ningún aspecto, y es posible concluir que estos acontecimientos tuvieron su origen en un hecho singular en que no hubo ningún tipo de acuerdo o preparación previa de Carabineros (salvo la declaración de testigos que imputan a Cereceda) la coordinación de la emboscada fue con civiles, lo que escapa en consecuencia al concepto de delito de lesa humanidad. Por lo anterior, argumenta que por la circunstancia de tratarse de civiles, particulares que actuaron y que reiteradamente se expresa en esos términos en las distintas piezas sumariales y más aun considerando que finalmente no se imputa la acción típica de matar a su representado, no es posible condicionarlo autor material y por ende calificar estos hechos de delitos de lesa humanidad.

E. Prueba tangible de la destacada participación de civiles y participación de una aeronave. Proclama que la circunstancia del Golpe de Estado y el derrocamiento del Gobierno Constitucional, solo puede ser imputable a los altos mandos de la Fuerzas Armadas y no al contingente que participó de esas

acciones y en especial se refiere a los miembros de baja graduación como es el caso de su representado. Uno de los hechos que demuestra tal circunstancia son los innumerables relatos de la participación activa de los civiles, que actuaron como verdaderos coadyuvantes en operaciones de control, delación y coordinación a las personas que tenían militancia política de izquierda. Prosigue indicando que el hecho central radica en el Sr. Oporto, al cual le disparan desde el aire y tierra, reconociendo la existencia de un avión, que interviene en la secuencia del hecho. Según los relatos de todos los presenciales y de oídas, son los civiles ligados al aeroplano los que impiden y se imponen para salvar la vida del Sr. Oporto. Este relato del propio sr. Oporto y otros concluyen que en ese mismo avión y con el solo objeto de salvarle la vida se le traslada en un vuelo inmediato a Río Bueno, informando a la Comisaría de esta circunstancia y disponiendo su internación en el hospital de Río Bueno en donde su vida es salvada. Recalca que hay otra variante por concluir, pues toda la oficialidad de Carabineros de Chile ligados a la Comisaría de Río Bueno supieron del hecho y no podían menos que saber las circunstancias del caso y quiénes participaron, lo anterior lo dice por un considerando en donde se resalta la ausencia de denuncia de su representado, sin reparar que la jefatura supo y sabía de este enfrentamiento y nunca se sometió a proceso a los oficiales de Carabineros que aun se encuentran vivos, como el Sr. Paiva, salvo que haya fallecido, centrándose la imputación en un carabinero de mínimo rango en la época.

F. Conclusión. Como conclusión destaca lo siguiente:

F.1. Don Mamerto Ávila tenía el rango de Carabinero en el año 1973 y en la época del golpe de estado prestaba servicios en el Retén Riñinahue, dependiente de la IV Comisaría de Río Bueno.

F.2. Que el 12 de septiembre de 1973 fue evacuado el referido Retén Riñinahue, labor que coordinó el Teniente Palma, el que reconoce la redestinación de 4 carabineros.

F.3. Que según declara el Carabinero Oñate, el fue redestinado al Retén Llifén y que otros fueron redestinados a la Tenencia de Lago Ranco, reconociendo incluso que fueron evacuados en embarcaciones distintas.

F.4. Que este hecho es coincidente con la declaración de Mamerto Ávila, quien manifiesta que fue redestinado a la tenencia de Lago Ranco, indicando incluso que volvió a prestar servicios a Riñinahue en el año 1974.

F.5. Que en general los testigos presenciales del hecho del enfrentamiento, no informan de la presencia de don Mamerto Ávila en dicha ocasión. Por otra parte, sí reconocen al menos la identificación de dos civiles de apellido Ávila, relacionados con la emboscada.

F.6. Por último hace algunos comentarios referente a la argumentación científica que en algunos pasajes doctrinarios de la sentencia son interesantes en el sentido que por tratarse de hechos de antigua data, la construcción de la verdad escapa a la relación lineal entre un hecho, un argumento y una conclusión, justificando que a través de relaciones indirectas puede llegarse a la construcción de la verdad.

G. Recalificación de participación. Si SSa. ltma determinare que su representado si ha tenido participación en los hechos investigados, tal como se señaló precedentemente y conforme las fórmulas utilizadas por SSa. ltma. para describir los hechos en que supuestamente su representado; los cuales no corresponden a la acción típica de matar y tampoco se ha descrito adecuadamente la supuesta omisión, que general corresponde a ley penal en

blanco al no estar descritas la contradictoria "conducta omisiva". Pudiendo su conducta ajustarse a una eventual complicidad en los términos del artículo 16 del Código Penal o una imputación en calidad de encubridor en los términos del artículo 17 N° 2 del Código Penal.

H. En subsidio. Y para el caso que SSa. ltma. estime que su representado ha tenido participación en los hechos investigados vengo en formular las siguientes alegaciones:

H.1. Recalificación delito de homicidio calificado frustrado a lesiones graves en perjuicio de José Jovin Oporto Del Río. Por otra parte, igualmente es discutible señalar que el delito que se imputa respecto de don José Jovin Oporto Del Río, esto es homicidio calificado frustrado, con los antecedentes que obran en autos, no hay medios de prueba suficientes respecto a que efectivamente se trata de un tipo penal básico de homicidio. En efecto, cita el del protocolo de Estambul, declaración del padre de José Jovin Oporto Del Río, de la propia declaración de José Jovin Oporto Del Río, es posible concluir, que, si bien supuestamente recibió un disparo, no hay ninguna mención a la circunstancia, que producto de esta agresión estuvo en peligro su vida, o que hubiere fallecido si no hubiere recibido la atención oportuna, o si producto del disparo tuvo algún daño en algún órgano, etc. Así entonces, no aparece definida con claridad en que calidad participa su representado en los hechos investigados. Si bien SSa. ltma.le atribuye participación en calidad de autor del artículo 15 N°1 del Código Penal , de lo expuesto emana que es perfectamente atendible , conforme lo expresado por V.S, atribuirle a su representado, a lo más participación en los términos del artículo 17 N°2 del Código Penal, por lo que se solicita recalificar la participación a encubridor o a lo más en calidad de cómplice, y, en definitiva considerar esta nueva calidad

de participación al momento de dictar sentencia, y aplicar la penalidad pertinente sea que se estime recalificar a complicidad o encubrimiento.

H.2. Consideraciones en cuanto a la calificante Alevosía. No concurre. SSa. ha imputado a su representado participación en un delito de homicidio calificado consumado, en perjuicio de Roberto Eder Huaiqui Barría y un delito de homicidio calificado frustrado en perjuicio de José Jovin Oporto Del Río, ambos en carácter de lesa humanidad. Al respecto, esta parte estima que en ambos casos no concurre la circunstancia calificante invocada en razón de los siguientes argumentos: Por un mínimo ejercicio de garantía al acusado SSa. ltma. debió describir los hechos que configuran la calificante de Alevosía en el caso concreto. Sin perjuicio de aquello, se estima que dicha calificante solo puede ser aplicada a quien ejecuta materialmente el acto, situación que no está imputada a su defendido. En efecto, como ya se señaló precedentemente, SSa. ltma no imputa a su representado la acción de matar a través de disparos a las víctimas, por lo que mal su actuar puede estar agravado por esa circunstancia, o dicho en otros términos, si ese calificante se aplica a quien efectivamente efectúa los disparos, dicha circunstancia no se comunica a otros eventuales partícipes, más aún si ni siquiera hay en autos acreditado un concierto previo. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema respecto a la materia.

H.3. No concurrencia de agravante invocada por querellante. Artículo 12 N° 8 del Código Penal. La parte querellante, ha invocado en su acusación particular la concurrencia de la agravante establecida en el artículo 12 N° 8 del Código Penal, respecto de la cual se solicita su rechazo, en los siguientes términos. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema respecto a la materia. Ninguna de estas circunstancias puede estimarse como concurrente respecto de

su representado, toda vez que fuera de los dichos, contradictorios con su propia declaración de Oporto en cuanto a que tuvo "presencia en el lugar de los hechos". No existe ningún antecedente que permita presumir que se prevaleció de su carácter de funcionario público, o si hubo un abuso de esa posición, lo que no está establecido en la investigación. Invoca el principio de *non bis ídem*.

15°) Que de fs. 1.790 a fs. 1.798 (Tomo V), el abogado Carlos Ernesto Jimenez Jimenez, en representación del acusado **CARLOS EMILIO GALINDO RUIZ**; en el primer otrosí de su presentación contesta acusación fiscal, su adhesión y acusación particular, conforme a antecedentes de hecho y derecho; en resumen su presentación se estructura de la siguiente manera:

A.Solicitud de absolución: La solicitud de absolución que pretende la defensa descansa en la teoría de la inocencia de su representado en atención a que como aparece de sus declaraciones de fs. 1354 a fs.1355 (Tomo IV). Y de los antecedentes contestes y coherentes de testigos que se indicarán en lo sucesivo, aparece establecido la falta de participación de don Carlos Emilio Galindo Ruiz, en los hechos imputados en la acusación fiscal. Es que fundamenta el auto acusatorio, y señala una equivocada concordancia a juicio de esta parte, con la declaración de los testimonios de los testigos de cargo con la de su representado, empero, en caso alguno el acusado, se hace responsable de un solo acto que conlleve la ejecución del tipo penal imputado, y menos ha reconocido una acción siquiera tendiente a ocasionar un daño o perjuicio en la persona de quien aparece como presuntivamente víctima de su representado. En efecto, insiste en argumentar el acusatorio en que la declaración hace razón y debe derivar en la acusación en su contra, tomándolo como un elemento probatorio autoincriminatorio, que en realidad, no existe como tal. De las declaraciones de

Carlos Emilio Galindo Ruiz, no puede leerse ni colegirse algún tipo de participación, por lo que debemos desechar cualquier tipo de imputación en la relación fáctica que despliega el acusatorio y que pueda sustentarse en sus declaraciones. Suma a la teoría de absolución de esta defensa, las contradicciones en que los testigos que han aparecido desde la indagatoria, y que no aportan si no que contrarían el fáctico de la acusación al auto acusatorio, establecen y recogen lo que la querella anunciaba, unos supuestos disparos provenientes desde una avioneta. Cita declaraciones de testigos respecto a este punto y resumen del caso de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación respecto a Roberto Huaiqui Barría. De conformidad al artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley. Precisamente, de los hechos contradictorios que se han acompañado en testimonios a la carpeta de investigación y a estos autos, debemos concluir que S.S Iltma., debe sentenciar que los hechos no se encuentran probados; en lo referente a la acusación y adhesiones y acusaciones particulares, no resulta probado participación culpable de su representado, en autoría de ninguna clase de las del artículo 15 del texto punitivo.

ANÁLISIS DE LAS DEFENSA ESPECÍFICAS

16°) CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA: Que previo al análisis de la defensa específica es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallaran:

A. ANÁLISIS DEL AUTO ACUSATORIO.

B. ESTADO DE DERECHO.

C. OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR.

D. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS (DELITOS DE LESA HUMANIDAD) PRONUNCIADA POR TRIBUNALES ALEMANES.

E. EN CUANTO LA COMPLICIDAD.

F. EN CUANTO AL ENCUBRIMIENTO.

G. CONVENIOS DE GINEBRA.

A. Resumen ejecutivo del auto acusatorio. Para adecuado análisis de la defensa, es necesario realizar un resumen ejecutivo del auto acusatorio dictado con fecha 23 de mayo de 2023, de fs. 1.467 a fs. 1.504 (tomo IV), ello para verificar la dinámica de los hechos y la actividad que se produjo:

En la **letra A.)** se da cuenta de las características que tenía Roberto Eder Huaiqui Barría, que como estudiante secundario era militante del Partido Socialista y su padre Emilio Huaiqui Calfulef era presidente del Consejo Comunal Campesino de Lago Ranco y también militaba en el partido socialista.

En la **letra B.)** se da cuenta que la comuna de Lago Ranco para el año 1973, existía la Tenencia de Carabineros de Lago Ranco. Tenencia que tenía a su cargo los retenes fronterizos de y Llifén, entre otros. En el caso del Retén Riñinahue, estaba integrado por los Carabineros Carlos Galindo Ruiz, Mamerto Tercero Ávila González, Carlos German Oñate Jaramillo y otro Carabinero más. Se señalan además las funciones de patrullaje que cumplían.

En la **letra C.)** se consigna que para el 11 de septiembre de 1973, se escuchó en la Tenencia de Lago Ranco, diferentes rumores en la zona de Neltume, respecto a enfrentamiento entre civiles y militares.

En la **letra D.)** se describe que días después del 11 de septiembre de 1973, se efectuó un operativo, en el cual del personal del Retén Riñinahue, fue rodeado por personas, debiendo los Carabineros de citado Reten huir de aquel lugar hacia Llifén. Para el día posterior llegaron refuerzos militares del Regimiento Maturana de Valdivia, este contingente militar instalo una base en la zona. Allí se apostaron con Carabineros de Riñinahue, Llifén e incluso civiles.

En la **letra E.)** se da cuenta que unos de los carabineros debió salir del Retén en el operativo antes descrito, fue Mamerto Tercero Ávila González , por este suceso fue derivado a Llifén y Lago Ranco.

En la **letra F.)** se precisa que Carlos Emilio Galindo Ruiz, Carabinero de la Tenencia de Riñinahue, indico que “después del 11 de septiembre de 1973, un Teniente de Lago Ranco le informo por medio radial, por medio radial que alrededor de setenta extremistas se habían escapado de la localidad de Riñinahue, de igual manera el Teniente de Llifén informó que dichos extremistas esa misma noche atacarían su cuartel policial. Debido a lo anterior, en la localidad de Llifén, junto a un carabinero concurren a Riñinahue ya que no existía contingente policial, pues habían sido retirados del sector”. A ese patrullaje llegaron, “entre las 16:00 horas y las 18:00 en el sector de Calcurrupe y que en una planicie muy cercana a un rio que se ubica a unos 100 metros de la carretera, se percataron de la presencia de un grupo de sesenta personas aproximadamente, los cuales pedían a gritos que los ayudaran ya que les estaba saqueando sus casas, por gente que se encontraba escondida al otro lado de la cordillera”. Ante lo anterior, “vio que desde unos matorrales y arbustos salen corriendo unas seis personas en diferentes direcciones, recordando una persona

que arrancó en dirección donde se encontraban las sesenta personas y al observar la huida y al perderlo de vista recuerda que escuchó varios disparos”.

En la **letra G.)** se detalla quienes eran ese grupo de 6 personas, los que pretendían pasar por los pasos fronterizos que existen en Riñinahue, y de cruzar la cordillera. Entre ellos estaban Roberto Huaiqui Barría y su amigo José Jovin Oporto Del Río, Carlos Ancacura Antihual, Sergio Segundo Calfulef Traillanca, y de Luis Rubén Díaz Zumelzu. Cuando iban de regreso por Riñinahue los primeros dos, Roberto y José Jovin más otros cuya identidad se desconoce, debieron separarse del grupo antes citado. Ellos venían caminando por zona boscosa y unas personas salieron a dispararles, por lo cual corrieron hacia el puente Nilahue. Encontrándose en una emboscada, puesto que al otro lado del camino habían muchas personas civiles y carabineros, entre ellos Mamerto Tercero Ávila Gonzalez. También estuvo allí el carabinero Carlos Emilio Galindo Ruiz.

En la **letra H.)** se da cuenta de los antecedentes de la inspección personal del Tribunal y los dichos del testigo Hernán Daniel Leal Oporto, tractorista presente el lugar de los hechos. Donde se relata que Roberto Huaiqui y su amigo José Jovin Oporto se dirigieron al río Nilahue a fin de escapar de los persecutores. Los carabineros persecutores Mamerto Tercero Ávila Gonzalez y Carlos Emilio Galindo Ruiz, observaron que Huaiqui y Oporto se introdujeron al río Nilahue. Produciéndose a continuación una serie de disparos sobre los cuerpos de Roberto Huaiqui y su amigo José Jovin Oporto. Roberto Huaiqui, recibió un impacto de bala y comenzó a perder vitalidad mientras la corriente del río se lo llevaba. Por otra parte José Jovin Oporto, su amigo acompañante, recibió un disparo en la espalda a la altura del pulmón izquierdo acercándose a la orilla para tenderse en aquel lugar, momento en el cual este grupo extenso de personas, lo detuvieron,

golpearon en la cabeza con la culata de una carabina y con pies y puño para ser trasladado en avioneta hasta Río Bueno y posteriormente, ser dejado en la Comisaría y luego transportado al Hospital para ser puesto en prisión, lugar en el cual se encuentra nuevamente con sus otros dos amigos acompañantes que se habían escapado de la emboscada tomando otro camino Sergio Segundo Calfulef Traillanca y Luis Rubén Díaz Zumelzu. A los cuales les relata lo sucedido, indicándoles que un carabinero de Riñinahue de apellido Ávila, había estado involucrado el día en que les dispararon a él y a Roberto Huaiqui. Todo lo anterior es ratificado por las declaraciones de Sergio Segundo Calfulef Traillanca y Luis Rubén Díaz Zumelzu.

En la **letra I.)** se da cuenta que después de ocurridos los hechos, el padre de Roberto Huaiqui arrendó una embarcación para recorrer el río Nilahue en búsqueda de su hijo, pensando que éste pudo haber quedado atrapado entre las rocas o algún arbusto en la ribera del río, situación que no se pudo concretar pues Carabineros de Riñinahue le impidió llegar al lugar donde ocurrieron los hechos. Señala esta misma letra, que Carabineros de Lago Rango, en otras oportunidades, habían ido juntos a efectuar allanamientos al hogar de la víctima de autos, deteniendo al padre de Roberto, Emilio Huaiqui Calfulef, llevándolo a la cárcel de Río Bueno.

En la **letra J.)** consta que el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, declaró la muerte presunta de la víctima en autos Roberto Eder Huaiqui Barría, en el año 2012, a solicitud de sus familiares directos.

En la **letra K.)** se indica que estos uniformados, Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz, sin ser parte del grupo de personas (carabineros y civiles), que dio muerte a la víctima de la presente causa, no

realizaron ninguna acción tendiente a impedir la ejecución del ilícito, colaborando asimismo con aquel. Además que no denunciaron ni informaron a la superioridad de Carabineros ni a otra autoridad del este hecho.

B. Estado De Derecho.

B.1. Estado Autoritario: *“Un Estado autoritario, es aquel donde el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella.”* (Roberto Ruiz Díaz Labrano: “El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia”, p.3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc.) (...) *“La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario”.* (Oscar Vilhena Vieira (2007): “La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho”. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). (...) *“En esa línea el concepto de **Estado de Derecho es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno”.* (Dante Jaime Haro Reyes: “Estado de Derecho, Derechos Humanos y

Democracia". www.juridicas.unam.mx. p. 123). (...) *"Puede sostenerse entonces, que su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política". (Pablo Marshall Barberán (2010): "El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política". Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).*

B.2. Origen: *"El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos." (Luis Villar Borda (2007): "Estado de Derecho y Estado Social de Derecho". Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). (...) "En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento". (Haro, p. 118).*

B.3. Fundamento: *"El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo: en la libertad y la*

igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder". (Marshall, pp. 187-188).

B.4. Concepto: *"El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre." (Haro, p. 124).* (...) *"Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (Haro, p.123).* Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos". **(Haro, p. 126).**

B.5. Elementos: **Marshall** siguiendo **Böckenförde**, expresa que las características originales del Estado de Derecho son las siguientes: **"a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación

de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones” (**Marshall, p.191**). En esa línea **Benda** considera que el Estado de Derecho involucra: “**a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica.” (**Marshall, p.191**). Sobre lo anterior **Villar Borda (pp. 74-81)** realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá **Böckenförde**. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de muchas fuentes y distintas épocas, así: “**a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional”.

B.6. Chile y el Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras

libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder. *“La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática”. (Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle (2006): “La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano”. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la **Constitución de 1925** esta consagra, además, el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo. Así es verificable en sus **artículos 1 al 4** que consagra el gobierno republicano y democrático **(1)** la soberanía reside en la nación **(2)**. Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente*

le haya conferido por la leyes **(4)**. Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Por su lado la **Constitución de 1980** (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su **artículo 4** que Chile es una República democrática. En su **artículo 5** que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall (pp.199-202)** expresa que (...) “los **artículos 5 a 7 de la Carta Fundamental** se desprenden algunos **principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política**: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del **artículo 5 inciso 2º** como consagración del principio de distribución. La afirmación de que el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (**art. 6 inc. 1º**), legalidad en sentido amplio (**arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º**), garantía del orden institucional (**art. 6 inc. 1º**), fuerza normativa de la Constitución (**art. 6 inc. 2º**); responsabilidad (**art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º**), distribución de competencias- separación de poderes- (**art. 7 inc. 1º y 2º**), legalidad en sentido estricto (**art. 7º inc. 1º**). Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es

central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar.” (Marshall, pp. 191-192). (...) *“En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera uno de los pilares principales de un régimen democrático Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso”.* (Vilhena, p.30). En este caso el **homicidio calificado** (como indica el mérito del proceso y el auto acusatorio de fs. 1.278 a 1.295, tomo V), comenzó con una privación de libertad irregular e ilícita y apremios ilegítimos, para luego terminar con el homicidio calificado y encubrimiento como suicidio, de Eduardo Sporman Santibáñez. Siendo estos grupos y operativos, formados para la privación arbitraria e ilícita de los opositores al régimen militar y como se describe en el auto acusatorio y en las múltiples pruebas; directas e indirectas generales y específicas que se han detallado y ponderado precedentemente dan cuenta de lo razonado, lo que demuestra que los acusados actuaron en estos hechos descritos en el auto acusatorio de fs. 1.278 a 1.295 (tomo V). Luego se dan todos los elementos del **Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad** para formularle al acusado el reproche penal que se ha señalado. Ello sin perjuicio del análisis de las defensas.

Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad, hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el **11 de septiembre de 1973**, tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un **quiebre constitucional** significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor

exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En este caso entonces, la víctima fue llevada a un lugar de detención improvisado, estando en una alta indefensión. El homicidio calificado (como indica el mérito del proceso) de Eduardo Sporman Santibáñez fue al margen de todo derecho. En consecuencia, tanto el mando superior como los subordinados respectivos se encuentran en condiciones como se ha cavilado, de realizarles un reproche penal como se ha hecho en esta sentencia. Ello sin perjuicio del estudio de la defensa.

C. Obligación de investigar.

Cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

C.1. *“Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en Derechos Humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al **artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución** que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales.”*
(García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal

Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, **pp. 27 - 53**). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

C.2. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: *“La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”*.

C.3. *“Que esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones*

de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana”.(**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Santiago de Chile, Librotecnia. **pp. 356-357**).

C.4. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**-ya citada- en especial los **artículos 1.1 y 2**. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

C.5. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna opinión consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se

deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los Derechos Humanos (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

C.6. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. **Párrafos 176 y 177**, afirma en el **176** que (...) *“el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención”*. Por su lado en el **177** acota que (...) *“la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad,*

resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo 225, añade que del (...) “*artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos*”.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo 41 asevera que (...) “*esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*”.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su **párrafo 42** anexa que (...) “*La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria*” (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) “*el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y*

sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado”.

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el **párrafo 115** explícita que (...) *el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos”.*

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. **Párrafo 277** expresa que (...) *asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso”.*

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004. **Párrafo 159** acota que (...) *la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana”.*

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que (...) *la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención*”.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo 145 anexa que (...) *“está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva*”.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus **párrafos 137, 233 y 299.** Afirma en el **137** (...) *Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso*”. **233** (...) *“Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la*

obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales”; 299 (...)“Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y c) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán”.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo 143 *afinca que (...) “en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables*

intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que **117** (...) “además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”. **129** (...) “una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables”. **130** (...) “por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su

alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido”.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111** (...) *“los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.* Párrafo **114** (...) *“por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía”.*

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo 387. (...) *explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo*

razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares”.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155** (...) *La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irracionalidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”.156* (...) *“el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e*

importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos”. 171 (...) “este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.”

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007.

Párrafo 106 indica que (...) *“una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; d) determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y e) en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio”.*

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo 131 manifiesta que (...) *“el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una*

simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en **104**, (...) *“que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos”.* **112** (...) *“la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional”.* **115** (...) *“para la*

Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas”.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo 142 narra que (...) *“la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos”.*

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo 77 acota que (...) *“en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará*

que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes”.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009.

Párrafo 283 añade “*que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de los Cogens. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si*

existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado”.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su **párrafo 298** apunta que (...) *“la obligación general de garantizar los Derechos Humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e*

individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado”.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) “este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades

penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación”.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) *“en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación”.*

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) *“la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales”.*

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) *“la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto*

útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables”.

Sentencia caso Núñez Naranjo y otros versus Ecuador del 23 de mayo de 2023. Párrafo 81 asevera que, (...) *“de forma reiterada en su jurisprudencia, la Corte ha establecido que la desaparición forzada es una violación compleja y múltiple, que pone a la víctima en un estado de completa indefensión y atenta contra diversos bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana. En particular, esta conducta genera la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención, respectivamente Asimismo, la Corte ha señalado que, si un Estado práctica, tolera o permite un acto de desaparición forzada, incumple las obligaciones previstas en el artículo I a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que prohíbe tales conductas”.* Continúa, el **párrafo 83** musita que, asimismo, (...) *“la Corte ha afirmado que la desaparición forzada es “un acto continuado o permanente, que permanece mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, y mientras no se determine con certeza la identidad de los mismos”. Este acto se configura cuando se presentan en forma concurrente los siguientes elementos: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o de personas que actúen con autorización, apoyo o aquiescencia de estos; y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada”.* Que el **párrafo 106** asienta que, *“Los Estados tienen el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones*

*de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, en su caso de imponerles las sanciones pertinentes, y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. En particular, cuando se trata de la investigación de violaciones en perjuicio de personas que se encontraban bajo custodia del Estado, las autoridades correspondientes tienen el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva, es decir, con la debida diligencia, sustanciada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad. Tales características del deber de investigar son aplicables, con mayor razón, en casos de posible desaparición forzada de una persona. Por último, el **párrafo 107** refiere, (...)”frente a esta violación en particular, además del deber de investigar y sancionar a los responsables, la Corte ha subrayado la existencia de una obligación autónoma de buscar y localizar a las personas desaparecidas, derivada de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, del artículo X de la CIDFP y de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Este deber también ha sido desarrollado por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y por los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estos últimos indican que las autoridades encargadas deben iniciar la búsqueda de oficio, incluso si no se ha presentado una denuncia o una solicitud formal y agregan que “[l]a búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de los responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente”, toda vez que “[e]l proceso de búsqueda integral de las personas desaparecidas debe iniciarse y llevarse a cabo con la misma efectividad que la investigación criminal.”*

C.7. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un **estándar** en relación a **la obligación de investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los Derechos Humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en **Eduardo Ferrer Mac-Gregor**. (“Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal”. Revista IIDH v. 59 **pp.45-48**). El autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

C.7.1. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

C.7.2. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.

C.7.3. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.

C.7.4. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.

C.7.5. La Corte IDH ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

C.7.6. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.

C.7.7. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación,

persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

C.7.8. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte IDH ha definido como *“la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”*.

C.7.9. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

C.7.10. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

C.7.11. La Corte IDH reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de

los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación

C.7.12. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

C.7.13. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

C.7.14. La Corte IDH ha establecido ciertos principios rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación efectiva de Ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte

que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

C.8. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los agentes del Estado. Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia y que ambas defensas nada expresan. Así del estudio de sus alegaciones, no hay un análisis adecuado de todos los testigos, documentos y peritajes, sino que se refieren a eventos parciales de su propio interés. Ocurre que las defensas deben situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de Lesa Humanidad.

D. Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por los Tribunales Alemanes.

D.1. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno). Pues también los hechos investigados son graves violaciones a los Derechos Humanos, en este caso delitos de Lesa Humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al

caso chileno, esto es, centros de detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, cárceles, calabozos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época. Que es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk (condenado el 12 de mayo de 2011) y Oskar Gröning (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad , respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes.

A continuación se realiza un síntesis en lo pertinente de los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt (Universidad Humboldt- Berlín, sobre el caso Demjanjuk); y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning. Estos casos además han sido llevados a formato audiovisual en diferentes documentales, tales como: “El nazi Iván el terrible” en la plataforma Netflix y “El contador de Auschwitz” en la plataforma Prime Video.

D.2. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). (**Gerhard Werle y Boris Burghardt** (Universidad Humboldt- Berlín. “Revista Penal México”. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, **pp.181-193**). Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de

los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como cómplice de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la

seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzosos, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

D.3. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis),

los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos—tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y —siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos— en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

D.4. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Go-merski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: *“El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”.* Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht, incluso para Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que *“todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo”.* De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

D.5. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: *“Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, (...) todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”*. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que (...)se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: *“Conforme a lo constatado (...) ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales*

deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

D.6. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo. La declaración principal podía resumirse diciendo que allí no había actividades neutrales. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la

atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

D.7. Que el segundo artículo versa sobre la sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz. Sentencia del BGH y comentario de **Claus Roxin** ("Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano". CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, **pp. 189-209**). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado **Oskar Gröning** en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

D.8. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en calidad de cómplice de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el

campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-WirtschaftsVerwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la

maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

D.9. Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos, no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del artículo 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado –mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro - como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una

posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

D.10. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que el acusado (Gröning) tuvo participación en esta facilitación de los hechos. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

D.11. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las

órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

D.12. Que por ello **Claus Roxin** considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

D.13. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20 de febrero de 1969**, a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: *“Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió...”*. En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

D.14. Que precisa **Roxin** que, no existen causales de exculpación. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba *“informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]”*. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. *“Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.”* Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

D.15. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

D.15.1. Al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho. Se había quebrado el orden institucional pues las Fuerzas Armadas y de Orden

dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.

D.15.2. Es decir se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789; Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los **artículos N°2 y N°16** de la citada declaración del Hombre y del Ciudadano. *“Artículo 2: La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.* *“Artículo 16: Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.*

D.15.3. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el Congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los Derechos Fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor. En

segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las persona se debía tener una necesidad, proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.

E. En cuanto a la Complicidad: Que como ya se analizó en la causa 114.001 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 1-2013 del Juzgado de Letras de Pucón, 113.969 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco y causa 57.068 del Juzgado de Letras de Victoria. Es necesario cavilar sobre la complicidad. Tanto la doctrina Española como la Chilena y tomando en cuenta la consagración legal que tiene la figura de la complicidad, esta tiene un **carácter residual** en el ámbito de la aplicabilidad. Es decir es una contribución a la realización del delito con actos anteriores o simultáneos a la misma, que no pueden en ningún caso ser considerados como de autoría. La complicidad según definición del artículo 16 del Código Penal, tiene una caracterización negativa; es decir, es cómplice aquel cuya contribución al delito no pueda calificarse, ni de autoría, ni de inducción, ni de cooperación necesaria. **Francisco Muñoz Conde y otra** “Derecho Penal, Parte General. Quinta edición. Editorial Tirant Lo Blanch, año 2002, (p.p 357 a 413)”, expresa en síntesis que la conducta habrá de tener alguna eficacia causal, aunque sea mínima en el comportamiento del autor y reunir además una cierta peligrosidad. Precisa dicho autor que la conducta del cómplice ha de ser peligrosa de manera que, desde una perspectiva ex -ante represente un incremento relevante de las posibilidades de éxito del autor y con ello la de puesta en peligro o lesión del bien jurídico. Ello ocurrirá cuando, en el momento previo a la acción del cómplice, sea previsible que, con su aportación, la comisión del delito sea más rápida, más segura o más fácil o el resultado lesivo más intenso que sin ella. Se

distingue entonces: **1.** Naturaleza de la cooperación. Dolosa, pero basta la idea que el auxilio facilite o haga más expedita la ejecución. Incluso el simple auxilio intelectual o moral es suficiente. **2.** Momento de la cooperación. Actos anteriores o simultáneos. **3.** Aprovechamiento de la cooperación por parte del autor. Que se haya servido efectivamente de ella. En el caso de autos, como se desprende del análisis de las declaraciones indagatorias analizadas precedentemente, es nítido que la complicidad es suficiente para que el auxilio facilite o haga más expedita la ejecución. Incluso el simple auxilio intelectual o moral es suficiente.

F. En cuanto al Encubrimiento. Tal como expone la doctrina, uno de los rasgos peculiares de la legislación chilena es considerar el encubrimiento como una **forma de participación** en el delito. *“La generalidad de las legislaciones considera que no puede hablarse de participación una vez que el delito ha terminado, lo que desde la teoría causalista es correcto. Por ejemplo, el encubrimiento de un homicidio no atenta contra la vida puesto que la víctima es cadáver, sino contra la administración de justicia. Ello sin perjuicio de los matices que requiere analizar el encubrimiento en forma específica.”* (**Alfredo Etcheberry**, “Derecho Penal, Tomo II”, 2004, **p. 101**). (...) *“Por su lado como forma de participación corresponde a una tradición muy antigua que viene del derecho germánico y subsistió hasta 1995 en el Código español. Es esa perspectiva lo que debe destacarse en las formas de encubrimiento (favorecimiento real y personal) es el bien jurídico lesionado por la conducta del sujeto que no es el quebrantado por el hecho encubierto, sino el interés en una recta y expedita administración de justicia”.* (**Enrique Cury**, “Derecho Penal, parte general”, 2011, **p. 631**). Siguiendo a los autores citados (pp. 101 y siguientes y 630 y siguientes de las obras citadas) y también a **Sergio Politoff y Luis Ortiz Quiroga** en la obra “Texto y Comentario

del Código Penal Chileno” (tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2002, **pp. 248 y siguientes**), las características comunes a todas las formas de encubrimiento según lo señala el **artículo 17 del Código Penal** son:

1. Intervención posterior a la ejecución del crimen o simple delito.
2. Subsidiariedad.
3. Conocimiento de la perpetración del hecho o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo.

4. Actuación en alguna de las formas determinadas que señala la disposición (en este caso vigente a la época de los hechos si ello fuera pertinente).

F.1. Intervención posterior. La característica del encubridor es que despliega su actividad con posterioridad a la ejecución del crimen o simple delito, esto es, la intervención necesariamente debe producirse después que el (los) autor(es) ha(n) ejecutado la conducta típica. Puede decirse que la acción del encubridor no influye sobre el curso causal desencadenado por el(los) autor(es) salvo que exista un concierto previo, caso en el cual como se ha razonado la calificación jurídica sería distinta.

F.2. Subsidiariedad. El encubrimiento es subsidiario tanto de la autoría como de la complicidad. Ello pues el propio artículo 17 del Código Penal contiene una cláusula de subsidiariedad en cuanto el encubridor solo puede ser considerado si no ha tenido participación en el crimen o simple delito ni como autor (o instigador) ni como cómplice.

F.3. Conocimiento de la perpetración del hecho. En esta materia el encubridor debe obrar con conocimiento de la perpetración crimen o simple delito o de los actos ejecutados para llevarla a cabo. Para **Cury** la exigencia solo es válida para las formas de encubrimiento contempladas en los tres primeros

numerandos del artículo 17, pues en cuanto la ley prescinde expresamente de ella y se contenta en que el sujeto sepa que está protegiendo o auxiliando a malhechores. Como ha indicado unánimemente la doctrina se excluye la punibilidad de quien encubre una falta. Se estima tanto por **Etcheberry** como por **Cury** que la representación del encubridor tiene que abarcar todas las circunstancias que son relevantes para la tipicidad del hecho. Basta, en todo caso, con un dolo eventual. El conocimiento tiene que referirse a la ejecución de la conducta típica. El momento en que debe existir el conocimiento de la perpetración del crimen o simple delito debe ser en el momento en que se realiza la conducta descrita como encubrimiento por la ley.

En esta materia, además de todos los fallos que han sido confirmados tanto por la Corte de Apelaciones de Temuco, como por la Excm. Corte Suprema sobre el encubrimiento, hay que reflexionar, porque si no el derecho penal liberal sin duda queda truncado, sobre un aspecto importante en la conducta de los seres humanos, como son los **actos de habla**. En esta causa nos estamos refiriendo a hechos concretos, no a abstracciones. Por ello en este sentido, **Austin** explica que cuando escuchamos hay tres niveles de acción. Primero, el nivel de lo que se dijo y como se dijo, ejemplo estaré ocupado mañana. Segundo, escuchamos el nivel de la acción involucrada (qué intención tuve) en lo que se dijo, (afirmación, declaración, petición, oferta). Tercero, escuchamos el nivel de las acciones que nuestro hablar produce (efectos que produjo). En esa idea, **Versacce** nos precisará que cuando una persona dice una frase, ejemplo en el árbol hay peras, tienen las siguientes consecuencias: en un primer nivel produzco sonidos; en un segundo nivel me estoy refiriendo a cosas, personas o acontecimiento que tienen lugar en el mundo vivo; en un tercer nivel estoy comunicando una estructura

lingüística muy precisa que requiere que un sujeto se combine con un verbo según orden precisa. Y cuarto nivel, expresa un pensamiento. (M. L. (2018): “El lenguaje de los fallos de los jueces de Policía Local en Chile”. en Derecho y Lenguaje. Universidad Mayor, pp. 15-43). En la segunda etapa de su investigación, **Austin** propone que hablar es hacer cosas y define el acto de habla como la realización de tres tipos de actos: **1)** acto locucionario, que comprende los actos fonético (emisión de ciertos ruidos), fático (emisión de ciertas palabras y términos) y rético (uso de esos términos con un cierto sentido y referencia). **2)** acto ilocucionario, que asocia lo dicho con cierta fuerza convencional o fuerza ilocucionaria (ej. preguntar o responder a una pregunta, dar información o seguridad, advertir, anunciar un veredicto o un propósito). Y **3)** acto perlocucionario, acto conseguido por decir algo. (Álvarez, Guadalupe “Efectos ilocucionario y perlocucionario en la teoría de los actos de habla y en sus posteriores reformulaciones”. 2008. Disponible en http://onomazein.letras.uc.cl/Articulos/17/2_Alvarez.pdf.)

F.4. Actuación en alguna de las formas previstas. Las formas de encubrimiento se clasifican en el **artículo 17 del Código Penal** como: **1.** Aprovechamiento (artículo 17 N°1); y **2.** Favorecimiento (artículo 17 N°2); que se subdivide en: **2.1.** Real (artículo 17 N°2); y **2.2.** Personal; que también se subdivide en **2.2.1.** Ocasional (artículo 17 N°3) y **2.2.2** Habitual (artículo 17 N°4).

F.4.1. En términos simples, el **aprovechamiento (artículo 17 N°1 del Código Penal)** consiste en aprovecharse por sí mismo o facilitar a los delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o simple delito. Aprovechar es obtener una ganancia de naturaleza económica. De lo que se aprovecha son los efectos del crimen o simple delito; su objeto material y los

anexos de este. Por delincuentes se entiende a los autores, instigadores y cómplices.

F.4.2. Favorecimiento real (artículo 17 N°2 del Código Penal). En este caso se refiere: a aquellos sujetos que ocultan o inutilizan el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito, ¿para qué?, para impedir su descubrimiento. Es decir, se habla de favorecimiento real porque la actividad del sujeto se endereza a ocultar el hecho delictivo y no la persona de quienes concurrieron a ejecutarlo. Por cuerpo del delito se entiende el objeto material del mismo o cosa sobre la que recae la actividad típica y su resultado. Por efecto, se refiere a las consecuencias del delito que puedan conducir a su descubrimiento o bien cosas que estén vinculadas con la realización del hecho y sean aptas para llevar a su descubrimiento (pueden ser conservación de rastros o huellas, la pala con que se enterró el cadáver, el mueble donde quedó la huella dactilar, ropa que se manchó con sangre, etc.). Por instrumento del delito debe ser entendido en sentido amplio que no se identifica con los puros recurso materiales. Ahora bien, inutilizar es destruir o alterar de manera que la cosa no sirva para los efectos a que esté destinada o no pueda ser reconocida. Ocultar requiere una conducta activa del encubridor, pero también es posible por omisión si el sujeto se encontraba jurídicamente obligado al descubrimiento (artículo 84 del Código de Procedimiento Penal de 1906 y actual artículo 175 del Código Procesal Penal del año 2000).

F.4.3. Favorecimiento personal (artículo 17 N°3 del Código Penal). Tiene dos formas: **a)** personal ocasional, a que se refiere el artículo 17 N°3, es decir, aquel que alberga, oculta o proporciona la fuga al culpable (hasta antes de la dictación de la Ley 19.077 esta forma de favorecimiento penal solo era

excepcionalmente punible cuando el encubridor era empleado público que abusaba de sus funciones y cuando el encubierto había cometido ciertos delitos muy graves, estando ello en conocimiento del encubridor o aquel era conocido como delincuente habitual, que es el texto vigente a la época de los hechos). El actual texto hizo punible de manera general esta forma de encubrimiento. Hay que hacer notar que la comisión redactora fue insistente en que en esta forma de encubrimiento, el encubridor tuviera efectivo conocimiento de las circunstancias del delito cometido. **Enrique Cury** plantea que las conductas descritas en la disposición se pueden cometer tanto por acción como mediante omisión, pero en este último caso solo cuando existe para el encubridor una obligación jurídica de obrar, (esto es el artículo 84 del Código de Procedimiento Penal de 1.906 y el artículo 175 del Código Procesal Penal del año 2000). Se debe precisar que albergar significa hospedar al hechor, pero no es necesario que lo reciba en la morada propia; también puede alojárselo en una habitación alquilada con ese objeto o en el lugar en el que se trabaja, etc. Ocultar es una expresión que se emplea en un sentido lato; no solo implica esconder, sino también otras conductas conducentes a impedir la identificación del hechor. No siendo atinente al caso, no es necesario analizar el encubrimiento del artículo 17 N°4, esto es **b)** favorecimiento personal habitual.

F.5. Precisando respecto del favorecimiento analizado, como lo expresa **Waldo del Villar** ("Manual del Derecho Penal", Edeval 1.985, **p. 235**) el abuso de funciones públicas debe entenderse como un desempeño voluntario y consciente de manera totalmente contraria a la correspondiente a las funciones propias del cargo. Hay que hacer notar que en caso del favorecimiento personal lo que se debe probar e imputar objetivamente al favorecedor es el hecho de impedir

o frustrar, aunque sea temporalmente, la acción de la justicia. Asimismo, en la obra "El Derecho Penal en la Jurisprudencia, Sentencias 1.875 - 1.966", Tomo II, de **Alfredo Etcheberry** (p. 57), citando una sentencia de la Excma. Corte Suprema contra Jorge Pereira y otros, *"el hecho consistió en que un funcionario policial omitió anotar en el libro de novedades la comisión de un delito del que tenía conocimiento y que induce a un subordinado a que no dé noticias del caso a un superior que lo interroga en general sobre las novedades del día. Comete dos hechos de importancia subalterna que no podían impedir (como en realidad no impidieron) que se descubriera el delito cometido y, por lo tanto, no sería encubridor según el artículo 17 N°2 del Código Penal"*. Siguiendo este Ministro la línea tanto de **Etcheberry** como de **Eduardo Novoa**, quienes **critican esta sentencia**, puesto que no va al fondo de la institución del encubrimiento ya que la ley no exige que efectivamente el delito no llegue a descubrirse, precisamente si se puede sancionar al encubridor es porque a pesar de su intervención el delito se llega a descubrir. El solo hecho de que en la ley se prevea una sanción supone que el delito se haya descubierto. Por otra parte, sobre esta materia en causas sobre Derechos Humanos, la Excma. Corte Suprema en sentencia de remplazo **rol 5.219-2010**, de fecha 22 de julio de 2011, condenó como encubridor a Sergio Mendoza Rojas por el delito consumado de homicidio calificado perpetrado en la persona de Óscar Farías Urzúa el 20 de septiembre de 1.973, toda vez que tanto Mendoza Rojas como otras personas que trabajaban en el recinto militar no podían ignorar que había personas en calidad de prisioneros a los cuales se les interrogaba y torturaba habida consideración de los acontecimientos desencadenados a contar del 11 de septiembre de 1973 y por ello el Excmo. Tribunal tiene por acreditada la participación en calidad de

encubridor por el artículo 17 N°2 del Código Penal al enjuiciado Sergio Mendoza en el delito de homicidio calificado, toda vez que su actividad estuvo dirigida a ocultar el hecho delito y las consecuencias del mismo que pudieran conducir a su descubrimiento. Siguiendo con lo anterior, en causa **rol 21.408 – 2014** de la Excma. Corte Suprema, de 8 de septiembre de 2014, en su **considerando cuarenta y nueve** expresa: *“Que aunque la sentencia no explicita expresamente cuál de los supuestos de encubrimiento de los cuatro que indica el artículo 17 del Código Penal toda vez que indica infringida toda la norma, es evidente que por el relato dado en el fundamento que se explicitó en el considerando anterior es la hipótesis N°3 de dicha disposición (...)”*. Asimismo, en causa **rol 31.945-2014** de la Excma. Corte Suprema, de 15 de diciembre de 2015, sobre la sentencia recaída en la persona de Robert De La Mahotiere González, piloto del Ejército de Chile, quien trasladó hasta la ciudad de Antofagasta a superiores de esa institución, lugar donde se perpetraron determinados ilícitos. En síntesis, su defensa alega que él se limitó a cumplir una orden de traslado de personal y no puede ser juzgado por encubridor porque no tiene ninguna responsabilidad penal en los hechos y porque, además, el artículo 17 N°3 del Código Penal tenía una redacción distinta a la época de los hechos. A este respecto la Excma. Corte Suprema sostiene que el recurso interpuesto sólo discute la participación, sin razonar de manera explícita el modo en que se habría producido la infracción al artículo 17 N°3 del Código Penal, que corresponde a la figura de encubrimiento aplicada por el fallo, de manera que las impugnaciones no llegaron a plantear, en los términos que exige el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, la infracción que causaría la nulidad solicitada. La Excma.

Corte Suprema en los fallos anteriormente citados, no exige como requisito enunciar el numeral del artículo 17 del Código Penal.

Como puede observarse en este resumen doctrinario y legal de la institución del encubrimiento, ninguno de los acusados calza en las hipótesis, en relación a los hechos sucedidos y la calificación de los tipos penales.

G. Convenios de Ginebra.

Que a mayor abundamiento, además cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra, la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa **rol 2182-98** del ingreso de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, **caso Luis Almonacid Dúmenez** de fecha 29 de octubre de 2013, en su **considerando dieciocho, párrafo 6**, señala que: (...) *"los Convenios de Ginebra consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder "auto exonerarse" a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *ius cogens*". En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: "en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de*

*una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en toda sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido". Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (**Rol N°2664-04**), en cuanto expresa en su **considerando décimo séptimo**: (...) "Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de *Ius Cogens* o Principios Generales de Derecho Internacional".*

17°) ANALISIS DE LAS DEFENSAS: Que haciéndonos cargo de la defensa de fs.1.873 a fs.1.898 (tomo V) del abogado Marco Chesta Quiero, en representación del acusado **Mamerto Tercero Ávila González**. El Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de la declaración indagatoria del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba, en especial lo que se detalló y ponderó con

precisión en el título de consideraciones generales para las defensas. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: No interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento en su escrito de contestación. Tampoco interpuso excepciones de fondo.

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: Que pudiendo hacerlo, esta defensa no presentó tacha de testigos en los términos que exige el **artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal**. Asimismo no objetó ningún documento en particular.

C. Auto acusatorio. Sobre las diferentes objeciones al auto acusatorio, el Tribunal estará al resumen y reflexión que hizo sobre esta materia en las consideraciones generales, ello sin perjuicio de realizar otras ponderaciones a medida que se analiza esta defensa.

D. De la contestación a la acusación: Sobre esta materia sin perjuicio de lo ya aquilatado respecto a los medios de prueba legal incorporados al proceso, el Tribunal razona lo siguiente:

D.1. Para derribar el auto acusatorio como lo expresado reiteradamente este Tribunal, el litigante debe hacerse cargo de toda la prueba ofrecida en el proceso y no un análisis parcial, específico de algunas pruebas, como lo ha hecho esta defensa que se analiza.

D.2. En cuanto al primer argumento, esto es la absolución por falta de participación. La defensa no hace análisis preciso de la prueba que relata. En efecto no constituye ninguna inconsistencia ni debilidad que una víctima en sus primeras declaraciones no pueda dar cuenta de todo lo sucedido. Especial si en los años siguientes a los hechos, se estaba en un régimen político de dictadura

donde se hacía difícil que José Jovin Oporto declarara íntegramente lo sucedido. A lo anterior se suma que esta víctima estuvo al borde la muerte, ya que sufrió una lesión a bala en el pulmón (según se detallara más adelante). En esa misma línea cabe hacer notar que de los antecedentes del proceso la familia de Roberto Huaiqui y José Jovin Oporto vivían para la época en el sector Tringlo, que es un sector rural perteneciente a la comuna de Lago Ranco.

D.2.1. Un punto importante es el hecho que José Jovin Oporto no menciona que un civil, un campesino, un trabajador, participo en estos incidentes, sino que describe que un Carabinero de Riñinahue de apellido Ávila, que luego se fue a la tenencia de Lago Ranco, estuvo involucrado el día que le dispararon además agrega que lo acompañaban otros Carabineros, que no recuerda. Luego de esta forma descartamos la imputación a civiles, ya que desde el principio nombra a un carabinero, que se había trasladado a Lago Ranco.

D.2.2. Respecto a otros antecedentes de la investigación en el sentido, a la participación de la avioneta o disparos de otras personas, estas líneas investigativas no tienen una argumentación sólida y ello es así por las declaraciones del testigo que estuvo en la inspección personal del Tribunal de fecha 19 de julio de 2022 de fs.1.123 a fs.1.125 (tomo III), don Hernán Daniel Leal Oporto. En ella manifiesta elementos importantes para este proceso. Así no solo no había uno o dos carabineros, sino muchos carabineros, lo que es concordante con la declaración de José Jovin Oporto, que los carabineros estaban buscando (a estos extremistas) y estaban cercanos con los demás civiles (civiles de los cuales han fallecido, Quirino Arriagada, Carlos Heitmann, Charles Madge, Blas Alberto Lacoste, entre otros sin identificar) según consta de fs.1.931 a fs.1.940 (tomo VI). Además Hernán Leal Oporto observa a Roberto Huaiqui Barría quien producto de

un disparo, se desvanece y se va por el caudal, en el caso de José Jovin Oporto lo ve como es detenido por el grupo de carabineros y civiles presentes.

De lo que se desprende que la avioneta, aparte de sobrevolar el sector, no jugo ningún papel protagónico en la participación e investigación de estos hechos.

D.3. Respecto a los hechos de José Jovin Oporto Del Río. Si José Jovin Oporto Del Río tuviera dudas o hubiera tenido un motivo u interés, se pudiera haber retractado de sus dichos, cambiado los hechos. Lo cierto es que lo sucedido lo cuanta después a sus compañeros Sergio Segundo Calfulef Traillanca y Luis Rubén Díaz Zumelzu en la cárcel, quienes en sus declaraciones, de Calfulef Traillanca de fs.486 a fs.487 (tomo II) y de fs. 722 a fs.725 (tomo III); y de Díaz Zumelzu de fs.488 a fs.489 (tomo II) y fs.813 a fs.816 (tomo III) respectivamente; coinciden en manifestar que tras coincidir posteriormente en la cárcel de Valdivia con Oporto Del Río, este les relato los hechos acontecidos tal como los describió en su declaración judicial del año 2015 de fs.327 a fs.329 (tomo III).

D.3.1.En el caso de la situación de José Jovin Oporto Del Río, esta persona llega herida a la orilla, donde además es agredido por una serie de personas tras lograr salir del río Nilahue. La lesión descrita en el informe pericial de lesiones de José Jovin Oporto Del Río, de fecha 8 de octubre de 2015 realizado por el Servicio Médico Legal de Valdivia, rolante de fs.367 a fs.371 (tomo II) y su complemento de fs.372 (tomo II), es concordante a una lesión por proyectil balístico, la cual debió sanar en un mínimo de 40 días. A diferencia de lo que expone la defensa, sino hubiera recibido auxilio, debido a la lesión y apremios que recibió, hubiese muerto en el sector del río Nilahue. Lo que es acreditado por el tiempo de recuperación en el hospital de Río Bueno que relató la víctima en el informe antes citado y su declaración judicial ya citada.

D.4. Absolución por falta de tipicidad en la acción del acusado, sobre este punto el tribunal estará a lo razonado anteriormente, en especial de lo expuesto por la propia defensa al citar las declaraciones de Hernán Daniel Leal Oporto, quien declaró de fs.553 a fs.554 (tomo II) y de fs.603 a fs.605 (tomo III). Es concordante en los hechos y en reiterar que carabinero Cereceda del retén de Llifén (según consta a fs.497, tomo II), les señala que si ven persona extraña, pueden disparar a matar. Igual instrucción señaló Julián Ávila Riveros en sus declaraciones de fs.551 a fs.552 (tomo II) y de fs.645 a fs.646 (tomo III). Los hechos descritos en el auto acusatorio y establecidos en este fallo, dan cuenta por lo sucedido de la actuación de Carabineros y civiles, la intención no era detener a los supuestos extremistas, sino ejecutarlos, sino tanto es así que se ejecutó a Roberto Eder Huaiqui Barría ese día y por un hecho extraordinario José Jovin Oporto Del Río llegó a la orilla del río Nilahue y por ser llevado a un centro asistencial, se salvó.

D.4.1. Según lo que se dijo en las consideraciones generales, el acusado Mamerto Ávila Gonzalez no puede ser considerado encubridor, puesto que su conducta no se encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 17 del Código Penal, ya que se encontraba en el lugar de los hechos. Que con un mejor estudio y relacionándolo con el análisis de la complicidad que se ponderó precedentemente en las consideraciones generales, según los hechos descritos en el auto acusatorio y establecidos en este fallo, la actuación de Mamerto Ávila Gonzalez engarza mejor con la complicidad toda vez que el colabora y coopera durante el suceso en la ejecución de estos hechos por actos anteriores o simultáneos. Ya que fue parte del grupo de Carabineros que estuvo en el sector del río Nilahue donde se produjeron los acontecimientos.

D.5. Absolución por no estar acreditado el delito de homicidio calificado. Este Tribunal en reiterados fallos, ha explicado respecto a la **alevosía** hay que hacer un distingo en teoría penal, ya que una cosa es lo que son las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal autónomas, las cuales se clasifican en personales, materiales y mixtas que pueden influir en la determinación de la pena y otra cosa muy distinta es cuando la agravante es parte del tipo penal. Haciendo notar, además, que la alevosía corresponde a aquellas circunstancias calificadas como mixtas, en cuanto por un lado participa de lo material, esto es, la ejecución misma del delito o en los medios empleados, pero también contienen una condición de ánimo o bien condiciones o actitudes del sujeto activo.

D.5.1. Dicho lo anterior, en el artículo 64 del Código Penal, a propósito de la comunicabilidad, es necesario reflexionar que cuando la circunstancia agravante es parte del tipo penal – como es el caso en estudio- dichas circunstancias ya no son agravantes, sino como se explicó anteriormente, son parte de la figura penal, siendo el delito único para los diversos partícipes. En consecuencia, la circunstancia debe afectar a todos, distinguiendo la doctrina entre circunstancias y elementos. Al incorporarse las agravantes a la descripción típica, estas se transforman en elementos del delito.

D.5.2. Según el profesor **Mario Garrido Montt** (en su obra El delito de Homicidio y sus figuras penales, ediciones Encina limitada, Santiago, 1976, **p. 154 y ss.**), es claro que actuar a traición corresponde a la maquinación tendiente a engañar o aparentar ante la víctima una situación diversa a la verdadera, pues la cautela importa reserva, astucia o maña para engañar. Asimismo, importa aprovecharse de la confianza o lealtad que la víctima ha depositado en el

victimario. Es decir, corresponde a simulación, doblez. Por otro lado, obrar sobreseguro, que es la figura que concurre en esta causa, significa crear o aprovechar condiciones fácticas que permiten al agente evitar todo riesgo de su persona, como en cuanto a la realización del acto al momento de la comisión del hecho. Ahora bien, es preciso indicar que en el actuar sobreseguro, puede ser que la situación de seguridad sea absolutamente indiferente para el hechor o deberse a mera casualidad, sin que las condiciones en que obre el hechor – haya o no sido provocadas por él – sean determinantes de la perpetración del homicidio, de modo que, si no hubieran concurrido, el autor a su vez se hubiera abstenido de obrar.

D.5.3. Con un mejor estudio de los antecedentes, sin perjuicio de lo razonado precedentemente; del examen de los hechos establecidos en el auto acusatorio y este fallo, la dinámica de lo sucedido corresponde a un homicidio simple. Toda vez que los hechos sucedieron de manera rápida, sin reflexión previa.

D.6. En cuanto a que el hecho no constituye delito de Lesa Humanidad. Lo primero que cabe descartar de los argumentos de la defensa, es la aplicación de la **ley 20.357** que tipifica crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y crímenes y delitos de guerra; que este Tribunal no la menciona y no es fundamento para el auto acusatorio ni para el establecimiento de los hechos. Ello por una simple razón, toda vez que esta ley, en su **artículo 44** mandata que: *“Los hechos de que trata esta ley, cometidos con anterioridad a su promulgación, continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento. En consecuencia, las disposiciones de la presente ley sólo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia”*. Por tanto toda alusión a ella no pueda aplicarse en esta causa. Como se explicó latamente, la normativa,

interpretación y el Derecho que se aplica es la jurisprudencia de la Corte IDH y de la Excma. Corte Suprema.

D.6.1. En esa línea cabe hacer notar que tanto Roberto Eder Huaiqui Barría, su padre Emilio Barría Calfulef y José Jovin Oporto eran militantes del Partido Socialista. Además la casa de Roberto Huaiqui Barría fue allanada varias veces por Carabineros buscando armas. El padre (quien era dirigente campesino del sector) y uno de sus hermanos, fueron detenidos por los mismos Carabineros, posteriormente al homicidio de Roberto Eder Huaiqui Barría.

D.6.2. En ese sentido no se trata de un delito y procedimiento común, aquí se persigue y se ejecuta a personas “extremistas” por su afiliación a una ideología política y porque no estaban de acuerdo al régimen militar. Todo lo cual es coherente con la sentencia del caso Almonacid Arellano y otros v/s Chile de la Corte IDH, del contexto que se vivía en septiembre 1973, sino además de todos los fallos citados por este Tribunal y los dichos del otro acusado, Carlos Galindo Ruiz de fs.456 a fs.458 (tomo II) y demás declaraciones suyas en el proceso.

D.7. Reflexión final sobre los argumentos de la defensa. Cabe puntualizar que según el mérito del proceso y las pruebas aportadas y valoradas por este Tribunal, que ninguno de los acusados dio alguna instrucción en conformidad a su función como Carabineros de Chile; en cuanto a las personas a su alrededor no utilizaran las armas que portaban, no dispararan a matar y que la coordinación la efectuarían ellos desde ese momento. Nada de eso aconteció, produciéndose así los hechos descritos en este fallo. Del mismo modo cabe puntualizar que los dichos de José Jovin Oporto respecto del carabinero Ávila fueron expresados en el año 1973, una vez que estuvo en la cárcel y los reprodujo a sus amigos Sergio Calfulef Traillanca y Luis Rubén Díaz Zumelzu. Dichos que

señalan a un carabinero Ávila de Riñinahue, como se desprende de sus dichos, no es un tercero civil.

D.8. Recalificación. El Tribunal estará a lo razonado precedentemente, todo vez que se recalificado la participación del acusado Mamerto Tercero Ávila González en calidad de cómplice, toda vez que basta la idea que el auxilio facilite o haga más expedita la ejecución. Incluso el simple auxilio intelectual o moral es suficiente. Hipótesis que se da perfectamente en estos hechos.

F. Prueba del Plenario: Analizado el expediente y el término probatorio. Esta defensa aparte de lo ya valorado, no solicitó ni acompañó medios de prueba.

H. Calificación final: Como se aquilato precedentemente, se recalifica la calificación jurídica, por tanto le corresponde a **Mamerto Tercero Ávila González** la calidad de **cómplice** en los términos del artículo 16 del Código Penal, en los delitos de **homicidio simple consumado**, en su carácter de Lesa Humanidad en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría y de **homicidio simple frustrado**, en su carácter de Lesa Humanidad en la persona de José Jovin Oporto Del Río.

G. En cuanto a las eximentes, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios ley 18.216: El tribunal lo razonará en los considerandos posteriores.

18°) Que haciéndonos **cargo de la defensa** de fs.1.790 a fs.1.798 (tomo V) del abogado Carlos Ernesto Jiménez Jiménez, en representación del acusado **Carlos Emilio Galindo Ruiz**. El Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de la declaración indagatoria del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba, en especial lo que se detalló y ponderó con precisión en el título de consideraciones generales para las defensas. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: Esta defensa interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento, que fueron rechazadas de fs.1.840 a fs.1.843 (tomo VI). **No reiterándolas** como excepciones de fondo, según se aprecia en la petición concreta de su primer otrosí.

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: Que pudiendo hacerlo, esta defensa no presentó tacha de testigos en los términos que exige el **artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal**. Asimismo no objetó ningún documento en particular.

C. Auto acusatorio. Sobre las diferentes objeciones al auto acusatorio, el Tribunal estará al resumen y reflexión que hizo sobre esta materia en las consideraciones generales, ello sin perjuicio de realizar otras ponderaciones a medida que se analiza esta defensa.

D. De la contestación a la acusación: Sobre esta materia sin perjuicio de lo ya aquilatado respecto a los medios de prueba legal incorporados al proceso, el Tribunal razona lo siguiente:

D.1. En cuanto a la absolución solicitada. El tribunal sobre esta materia razonara lo siguiente:

D.1.1. Como ya se ha realizado en esta sentencia al establecer los hechos y de la misma forma en el resumen del auto acusatorio, es el propio acusado Carlos Emilio Galindo Ruiz quien se ubica al momento de los hechos ocurridos en el río Nilahue, lugar donde fue ejecutado Roberto Eder Huaiqui Barría y hubo un intento de homicidio frustrado en la persona de José Jovin Oporto Del Río.

D.1.2. De la declaración judicial de José Jovin Oporto Del Río de fs. 327 a 329 (tomo II), donde describe la dinámica de los hechos acontecidos desde su intento de viaje a Argentina hasta que es detenido y trasladado hasta el hospital

de Río Bueno; es conteste en sindicar como participantes en sus lesiones y de los disparos realizados en el lugar, que conjuntamente le causaron la muerte a Roberto Huaiqui Barría; al grupo de Carabineros y civiles presentes en el sitio del suceso, quienes al ver a Oporto Del Río llegar a la orilla del río Nilahue, siguen agrediéndolo hasta que es llevado en calidad de detenido a la Tenencia de Lago Ranco, donde por la gravedad de sus lesiones, debe ser trasladado al hospital de Río Bueno, donde no dejó de ser custodiado por personal policial y tras ser dado de alta, fue ingresado a la cárcel de Isla Teja en Valdivia.

D.1.3. Que un antecedente probatorio importante es la inspección personal del Tribunal de fs.1.123 a fs.1.125 (tomo III) de fecha 19 de julio de 2022; donde se constata lo sucedido en las inmediaciones del río Nilahue y prestó declaración el testigo presencial Hernán Daniel Oporto Leal, citado a la inspección; junto a sus otras declaraciones en el proceso de fs.553 a fs.554 (tomo II) y de fs.603 a fs.605 (tomo III). Tanto Roberto Huaiqui como José Jovin Oporto ingresaron al río Nilahue y en contra de ellos se produjeron disparos, tanto es así que José Jovin Oporto Del Río resulto herido a bala en un pulmón, como consta en informe pericial de lesiones de fs.368 a fs.373 (tomo II) y como pudo llegar a la orilla. En el caso de Roberto Eder Huaiqui Barría, también es efectivo que su contra se efectuó por los presentes, disparos con armas de fuego, que finalmente le causaron la muerte.

D.1.4. En toda dinámica anteriormente descrita, intervino Carabineros de Chile, en este caso colaboraron y cooperaron; su intención, como se desprende de los hechos, no era aprehender ni detener, sino era matar a los supuestos responsables. Además se desconoce el motivo en Derecho porque se les debía detener, si tanto Roberto Eder Huaiqui Barría y José Jovin Oporto Del Río, no

habían con anterioridad cometido ninguna infracción penal, la persecución era prejuiciosa, por ser presuntos “extremistas”. En ese momento todos los que allí estaban actuaban al margen de la ley. Las consecuencias hablan por sí mismas, Roberto Eder Huaiqui Barría fue ejecutado y en el caso de José Jovin Oporto Del Río, solo con el auxilio médico pudo salvarse, ya si se hubiese quedado en la orilla del río Nilahue, lo más probable es que hubiese fallecido también.

D.1.5. Con la misma argumentación que se hizo para la defensa de Mamerto Tercero Ávila González, los presuntos disparos de la avioneta no es un factor determinante para el esclarecimiento de los hechos. Toda vez que en la práctica, los disparos que permitieron ejecutar a Roberto Eder Huaiqui Barría, herir en el pulmón y casi causarle la muerte a José Jovin Oporto Del Río, vinieron de las personas que se encontraban a la orilla del río Nilahue ese día, según lo aquilatado en el proceso y este fallo. Es el propio acusado Galindo Ruiz, que en sus propias declaraciones afirmó que “él no observó que de la avioneta hubiesen disparado hacia las víctimas de estos autos”.

D.2. En cuanto a la calificación. Se estará a lo razonado respecto de la defensa de Mamerto Tercero Ávila González, en el sentido que con un mejor estudio de los antecedentes, lo descrito en auto acusatorio y los hechos descritos en esta sentencia, la participación que le corresponde a Carlos Emilio Galindo Ruiz es de cómplice, toda vez que ha colaborado y cooperado por hechos anteriores y simultáneos, en la muerte de Roberto Eder Huaiqui Barría y en el homicidio frustrado de José Jovin Oporto Del Río.

D.3. Respecto al tipo penal. En relación a la dinámica de los hechos y lo razonado respecto a la alevosía en la defensa de Mamerto Tercero Ávila González, el tipo penal debe quedar en homicidio simple en la persona de Roberto

Eder Huaiqui Barría y homicidio simple frustrado en la persona de José Jovin Oporto Del Río.

F. Prueba del Plenario: Analizado el expediente y el término probatorio. Esta defensa aparte de lo ya valorado, no solicitó ni acompañó medios de prueba.

H. Calificación final: Como se aquilato precedentemente, se recalifica la calificación jurídica, por tanto le corresponde a **Carlos Emilio Galindo Ruiz** la calidad de **cómplice** en los términos del artículo 16 del Código Penal, en los delitos de **homicidio simple consumado**, en su carácter de Lesa Humanidad en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría y de **homicidio simple frustrado**, en su carácter de Lesa Humanidad en la persona de José Jovin Oporto Del Río. Toda vez que basta la idea que el auxilio facilite o haga más expedita la ejecución. Incluso el simple auxilio intelectual o moral es suficiente. Hipótesis que se da perfectamente en estos hechos.

G. En cuanto a las eximentes, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios ley 18.216: El tribunal lo razonará en los considerandos posteriores.

ACUSACION PARTICULAR

19°) La abogada **Catalina Ross Fredes** en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del ramo, del Ministerio de Justicia, de fs. 1.584 a fs. 1.587 (tomo V), formuló acusación particular en **contra de Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz**. Específicamente en cuanto a los hechos criminales establecidos que afectaron a la víctima de auto, esa parte da por reproducidos y comparte en su integridad, los hechos señalados en su considerando trigésimo segundo, de la acusación de oficio. Considerando lo anterior, los hechos que se tienen por establecidos, la

calificación jurídica del ilícito y la participación de los acusado como autores en el delito de homicidio calificado en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría, en su carácter de lesa humanidad, se encuadran en el tipo penal contenido en el artículo 391 N°1 circunstancia primera del Código Penal, vigente a la época de los hecho y solicita considerar la concurrencia de la circunstancia agravante con los hechos investigados en autos, a saber, la **circunstancia 8° del artículo 12 del Código Penal**, respecto a la responsabilidad que le cabe en la comisión del ilícito a los acusados Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz, toda vez que, a juicio de esta parte se desprende de lo obrado en autos que quien llevó adelante la comisión de estos hechos ostentaban la calidad de funcionario público, como integrante de Carabineros de Chile. Desarrolla la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal. Con todo, y a objeto de determinar el quantum de la pena privativa de libertad a imponer a los acusado de autos, Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz, considerando en particular los siguientes factores: **a)** El tipo penal de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal de la época; **b)** El delito se encuentra consumado, de acuerdo al artículo 7 del Código Penal en relación con el artículo 391 N°1 del Código Penal; **c)** Los acusados ha intervenido en el hecho criminal como autores del mismo, en conformidad al artículo 17 del Código Penal, en relación al artículo 391 N°1 del mismo cuerpo legal, normas legales que deben vincularse con el artículo 50 del Ordenamiento Penal Nacional; **d)** La concurrencia de una circunstancia agravante de responsabilidad penal, cual es, la prevista en el artículo 12 N° 8 del Código Penal; **e)** Por último, considerando lo dispuesto por el ordenamiento jurídico en el artículo 69 del Código Penal, considerando la extensión del mal causado a la víctima y a los familiares de las mismas,

ocasionado el daño por las circunstancias en que fue cometido el crimen descrito, cuya naturaleza de lesa humanidad es unánime, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional e internacional, amén del contexto en que se produjeron los ilícitos denunciados. En consecuencia, atendido lo señalado en los puntos anteriores en mérito de lo expuesto, solicito la aplicación de la pena 20 años de presidio mayor en su grado máximo.

20°) ANÁLISIS DE LA ACUSACION PARTICULAR: Haciéndonos cargo de la acusación particular, el Tribunal razona lo siguiente: Como se desprende del escrito de fs. 1.584 a fs. 1.587 (tomo V), la abogada Catalina Ross coincide con la acusación fiscal respecto a que se trata de un delito de homicidio calificado en su carácter de lesa humanidad y que le corresponde la calidad de autores a los acusados Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz. **La diferencia que hay con la acusación fiscal es que presenta alegaciones para que se acoja la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal y no se consideren atenuantes.** Esta materia será analizada en los considerandos posteriores. Todo lo anterior sin perjuicio de las calificaciones finales sobre la participación de los acusados y el tipo penal que se ha hecho en esta sentencia.

ADHESIÓN A LA ACUSACIÓN

21°) La abogada **Rose Marie Vásquez Garrido** en representación de la parte querellante y demandante civil de fs. 1.566 a fs.1.582 (tomo V), se adhirió a la acusación fiscal. En lo principal de su presentación, se adhiere a la acusación fiscal de fs.1.467 a fs.1.504 (tomo IV), adhiriéndose en todas sus partes a la acusación fiscal, en contra de los procesados Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz, y en definitiva condenarlos como autores materiales

del delito de homicidio calificado en su carácter de lesa humanidad, que termino con la vida de Roberto Eder Huaiqui Barría.

22°) EN CUANTO A LA ADHESIÓN. Habiéndose entonces adherida esta parte querellante a la acusación fiscal de fs. 1.467 a fs.1.504 (tomo IV), el Tribunal no tiene nada que razonar sobre esta materia. Todo lo anterior sin perjuicio de las calificaciones finales sobre la participación de los acusados y el tipo penal que se ha hecho en esta sentencia.

REFLEXIONES SOBRE LESA HUMANIDAD

23°) Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la **sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 26 de septiembre de 2006; en virtud de los párrafos pertinentes, se puntualiza lo siguiente:

Párrafo 94. *“El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia, el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía”.*

Párrafo 95. *“El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control N°10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad*

en su artículo 11.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946”.

Párrafo 96. *“Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado”.*

Párrafo 98. *“La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal”.*

24°) Cabe también hacer presente, que el mismo fallo **Almonacid Arellano y otros v/s Chile** dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de

fecha 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 119**, al analizar el **Decreto Ley de Amnistía N° 2.191** y en lo pertinente manifiesta que: (...) *“las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”*.

Que a mayor ilustración, este Tribunal reiteradamente se ha pronunciado en las siguientes causas sobre el delito de lesa humanidad, a saber: 27.525; 27.526; 45.345; 113.990; 113.989; 18.780; 29.877; 45.344; 45.371; 45.342; 29.869; 27.527; 114.001; 113.986; 63.541; 45.363; 114.048; 10.868-P; 114.003; 10.851; 10.854; 45.359; 54.035; 63.535; 45.343; 57.071; 113.997; 45.354; 45.361; 114.000; 4-2010; 45.362; 114.007; 114.042; 113.996; 29.879; 45.365; 45.367; 44.305 y otras.

25°) Sobre la misma materia del delito de Lesa Humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, “Almonacid Arellano y otros versus Chile”, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia

caso “**Barrios Altos v/s Perú**” de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “**Almonacid Arellano y otros v/s Chile**” afirma lo anterior en los siguientes **párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119**, donde la Corte IDH expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile.

26°) En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excma. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte IDH en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.5. *“La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. “Esta misma Comisión*

señaló que *“más del 94% de las personas que sufrieron prisión política”* dijeron haber sido torturadas por agentes estatales”.

82.6. *“Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta conflictiva de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc. Las ejecuciones de estas personas se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.”*

82.7. *“En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso-, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.*

27°) En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de

noviembre de 2021, en **caso Maidanik y otros v/s Uruguay**, mediante la cual declaró la (...) *“responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares”, desatándose los siguientes párrafos:*

Párrafo 206: *“En relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean imprescriptibles, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...*

Párrafo 211: *“El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.*

Párrafo 246: *“La Corte recuerda que, al decidir sobre el caso Gelman Vs. Uruguay determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.*

Párrafo 251: *“Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte IDH, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las*

instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte IDH”.

28°) En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

- I.** La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.
- II.** La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.
- III.** La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.
- IV.** La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.
- V.** La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción,

tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.

- VI. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.
- VII. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

29°) Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte IDH en **relación a la jurisdicción militar, párrafo 131**; donde la Corte indica que: *“El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. Se hace presente que en ese proceso no consta además, que la Justicia Militar hubiere siquiera iniciado alguna investigación sobre estos hechos, lo que revela la actitud del Estado de mantener la impunidad sobre el delito investigado en esta causa”.*

30°) Cabe puntualizar que en el caso de **“Hilario Barrios Varas” (causa rol 25.657-2014, fallo de 11 de mayo de 2015, Excma. Corte Suprema)**, en sus **considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno** se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema; esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiper seguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a **un delito de lesa humanidad, delitos que son imprescriptibles**.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL

31°) ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL:

A. QUE EN RELACIÓN A LA MINORANTE DEL ARTÍCULO 11 N°6 DEL CÓDIGO PENAL. A lo solicitado de fs. 1.722 a fs.1.760 (tomo V) por el abogado Marco Chesta Quiero, en representación del acusado **Mamerto Tercero Ávila González**. Y a lo solicitado de fs.1.790 a fs.1.798 (Tomo V) por el abogado Carlos Ernesto Jiménez Jiménez, en representación del acusado **Carlos Emilio Galindo Ruiz**. El Tribunal reflexiona lo siguiente:

A.1. Que analizando la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, tanto a solicitud de las defensas antes indicadas: **Se da lugar a esta minorante, en calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación**. Ya que a ambos acusados le favorece esta minorante, toda vez que de su extracto de filiación y antecedentes citados precedentemente al inicio de

este fallo, se puede observar que tanto **Mamerto Tercero Ávila González** como **Carlos Emilio Galindo Ruiz**, no tenían antecedentes penales pretéritos, todo a la época de los hechos, esto es entre el 15 y 17 de septiembre de 1973. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia.

A.2. En relación a la alegación de la querellante, la abogada Catalina Ross Fredes, en cuanto no es posible aplicar la minorante estudiada para los acusados **Mamerto Tercero Ávila González** y **Carlos Emilio Galindo Ruiz**, no es posible atender a su petición ya que la práctica jurisprudencial de más de cien años, siempre considera en beneficio de los acusados esta atenuante, si a la época de los hechos en sus extractos de filiación no tenían anotaciones penales pretéritas.

B. EN RELACIÓN A LA MINORANTE DEL ARTÍCULO 11 N° 9 DEL CÓDIGO PENAL. Que respecto a la solicitud del abogado Carlos Ernesto Jiménez Jiménez de fs.1.790 a fs.1.798 (Tomo V), en representación del acusado **Carlos Emilio Galindo Ruiz**, no se dará lugar a la atenuante solicitada por la defensa del artículo 11 N°9 que establece: *“Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos”*. Como se ha razonado precedentemente en la ponderación y relación integral de toda la prueba del proceso no es posible sostener que el acusado Galindo Ruiz haya colaborado sustancialmente a los esclarecimientos de los hechos, en realidad ha sido todo lo contrario, han pasado más de 50 años, gracias al conjunto de otros elementos probatorios, no con los

dichos del procesado, se ha logrado determinar los hechos. Además se hace presente que el concurrir a estrados y a las citaciones judiciales, es una obligación y carga que tienen todos los ciudadanos. **En consecuencia no se hace lugar a la atenuante solicitada por el acusado Carlos Emilio Galindo Ruiz.**

32°) C. INSTITUCIÓN DE LA MEDIA PRESCRIPCIÓN O PRESCRIPCIÓN GRADUAL. En relación al artículo 103 del Código Penal, el Tribunal reflexiona lo siguiente:

C.1. La defensa del acusado **Mamerto Tercero Ávila González** de fs. 1.722 a fs.1.760 (tomo V); fundamenta para la aplicación de este artículo lo siguiente: “Aun cuando es sabido que en los casos de lesa humanidad no procede la aplicación de la institución de la prescripción, en principio no habría impedimento para la concurrencia de esta institución de prescripción gradual, cuyos efectos son distintos, al no producir la extinción de la responsabilidad penal, sino que opera como una verdadera circunstancia atenuante calificada que permite la rebaja de la pena en el caso concreto, en relación al artículo 68 del Código Penal, hasta en tres grados del mínimo. Cita doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señala que, en efecto, respecto de la situación investigada en autos, no hay ninguna duda que ni el Sr. Oporto Del Río ni el Sr. Huaiqui Barría, no tuvieron el carácter de desaparición forzada, no fueron detenidos previamente, o secuestrados, de modo que dicho estatuto no le es aplicable (Convención Interamericana de Desaparición Forzada). Por otra parte, solicita la aplicación de esta norma (artículo 103 Código Penal), considerando también una interpretación basada en una perspectiva del adulto mayor, considerando que Chile también suscribió la Convención Interamericana sobre la

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CDPM), aprobada por la OEA en 2015 y ratificada por Chile en 2017. Es el primer instrumento internacional destinado específicamente a promover, proteger y asegurar el reconocimiento, goce y ejercicio de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los adultos mayores. Así entonces desde este punto de vista, si bien como lo ha explicado SSa. ltma. latamente, ha aplicado el control de convencionalidad para incorporar lo estipulado en Tratados Internacionales y Jurisprudencia Internacional, para la investigación de delitos de Lesa Humanidad, igualmente debe considerar como normativa vigente, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.”

C.2. La defensa del acusado **Carlos Emilio Galindo Ruiz** de fs.1.790 a fs.1.798 (Tomo V); fundamenta para la aplicación de este artículo lo siguiente: “Alega en favor de su representado lo dispuesto en el artículo 103 del Código Penal, circunstancia de atenuación conocida como media prescripción, en orden a que con creces han transcurridos los plazos allí preceptuados”. Cita extracto de sentencia de causa rol 32454-2014 de la Excma. Corte Suprema, (..) en que se aplicó (artículo 103 Código Penal) no obstante considerar al delito de lesa humanidad”.

C.3. En síntesis podemos expresar que sobre esta materia, este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados con anterioridad respecto a la **imprescriptibilidad del delito de Lesa Humanidad**. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener

la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor **Óscar López** (“Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad”, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. **pp. 235 y siguientes**) menciona el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “**Cantoral Huamaní y García Santa Cruz v/s Perú**” de 10 de julio de 2007, que en su **párrafo 190** señala que: *“La Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables”*. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “**Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile**” del mes de julio del año 2014, señaló que: (...) *“le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables”*. Además, en esta materia la Excmá. Corte Suprema, en sentencia en causa **rol 28.581-2016** de fecha 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”) ha manifestado en su **considerando quinto**: (...) *“que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por*

aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie”.

C.4. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excma. Corte Suprema, corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karina Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” **(p.192)** quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye: *“Que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada .“En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de*

los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

C.5. Recientemente la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco en la causa **rol N°359-2019**, de fecha 24 de septiembre de 2019, pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su **considerando tercero** señala: (...) *“finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó.”* En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de **"La Masacre de la Rochela v/s Colombia"**, señaló de manera expresa: (...) *"que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia"* (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, **párrafo N° 191**).

C.6. Del mismo modo, la Excm. **Corte Suprema**, en causa **rol N°8914-2018**, seguida por el delito de homicidio de Pedro Antonio Bahamonde Rogel,

José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la ltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 5 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente:

*“**Noveno:** Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”.*

C.7. Ratificando lo anteriormente expuesto, con fecha reciente la Excm. Corte Suprema en sentencias de las causas **rol N°5780-2023** denominada “Caso Caravana de la muerte episodio La Serena”, de fecha 28 de diciembre de 2023 y **rol N°22.276-2022** denominada “Caso quemados”, de fecha 5 de enero de 2024; ha rechazado la aplicación de la institución de la media prescripción. **En consecuencia, esta institución del artículo 103 del Código Penal, tampoco es aplicable en esta causa y se rechazan las solicitudes de ambas defensas; a**

favor de los acusados Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz.

33°) AGRAVANTE DE RESPONSABILIDAD PENAL:

A. QUE EN RELACIÓN A LA AGRAVANTE DEL ARTÍCULO 12 N°8 DEL CÓDIGO PENAL. No se acogerá por el Tribunal por las siguientes razones: Según la descripción de los hechos de la acusación judicial y los establecidos en este fallo, el conjunto de Carabineros que llegó al lugar fue en principio con el objeto de verificar la situación que denunciaban los civiles que allí residían. En segundo lugar, esto con posterioridad se transformó en una persecución para “presuntos extremistas” en el sector del río Nilahue. Si bien los acusados Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz cooperaron y colaboraron en los hechos ilícitos, no es posible como pretende el querellante aplicar la agravante del 12N°8 del Código Penal, toda vez que sus requisitos según lo establecido por este Tribunal no se cumplen la especie.

DETERMINACIÓN DE LA PENA

34°) En la determinación de la pena se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como esenciales son:

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los **artículos 11 y 12 del Código Penal** y otras normas del ordenamiento jurídico.

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los **artículos 50 y siguientes del Código Penal**.

C. En tercer lugar, tratándose en este caso, de dos delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el **artículo 68 del Código Penal**, y si no es así el **artículo 67** del texto ya citado.

D. En cuarto lugar, tratándose en este caso de **delitos de lesa humanidad** como se explicará con posterioridad, atendida su gravedad y en consideración a la proporcionalidad de las penas, no procede que los encartados, obtengan algún beneficio de la ley 18.216, atendido a los estándares normativos e interpretativos existentes en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse el **artículo 69 del Código Penal**.

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el **artículo 74 del Código Penal** y el **artículo 509 del Código de Procedimiento Penal** (si fuera pertinente). Que de igual forma que se ha razonado debe estarse a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos de la Corte IDH sobre esta materia, en especial el sentenciador tiene que considerar la gravedad de los hechos y la proporcionalidad de la pena, pues se trata de **delitos de lesa humanidad**.

35°) Cabe hacer presente que, en conformidad a la última calificación realizada en este fallo, los delitos corresponden a **homicidio simple consumado y homicidio simple frustrado, ambos en su carácter de Lesa Humanidad**. Cuya pena según el artículo 391 N°2 del Código Penal de la época, corresponde a presidio mayor en sus grados mínimo a medio en cualquier otro caso. Ahora bien, Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz, tienen la calidad de **cómplices** con la última calificación. En ese sentido, como se trata en el caso de cómplices, en virtud de los **artículos 16, 51 y 52 del Código Penal**, de un delito

de homicidio simple consumado y de un delito de homicidio simple frustrado. En el caso de los encartados **Mamerto Ávila Gonzalez y Carlos Galindo Ruiz**, por el delito de homicidio simple consumado en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría, atendido que son cómplices, se aplica la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley, en este caso les corresponde la pena de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias legales. En el caso del homicidio simple frustrado de José Jovin Oporto Del Río, se les impondrá la pena correspondiente inferior en dos grados que señala la ley para el crimen y el simple delito, en este caso presidio menor en su grado medio más las accesorias legales.

36°) Respecto a lo que les resulta más beneficioso por aplicación de los artículos 74 del Código Penal y 509 del Código de Procedimiento Penal.

El Tribunal razona lo siguiente: A ambos encartados Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz; les beneficia el atenuante del artículo 11 N°6, en carácter de simple del Código Penal, sin que les perjudiquen agravantes. Atendido entonces lo dispuesto **artículo 68 del Código Penal**, el Tribunal no puede aplicar la pena en su grado máximo. En consecuencia, si se les aplica el artículo 74 del Código Penal, los dos acusados deberían cumplir por el delito de homicidio simple consumado, la pena de 4 años; y por el delito de homicidio simple frustrado la pena dos años y 150 días. Dando un total de 6 años y 150 días. Si se les aplica el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal con la reiteración de la pena, deberá aumentarse en un grado la pena, quedando en presidio mayor en su grado mínimo. Este Tribunal fijara la pena en **6 años para Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz respectivamente**. Como se razonara con posterioridad, atendida la naturaleza del delito y la extensión de la pena, este Tribunal no considerara beneficios de la Ley

18.216 y leyes posteriores. Por tanto les es más beneficioso por la extensión de la pena, aplicar el artículo 509 ya citado.

BENEFICIOS DE LA LEY 18.216 Y SUS MODIFICACIONES **POSTERIORES**

37°) Atendida las razones que se van a exponer a continuación, no procede ningún beneficio de la ley N°18.216 y posteriores, aplicable a los acusados **Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz**, en virtud de las solicitudes de ambas defensas. Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente los acusados tuvieran una pena inferior, de igual forma no pueden acceder a cumplir las penas en libertad. En efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de Derechos Humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en las **causas: rol 2-2013** ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia; **rol 45.361** ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; **rol 114.051** ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; **rol 45.357** ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; **rol 114.103** ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; **rol 45.367** ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; **rol 114.017** ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; **rol 2-2012** ingreso del Juzgado de Letras de Pucón; **rol 114.034** ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; **rol 10.914-P** del Juzgado del Crimen de Puerto Montt; **rol 113.969** ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; **rol 2-2013** de ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia y **rol 24.428** del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Traiguén.

38°) Además se tienen en consideración, los informes elaborados por el Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile y el Servicio Médico Legal, allegados al proceso del acusado **Mamerto Tercero Ávila González**, que informan al Tribunal lo siguiente:

I. De fs. 1.614 a fs.1.617 (tomo V). Informe del Centro de Reinserción Social de Temuco, que en lo pertinente, concluye: *“se recomienda para el cumplimiento de una condena, a través de la pena sustitutiva de libertad vigilada/ libertad vigilada intensiva, debido al nivel muy bajo de riesgo de reincidencia delictual que presenta (el evaluado)”*.

II. De fs.1.775 a fs.1.780 bis (tomo V). Informe Servicio Médico Legal de Temuco, que en lo pertinente, concluye: *“Es posible determinar que no presenta (el evaluado) enfermedad psiquiátrica ni compromiso cognitivo que le imposibilite participación activa en juicios o procesos judiciales”*.

Además se tiene en consideración, que los informes del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile y Servicio Médico Legal respecto del acusado **Carlos Emilio Galindo Ruiz**, fueron solicitados en el proceso pero no han sido evacuados por los organismos ya señalados. Esto no impide sin embargo, que el Tribunal falle la causa.

39°) Que continuando con el racionamiento anterior, *“podemos indicar un estándar en Derechos Humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la*

interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución, que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales”. (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco, año 2015, **pp. 27 -53**). Agregando este Ministro que a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre determinado estándar normativo.

B. Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de fecha 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: *“La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte IDH, intérprete última de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.*

C. *“Esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en sede contenciosa como consultiva, para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte IDH”. (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Santiago de Chile, Librotecnia, pp.356-357).*

D. Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la **Convención Americana sobre Derechos Humanos en especial los artículos N°1.1 y N°2**. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna opinión consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo y/o interpretativo en materia de Derechos Humanos. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia. Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

E.1. Caso Barrios Altos v/s Perú, de 14 de marzo de 2001, en el **párrafo 41**, expuso que: *“Considera inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”*.

E.2. Caso Almonacid Arellano y otros v/s Chile, de 26 de septiembre de 2006, **párrafos 111 a 114**; la Corte IDH ha señalado: (...) *“Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes”*. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte IDH ha definido como: *“la falta en su*

conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana". Asimismo, la Corte IDH ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado, en el **Caso Barrios Altos v/s Perú** que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en "principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos". Por las consideraciones anteriores, la Corte IDH estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

E.3. Caso la Masacre de la Rochela v/s Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, **párrafo N° 191**, señaló de manera expresa: (...) *“que en la investigación de graves violaciones a los Derechos Humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia”*.

E.4. Caso Cantoral Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz v/s Perú, de 10 de julio de 2007, en su **párrafo 190**, puntualiza: *“La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz.”* En particular, la Corte IDH recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

E.5. Caso Masacre de las Dos Erres v/s Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el **párrafo 129**, señala que ante esta situación: *“la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos*

internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad". "En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...].En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber".

E.6. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha Do Araguaia") v/s Brasil de 24 de noviembre de 2010 en el **párrafo 155**, indica: (...) "adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones." Entre ellas, destaca [...] "el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas

análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares”.

F. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia, ha sostenido este estándar en materia de Derechos Humanos en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los Derechos Humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

G. Sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común), el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley N°18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33** de la ley antes mencionada, permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el **artículo 1 y siguientes** de la citada ley. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe: *“No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional,*

Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

H. En esa idea de razonamiento, si bien la **Ley N°18.216**, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores consumados de determinados delitos, en este caso de homicidio simple consumado y homicidio simple frustrado. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira-, (...) *“debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos N°1, N°2 y N°29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además los artículos N°26, N°31.1 y N°27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969”.* (Nogueira, Humberto (2014): “Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, Santiago de Chile, Librotecnia, **pp. 395-420**).

40°) En consecuencia, aplicando el **control de convencionalidad**, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio). No es posible (además de lo antes razonado y de los estándares normativos) otorgarles algún beneficio a los acusados Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz en esta causa y así se dirá en lo resolutivo.

“De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales”. (Núñez, Constanza (2017): “El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además ratificado por la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 4 de marzo de 2020, en causa **rol N°1.052-2019** (en relación a causa rol 113.999 de este Tribunal); en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que

hubieran participado en graves violaciones a Derechos Humanos (Lesía Humanidad). **En consecuencia, no es posible otorgarle a los acusados Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz ningún beneficio de la ley N° 18.216 y sus modificaciones posteriores; y deberán cumplir las penas efectivas impuestas a cada uno, como se dirá en lo resolutivo.**

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

41°) De fs. 1.566 a fs.1.582 (tomo V), en el primer otrosí de su presentación la abogada Rose Marie Vásquez Garrido, **en representación de Dina Uria Huaiqui Barría, Ismael Baruck Huaiqui Barría, Eliel Enrique Huaiqui Barría y José Leonardo Huaiqui Barría**, interpone **demanda de indemnización de perjuicios en contra del FISCO de Chile**, representado por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, solicitando tener por interpuesta dicha demanda y en definitiva condenar a la demandada a pagar la suma total de **\$800.000.000.- (ochocientos millones de pesos)**; (200.000.000.- doscientos millones de pesos para cada uno de sus cuatro representados) o la suma que U.S determine en justicia y prudencia, más intereses y reajustes desde que la sentencia se encuentre firme con costas del juicio. En subsidio, para el improbable evento que en lo penal se decidiera absolver a uno o ambos acusados, sobre la base de la ponderación de la intervención delictiva, o se sobreseyese la causa por acaecer la muerte de uno o ambos acusados u otra que no tenga que ver con la falta de demostración del hecho material punible, pide se haga lugar a la demanda en los mismos términos pedidos para lo principal, en fundamentos de derecho petitorio, en tanto está probado en autos la muerte de Roberto Eder Huaiqui Barría, tras un

operativo ordenado, coordinado y ejecutado por agentes del Estado en el marco de la represión política llevada adelante en la fecha y lugar que explica la demanda, todo lo anterior con expresa condena en costas. En lo pertinente, su presentación se estructura de la siguiente manera:

A. Los hechos. Reproduce los hechos consignados en la acusación fiscal de fs. 1.467 a fs.1.504 (tomo IV) y de este fallo. Agrega que los Carabineros mencionados, Ávila González y Galindo Ruiz, además de todo lo antes expuesto, no denunciaron ni informaron a la superioridad de Carabineros ni a otra autoridad del hecho, tampoco consta que se haya efectuado una investigación o hubieren dado lugar a la existencia de un registro como consecuencia de la comisión de este hecho.

B. El homicidio calificado de Roberto Eder Huaiqui Barría es un delito de lesa humanidad. Los hechos probados establecen este estatus de delito por causa de persecución política. Los acusados, agentes del Estado en ejercicio de sus funciones, formaron parte de un grupo que emboscó a la víctima Huaiqui Barría por razones de persecución política, en el hecho, los informes reportados por los superiores daban cuenta de un grupo de guerrilleros presentes en la zona, llevando adelante acciones subversivas. Este contexto explica que los acusados Ávila y Galindo, formasen parte de un grupo mayor tras la pista de estos presuntos e imaginarios extremistas. Estos policías conocían tanto a la familia de Roberto como a este último.

C. La familia del ofendido por el delito. Las víctimas de autos que demandan resarcimiento civil. Sus representados son algunos de los hermanos del fallecido Roberto Eder Huaiqui Barría. En total incluyendo a Roberto, la familia

estaba integrada por los padres y 8 hijos. A la fecha de esta demanda junto a los padres, tres de estos hermanos se encuentran fallecidos. Los sobrevivientes corresponden a sus representados, los actores civiles. La familia de Roberto Huaiqui Barría pide justicia a SS y demandan el resarcimiento del daño moral, porque la muerte de su hermano fue crimen cobarde y explicado en odio político.

D. El detrimento moral sufrido por cada uno de sus representados. El daño sufrido por sus defendidos se explicita en el hecho de soportar la injusta muerte de su hermano, nada menos que de parte de agentes estatales, quienes actuaron bajo circunstancias por completo ajenas a la ley. El dolor y sufrimiento lo padeció cada uno de ellos juntos a sus padres hoy fallecidos, este padecer se ha mantenido hasta el presente, dada la ausencia del debido juzgamiento a los culpables, la que demorado decenas de años, por el rechazo de parte del mismo Estado para hacer frente a los responsables, no sin antes acudir a groseros intentos por consumir la impunidad de este y miles de otros crímenes, bajo la espuria figura legal constituida por la denominada "ley de amnistía" o la prescripción rechazada en innumerables oportunidades en otros procesos análogos al presente. De este modo, la victimización en este caso ha sido por partida triple: **D.1.** El hecho central y medular del asesinato de Roberto Huaiqui: Ejecutado fría y cobardemente, actuando los autores sobre seguro al disparar para matar encontrándose la víctima desarmada. Sus hermanos, sus representados, vivieron en carne y alma el dolor inconmensurable al conocer la fría realidad del homicidio, aumentado por el hecho, igualmente vil, de no permitir recuperar su cuerpo. Ese dolor primario, comprensible en todo ser humano, no ha sido reparado por el Estado. **D.2.** El hecho de que tal homicidio calificado fue obra de Agentes del Estado, en el marco de una situación de facto, en donde, por decisión

de los Jerarcas de hecho de aquel Estado, el dictador Pinochet como cabeza de los golpistas, miembros formales de las Fuerzas Armadas y de Orden sometidas a la Constitución y la ley, formularon explícitas órdenes para quitar la vida a los enemigos del régimen, entre estas, acudiendo a pseudo marcos jurídicos como los tristemente célebres "bandos", propiciando de este modo un cuadro general de auto tutela, traducido en la forma que adopta la misma: la fuerza bruta para imponerse. **D.3.** El notable tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos y la instrucción del presente proceso, incluso el también inmenso espacio verificado desde el inicio de los gobiernos democráticos y el comienzo del presente proceso. Este tiempo, décadas, ha sido el manto de impunidad para los ejecutores materiales pero también fuente de permanente dolor para sus deudos, tanto así que los padres del fallecido murieron en la espera de justicia.

E. El Derecho. Durante los últimos años se ha zanjado esta doctrina, consignando las fuentes de derecho inmediatas para esta responsabilidad, entre ellas la naturaleza de la misma, por cierto el punto relativo a la prescripción de las acciones y civiles y el monto de las indemnizaciones. Sobre estos tres tópicos las respuestas de la ley aplicable, conforme a su tenor e interpretación constitucional, permite sostener: **E.1.** La Responsabilidad del Estado por estos hechos es directa, no por hecho de terceros, de derecho público y sostenida sobre normas supra legales tanto de origen interno como internacional en materia de derechos fundamentales. **E.2.** Las indemnizaciones por concepto de responsabilidad del Estado se estructuran sobre el principio de reparación integral del daño, por una responsabilidad directa, no subsidiaria ni solidaria, en atención a la actuación de sus agentes. **E.3.** Las acciones civiles, en el marco de delitos de lesa humanidad resultan imprescriptibles. **E.4.** En lo procesal, el señor Ministro instructor de la

presente causa es competente para conocer de esta demanda civil. Cita para apoyar su pretensión, normativa de la ley 18575 sobre bases Generales de la Administración del Estado, artículo 10 Código de Procedimiento Penal, normativa de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 27 de la Convención de Viena.

F. Reconocimiento expreso del Estado de Chile de los delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. El 3 de diciembre de 1973, el Estado de Chile, sujeto de derecho internacional, concurrió con su voto a aprobar la Resolución 3.074 de la XXVIII Asamblea General de Naciones Unidas denominada "principios de Cooperación Internacional para la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad. Cita doctrina sentada por la Excm. Corte Suprema respecto a la materia.

G. El monto de la indemnización que se reclama tiene presente los siguientes elementos. **G.1.** La magnitud del hecho: De efectos irreversibles al terminar con la vida de una persona, hijo de padres fallecidos, uno de ellos perseguido, detenido y torturado. Asimismo, hermano de los actores. **G.2.** El tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos versus el próximo fallo a pronunciar en esta causa: casi 50 años. **G.3.** El dolor y padecimiento de la familia que sufrió con la muerte de un hermano en manos de agentes de seguridad. **G.4.** La Corte Suprema lo ha dicho una y otra vez: el daño moral es de corte subjetivo, su asiento está en la propia naturaleza afectiva del ser humano, su demostración en tanto cuantificación no es posible, pero si efectivamente resarcible por la vía de la equivalencia. **G.5.** Los recientes fallos pronunciados por la Corte Suprema que

ha mantenido lijado el *pretium doloris* en causas de lesa humanidad son del siguiente tenor, para caso de hijos de ejecutados políticos: \$120.000.000 según causa rol 39.628-2017 en sentencia de 31 de agosto de 2018, \$80.000.000 según causa rol 45.413-2017 de 05 de junio de 2018 e igual suma en el rol 39.660 -2017 en sentencia de 19 de junio de 2018 y, \$70.000.000 para cada hijo demandante según causa rol 43.113-2017 en sentencia de 03 de octubre de **2018. G.6.** cita extracto sentencia causa rol 14343-2016 de la Excma. Corte Suprema. **G.7.** Monto reclamado para uno de los actores: atendido lo antes expuesto, el mérito de la causa, bajo el criterio determinado por la Excma. Corte Suprema, pido a U.S fijar a título de indemnización por daño moral para cada uno de los cuatro actores, la suma de \$200.000.000, (doscientos millones de pesos), más los reajustes e intereses corrientes desde que la sentencia a dictar quede firme, con costas. Funda su petición a los argumentos anteriormente expuestos, en especial el hecho que desde el homicidio de Roberto Eder Huaiqui Barría a la fecha de la pronta sentencia han transcurrido casi 50 años, por causa exclusiva del Estado Chileno. El Estado a través de sus agentes mató al joven Roberto, el Estado negó justicia por décadas y, por ende, so riesgo de incurrir en el sumo de la injusticia, el Estado está en el imperativo moral y jurídico de indemnizar el inconmensurable dolor de sus deudos.

42°) CONTESTACIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, RESPECTO DE LA ACCIÓN CIVIL. De fs. 1.686 a fs.1.710 (tomo V) contestó la demanda civil deducida por la abogada Rose Marie Vásquez Garrido, el Abogado Procurador Fiscal de Temuco, don Álvaro Sáez Willer, solicitando acoger las excepciones o defensas opuestas: **1. Excepción de improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas. Por preterición legal de los**

demandantes, y por haber sido reparados en la forma que se expresara; y 2. Excepción de prescripción extintiva. Por tanto, junto con no dar lugar a la demanda civil de indemnización de perjuicios en todas sus partes; y en el evento improbable que ella se acogiere, solicito rebajar substancialmente el monto de las sumas demandadas por concepto de indemnización de perjuicios; además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses y su forma de cómputo.

A.1.EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LAS INDEMNIZACIONES DINERARIAS DEMANDADAS. POR PRETERICIÓN LEGAL DE LOS DEMANDANTES, Y POR HABER SIDO REPARADOS EN LA FORMA QUE SE EXPRESARA.

A.1.1.Las indemnizaciones solicitadas en autos se desenvuelven en el marco de infracciones a los derechos humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. En efecto, sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria. Ello, porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas. Esto es así porque no es posible omitir el hecho de que las arcas fiscales -que en definitiva están constituidas por los aportes de todos los chilenos- deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad -las que, por cierto, son imprescindibles- pero así también, lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron los más directamente afectados en los procesos de violación a

los derechos humanos acontecidos en nuestro país. No es extraño, entonces, que muchas de las negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estimen más lejanos; se compensen algunos daños y se excluyan otros; o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño. En esas circunstancias, la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales-con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, por concepto de:

- a) **Pensiones:** la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);
- b) **Bonos:** la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la referida Ley 19.992; y
- c) **Desahucio (Bono compensatorio):** la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-
- d) **Bono Extraordinario (Ley 20.874):** la suma de \$23.388.490.737.-

En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la **suma total de \$992.084.910.400.-**.

Como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones es bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transaccional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Ahora bien, para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar al núcleo familiar más cercano: esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral, como se explicará. En suma, las pretensiones económicas demandadas son improcedentes, porque en la especie existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los hermanos de causantes víctimas de violación a los derechos humanos, como beneficiarios de las leyes de reparación.

A.1.2. Sin perjuicio de lo anterior, los demandantes han obtenido reparación satisfactiva: El hecho de que los demandantes no hayan tenido derecho a un pago en dinero -por la preterición legal- no significa que no han obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alego la satisfacción de éste. Tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se

desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como acontece en el caso de autos, y que vienen a satisfacer al daño moral sufrido. Estos programas, incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. No es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra Ley 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. Al respecto, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, planteó una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraban diversas prestaciones, no solamente pecuniarias, siendo éstas últimas reservadas sólo para la denominada familia nuclear, lo que hizo necesario considerar otra suerte de medidas para diversos afectados. Cita doctrina respecto a la materia en comento.

Precisamente, en el caso de una persona como la de autos, las satisfacciones reparativas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de **reparación simbólica**, como las siguientes:

a. La construcción del *Memorial del Cementerio General en Santiago* realizada en el año 1993.

b. El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del *Día nacional del detenido desaparecido*. Se elige el día 30 de agosto de cada año, en

atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ha instruido ese día como día internacional del Detenido Desaparecido.

c. La construcción del *Museo de la Memoria y los Derechos Humanos*. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, iconos, documentos o monumentos.

d. El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del *Premio Nacional de los Derechos Humanos*.

e. La construcción de *diversos memoriales y obras* a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DD.HH. Todos ellos unidos, como consta del Informe adjunto del Ministerio del Interior, a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

Además, los actores de autos son titulares por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS). En suma, y como conclusión, el cúmulo de reparaciones indicadas ha producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue en el presente juicio. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente. Cita jurisprudencia Corte IDH (caso Almonacid Arellano y otros v/s Chile). En mérito a todo lo expuesto, opone a las acciones deducidas por los actores de autos, quien han invocado la calidad de hermanos de la víctima, las excepciones de preterición en lo económico y

reparación satisfactiva a su respecto, al haber sido ya reparados mediante las reparaciones simbólicas y de beneficios de salud, a través del programa PRAIS, como se ha expuesto precedentemente, en cuya virtud ambas demandas deben ser íntegramente rechazadas.

A.2. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:

A.2.1. Normas de prescripción aplicables: En subsidio opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios deducida con arreglo a lo dispuesto en el artículo N°2.332 del Código Civil, en relación con el artículo N°2.497 del Código Civil; solicitando que, por encontrarse prescrita la demanda, se rechace en todas sus partes. Apunta que, es un hecho de la causa que el **fallecimiento** de don **Roberto Eder Huaiqui Barría**, se produjo en el mes de **septiembre de 1973**, pero es del caso que, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 4 de marzo de 1991, respectivamente. A la fecha de **notificación** de la demanda de autos, esto es, el **8 de noviembre de 2023**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo N°2.332 del Código Civil. En consecuencia, oponen la excepción de prescripción establecida en el artículo N°2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y

derechos en el artículo N°2.515, en relación con el artículo N°2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda de autos, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo N°2.515 del Código Civil.

A.2.2. Generalidades sobre la prescripción: Aduce que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Expresa que, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras, citando jurisprudencia nacional al efecto. Advierte que la prescripción es una institución universal y de orden público. Que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Que entre estas normas está el artículo N°2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor cita. Adopta que, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como señala el artículo N°547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por las leyes y reglamentos especiales. Insiste en que la prescripción es una institución de aplicación general en todo ámbito jurídico y de orden público. Adopta que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya

sufrido. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos N°2.514 y N°2.515 del Código Civil.

A.2.3. Fundamento de la prescripción: comunica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Que, los planteamientos doctrinarios de los que se vale, le permite concluir que la prescripción, es una institución estabilizadora. Que está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, continua sus argumentos en ese contexto. Finalmente, refiere que en la especie, el ejercicio de la acción indemnizatoria ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

A.2.4. Jurisprudencia sobre la materia: Cita la sentencia del pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013. Reflexionando en los diferentes considerando citados, **1).** Que el principio general que rige la materia es de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva. Agrega que, **2).** Los Tratados Internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre

la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establece se refiere solo a la responsabilidad penal. **3)** Que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos el derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo N° 2.332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. **4°)** Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia. **5°)** Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde ese momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la personas desaparecida. Adiciona otros fallos de la Excma. Corte Suprema para sustentar este punto.

A.2.5. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria: ilustra que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción. Arguye que debe considerarse, lo planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una

acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece- como se dicho- al ámbito patrimonial.

A.2.6. Normas contenidas en el Derecho Internacional: Funda que, en relación con la alegación expuesta por el actor en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en ese sentido, se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. Cita y reseña a la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad. Convenio de Ginebra de 1949. Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución N° 60/147 de 21 de marzo de 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Acota que, el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país, citando al efecto, fallos de la Excma. Corte Suprema, causa rol **N°4067-2006** "Martínez Rodríguez y otra con FISCO de Chile" y rol **N°1133-2006** "Neira Rivas, Gloria con FISCO de Chile.

B. EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACIONES RECLAMADAS.

Expone que en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, la defensa

fiscal hace valer las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y monto pretendido.

B.1. Fijación de la indemnización por daño moral: Alega que en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Tratándose del daño puramente moral, por afectar a bienes extra patrimoniales o inmateriales y, por lo mismo, no apreciables en dinero, la indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece, a pesar de la indemnización. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Cita fallos de la Excma. Corte Suprema para fundamentar este punto.

B.2. En subsidio de las excepciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales: En subsidio de las excepciones de reparación satisfactiva y de prescripción de la acción, respectivamente, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos el Tribunal debe considerar todo los pagos recibidos a través de

los años por los actores, o sus familiares, de parte del Estado conforme a las leyes de reparación y también a los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del Derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

43°) ANÁLISIS DEL TRIBUNAL A LA CONSTESTACIÓN. Que haciéndonos cargo de la contestación a la demanda efectuada por el FISCO de Chile de fs.1.686 a fs.1.710 (tomo V), el Tribunal reflexiona de la siguiente manera:

A. EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LAS INDEMNIZACIONES DINERARIAS DEMANDADAS. POR PRETERICIÓN LEGAL DE LOS DEMANDANTES, Y POR HABER SIDO REPARADOS EN LA FORMA QUE SE EXPRESO: Será rechazada por este Tribunal y así se estará en lo resolutivo. En especial por los siguientes fundamentos ya ponderados en las siguientes **causas:** **rol 27.525** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de fecha 26 de diciembre de 2014; **rol 27.526** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio Saravia Fritz, sentencia de fecha 18 de diciembre de 2014; **rol 45.345** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014; **rol 113.990** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 6 de noviembre de 2015; **rol 113.989**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el

homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016; **rol 18.780** del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015; **rol 29.877**, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de fecha 25 de enero de 2016; **rol 45.344**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de fecha 23 de marzo de 2016; **rol 45.371**, del Juzgado de Letras de Lautaro, por apremios ilegítimos contra de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de fecha 17 de agosto de 2016; **rol 45.342**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio de Gumeriendo Gutiérrez Contreras, sentencia de fecha 9 de octubre de 2015; **rol 29.869**, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de fecha 29 de diciembre de 2016; **rol 27.527**, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de fecha 15 de septiembre de 2016; **rol 114.001**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio Sepúlveda Torres, sentencia de fecha 17 de noviembre de 2016; **rol 113.986**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016; **rol 63.541**, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de fecha 27 de mayo de 2016; **rol 45.363**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de fecha 19 de mayo de 2017; **rol 114.048**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de fecha 10 de febrero

de 2017; **rol 10.868**, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por apremios ilegítimos contra de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de fecha 22 de noviembre de 2017; **rol 114.003**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de fecha 10 de noviembre de 2017; **rol 10.851**, del Juzgado del crimen de Puerto Montt, seguida por el homicidio de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de fecha 20 de enero de 2016; **rol 45.343**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de fecha 31 de agosto de 2017; **rol 57.071**, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el homicidio calificado de Jorge Toy Vergara, sentencia de fecha 12 de octubre de 2017; **rol 113.997**, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el secuestro calificado de Segundo Elías Llancaqueo Millán, sentencia de fecha 19 de enero de 2018; **rol 45.354**, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de fecha 3 de agosto de 2020; **rol 45.361**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Catalán Paillal, sentencia de fecha 23 de diciembre de 2020; **rol 114.000**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Waldo Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020; **rol 4-2010**, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de fecha 16 de abril de 2018; **rol 45.362**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Domingo Llabulén

Pilquinao, sentencia de fecha 16 de febrero de 2018; **rol 114.007**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Exequiel Contreras Plotsqui, sentencia de fecha 23 de octubre de 2018; **rol 114.042**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de fecha 17 de agosto de 2018; **rol 113.969** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, sentencia de fecha dos de enero de 2020; **rol 2-2013** de la Itma. Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio de Domingo Perez San Martín, sentencia de fecha 14 de octubre de 2020; y **rol 24.428** del Juzgado de Letras de Traiguén, seguida por apremios ilegítimos contra Antonio Inostroza Segura y otros, sentencia de fecha 31 de octubre de 2023. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados, que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el FISCO de Chile.

A.1. Cabe hacer presente que el demandando civil no señala ninguna norma de las leyes que cita, donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hijos, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los Derechos Humanos y por las obligaciones generales establecidas en los **artículos N°1 y N°2** de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (**artículos N°8 y N°25 de la ya citada**

Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los Derechos Humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales.

A.2. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada en fallos por la Excma. Corte Suprema, en especial: El fallo de 1 de abril de 2014, rol **N°1424-2013**, sentencia de reemplazo, **considerando trece**, motivo que también cita lo resuelto en el mismo sentido en roles N°2918-13, N°3841-12 y N° 5436-10. Que en síntesis expresa, en relación a la improcedencia alegada por el FISCO de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos: (...) *“la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile. Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo N°5° de la Constitución Política de la República.”* Del mismo modo el hecho que los demandantes hayan sido favorecidos por el Estado por la Ley N°19.123 y leyes posteriores, no es óbice para demandar civilmente (tanto la cónyuge, los hijos y los hermanos) toda vez que la mencionada ley y modificaciones posteriores, no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el FISCO de Chile.

B. QUE EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA. DEL ARTÍCULO 2.332 EN RELACIÓN AL ARTÍCULO N°2.497 Y N°2.515, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO N°2.514 DEL CÓDIGO CIVIL. También se **rechaza** y así se estará en lo resolutive. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo de reemplazo **rol 1424-2013** de fecha 1 de abril de 2014, **considerando once**, el cual en síntesis y en lo

pertinente, señala que: (...)“*tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N°19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados y ejecutados políticos, por violación a los Derechos Humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario*”. Por consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema, “*cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama*”. Como se aprecia, la Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas **roles 15.294-2018** y **2.471-2018**, entre otros.

B.1. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el **caso “Órdenes Guerra y otros v/s**

Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018; fallo que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por Juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien la presunta víctima ha recibido en virtud la Ley N°19.980 así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el **párrafo trece**, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte IDH condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los **artículos N°8.1 y N°25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos**, en relación con los **artículos 1.1 y 2 de la misma** y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

C. EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACIONES RECLAMADAS: Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta forma , lo hacían los siguientes textos: *de 1822, capítulo I , artículo 158, donde a los Tribunales se les denomina “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N° 2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”.* En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al **Código Iberoamericano de Ética Judicial**, vigente en Chile para los magistrados, en su **artículo N°35** señala: (...) *“el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”.* Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo **rol 45-2008**, de fecha 1 de septiembre de 2008, recaído en la causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”. *“Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de*

la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia". (Antonio Pedrals: "Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento positivo". Universidad de Valparaíso", 1982, p. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de la indemnización reclamada.

C.1. Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (**John Rawls**. "Una Teoría de la Justicia". Fondo de Cultura Económica, año 2006, p. 412).

C.1.2. Que en la misma línea, el autor antes citado en su obra Liberalismo Político, igual editorial, año 2013, **páginas 224 y 225**, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

C.2. Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo **Alejandro Guzmán Brito** en su artículo “La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile”, (“Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile”, año 1992, **p.77**) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno **Claudio Nash Rojas**, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro “Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007” (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro “Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena” (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en **páginas 67 y siguientes** del primer libro mencionado que: (...) *“la Corte IDH ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos”*. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención

Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, **página 183**, donde luego de hacer una análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que: (...) *“la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima”*.

44°) Que finalmente, hay que considerar el artículo de **Alejandro Vergara Blanco**, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que *“el Derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del Derecho”* y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta: *¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que “La respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni lus Naturalismo, es Derecho”*. En el caso en estudio, dictado por la Excm. Corte Suprema, sentencia **rol 1424-2013**, de fecha 1 de abril de 2014, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo N°63, el artículo

N°38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el *principio ex aequo et bono (de acuerdo con lo correcto y lo bueno)*.

C.3. Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, **rol N° 1424-2013**, que en su **considerando décimo**, en síntesis y en lo pertinente, señala que: (...) *“la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los Derechos Humanos”*. En consecuencia se procederá rechazar la excepción de prescripción opuesta por el FISCO de Chile, como se indicara en lo resolutivo.

C.3.1. Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados

por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en:

- I. **Causa rol N°5572-2019, caratulados “Schuster Pinto Macarena y otros con FISCO de Chile”**, en fallo de fecha 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández; que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000.- para cada uno.
- II. **Causa rol N° 82-2021 caratulados “Luchsinger MacKay con FISCO de Chile”**, en fallo de fecha 5 de agosto de 2021, sentencia de remplazo que expresa en su **considerando décimo quinto**: (...) *“Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N° 18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la “falta de servicio”, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria”*. Es importante precisar que la norma del

inciso segundo del **artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada**, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del **artículo 4° de la Ley N°18.575**, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el **inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes**, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública. En este sentido, en su parte resolutive: (...) *“se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme”*.

C.4. Que razonado lo anterior, éste sentenciador, sobre la indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido un delito de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excma. Corte Suprema

fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta de servicio.

C.5. De la misma forma se debe tener en consideración para la **ponderación de la indemnización** respectiva lo que manifiesta el autor **Haldemann**: *“Cuando ocurren males colectivos y la violencia masiva o el terror totalitario desgarran tejidos sociales enteros, aquellos agraviados sufren una injusticia adicional de falta de reconocimiento: son ignorados, silenciados, sofocados y suprimidos de la mirada pública. Al silenciar a las víctimas, sus agravios personales y sociales no tienen realidad. Por lo tanto, el sufrimiento se reduce a una experiencia clandestina, pasada por alto y olvidada. Este tipo de tratamiento añade insulto a la herida, y uno puede describir sus efectos devastadores como ‘las heridas del silencio’”.* (**Haldemann, Frank**. “Another Kind of Justice: Transitional Justice as Recognition.” *Cornell Journal of International Law* 41 (2008): **pp.675–693**). Citado por: (**Murphy, Colleen** (2017): “The conceptual foundations of transitional justice”, United Kingdom: Cambridge University Press).

45°) Que con el fin de **probar el daño moral** sufrido por los demandantes civiles Dina Uria Huaiqui Barría, Ismael Baruck Huaiqui Barría, Eliel Enrique Huaiqui Barría y José Leonardo Huaiqui Barría; desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia del delito del homicidio simple de su hermano Roberto Eder Huaiqui Barría, se presentaron los siguientes antecedentes en la etapa de plenario:

A.- Declaraciones testimoniales de Gloria Yaneth Vejar Cifuentes, Ulises Marcelo Devia Huaiqui y Vilma Andrea Huaiqui Carrillo. Quienes declararon

sin tacha y legalmente examinados que: **1)** conocen a los demandantes civiles; como sus familiares directos y vecinos del sector donde vivían; **2)** refieren conocer como lo sucedido les afectó psicológicamente, el dolor de ellos y los padres fallecidos (Emilio Huaiqui Calfulef y Violanda Barría Santana), por la pérdida y que nunca pudieron recuperar el cuerpo de su hijo y hermano; **3)** además refieren la discriminación que sufrió la familia completa, tanto por las detenciones y allanamientos al hogar en común posterior a los hechos materia de esta investigación. Y las dificultades de encontrar trabajo en Lago Ranco por ser familiares de la víctima en autos.

B.- Certificados de nacimiento de fs.1.406 a fs.1.411 (tomo IV). De Roberto Eder Huaiqui Barría, José Leonardo Huaiqui Barría, Dina Uria Huaiqui Barría, Eliel Enrique Huaiqui Barría e Ismael Baruck Huaiqui Barría. Todos hijos de Emilio Huaiqui Calfulef y Violanda Barría Santana. Agregados con citación en la etapa de plenario.

C.- Certificado de matrimonio entre Emilio Huaiqui Calfulef y Violanda Barría Santana de fs.1.405 (tomo IV). Agregado con citación en la etapa de plenario.

D.- Certificados de defunción de fs.1.925 a fs.1.929 (tomo VI). De Martín Eduardo Huaiqui Barría, Federico Graldo Huaiqui Barría, Nérida Ilsa Huaiqui Barría, Emilio Huaiqui Calfulef y Violanda Barría Santana.

E.- Copia simple nómina de personas reconocidas como víctimas de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura de fs.1.912 a fs.1.915 (tomo VI). Que reconoce como víctima N°11.627 a Emilio Huaiqui Calfulef y como víctima en etapa de reconsideración N°482 a Martín Eduardo Huaiqui Barría.

F.- Certificado de nacimiento de fs.1.916 (tomo VI). De Ulises Marcelo Devia Huaiqui. Hijo de Nérída Ilsia Huaiqui Barría.

46°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en este fallo, el daño moral que reclaman los actores, provocado por el delito de homicidio simple de Roberto Eder Huaiqui Barría, perpetrado en la comuna de Lago Ranco, en el Río Nilahue, entre los días 15 y 17 de septiembre de 1973 según el mérito del proceso.

Está plenamente acreditado, que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedentes la indemnización que se demanda esto es: **a)** la perpetración de un delito por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por los demandantes; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por los actores y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de Justicia, fijar como indemnización de perjuicios para los actores civiles la suma de:

- A. \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) a Dina Uria Huaiqui Barría, hermana de Roberto Eder Huaiqui Barría.**
- B. \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) a Ismael Baruck Huaiqui Barría, hermano de Roberto Eder Huaiqui Barría.**
- C. \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) a Eliel Enrique Huaiqui Barría, hermano de Roberto Eder Huaiqui Barría.**

D. \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) a José Leonardo Huaiqui Barría, hermano de Roberto Eder Huaiqui Barría.

47°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se razonado precedentemente, ésta deberá ser reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior que quede ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 11 N° 6, 11 N°9, 12 N° 8, 14,15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 50, 51,52, 56, 61, 68, 69, 74, 103, 391 N°1 y 391 N°2 del Código Penal; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 460, 464 y siguientes, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes, 509 y 533 del Código de Procedimiento Penal; artículos 31, 2.314 y siguientes del Código Civil; Ley 18.575; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República; Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores; Ley 19.123 y sus modificaciones posteriores; Ley 19.980, Ley 20.357, Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949, se declara:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

I. QUE SE CONDENA con costas a:

A.) MAMERTO TERCERO AVILA GONZÁLEZ cédula nacional de identidad N° 4.897.930-0, ya individualizado, en calidad de **CÓMPLICE** por los delitos de **homicidio simple en su carácter de lesa humanidad**, en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría y **homicidio simple frustrado en su carácter de lesa humanidad**, en la persona de José Jovin Oporto Del Río, delitos perpetrados en la comuna de Lago Ranco, en el río Nilahue, entre el 15 y 17 de septiembre de 1973; a la **PENA UNICA DE 6 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO, MÁS LAS ACCESORIAS LEGALES**; esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena.

B.) CARLOS EMILIO GALINDO RUIZ cédula nacional de identidad N° 4.127.173-6, ya individualizado, en calidad de **CÓMPLICE** por los delitos de **homicidio simple en su carácter de lesa humanidad**, en la persona de Roberto Eder Huaiqui Barría y **homicidio simple frustrado en su carácter de lesa humanidad**, en la persona de José Jovin Oporto Del Río, delitos perpetrados en la comuna de Lago Ranco, en el Río Nilahue, entre el 15 y 17 de septiembre de 1973; a la **PENA UNICA DE 6 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO, MÁS LAS ACCESORIAS LEGALES**; esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena.

II. Que respecto a ambos sentenciados **Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz**, según se expresó precedentemente, **NO SE LE CONCEDERÁ ALGÚN BENEFICIO DE LA LEY N°18.216**. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de **abono** los días que han estado privados de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

A.) MAMERTO TERCERO AVILA GONZÁLEZ:

A.1- ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el 21 de diciembre de 2022 hasta la fecha, según consta a fs. 1.199 (tomo IV), cuando es notificado del auto de procesamiento y la medida cautelar de arresto domiciliario total.

B.) CARLOS EMILIO GALINDO RUIZ:

B.1- ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el 30 de diciembre de 2022 hasta la fecha, según consta de fs. 1.252 (tomo IV), cuando es notificado de medida cautelar de arresto domiciliario total y a fs. 1.263 (tomo IV) es notificado del auto de procesamiento.

III.- Las penas impuestas a ambos condenados, comenzará a regir desde **que se presenten o sea habidos los sentenciados en la presente causa.**

IV.- Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto las medidas cautelares personales impuestas a los sentenciados **Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz**. Oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedentes.

EN CUANTO A LAS ACCION CIVIL:

I.- Que **NO HA LUGAR** a las excepciones interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, don Manuel Álvaro Sáez Willer, en su presentación de fs. 1.686 a 1.710 (tomo V), esto es:

A. Excepción de improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas. Por preterición legal de los demandantes y por haber sido reparados en la forma que indicó.

B. Excepción de prescripción extintiva.

Lo anterior, sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto de los **montos de la indemnización** y sobre la fecha en que deben aplicarse los **reajustes e intereses** correspondientes.

II.- Que **HA LUGAR** a la **demanda civil de indemnización de perjuicios** de fs. 1.566 a fs. 1.582 (tomo V) interpuesta por la abogada Rose Marie Vásquez Garrido, en representación de los actores civiles, que se desglosan a continuación. Condenándose a la parte demandada, **FISCO de Chile**, a pagar la suma de:

- a) **\$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) a Dina Uria Huaiqui Barría, hermana de Roberto Eder Huaiqui Barría.**
- b) **\$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) a Ismael Baruck Huaiqui Barría, hermano de Roberto Eder Huaiqui Barría.**
- c) **\$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) a Eliel Enrique Huaiqui Barría, hermano de Roberto Eder Huaiqui Barría.**
- d) **\$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) a José Leonardo Huaiqui Barría, hermano de Roberto Eder Huaiqui Barría.**

III.- Las sumas anteriores deberán ser reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

IV.- Que se condena en costas al FISCO de Chile.

Notifíquese esta sentencia personalmente a los sentenciados Mamerto Tercero Ávila González y Carlos Emilio Galindo Ruiz, dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere, facultándose a los Tribunales para que cite a los sentenciados personalmente, bajo apercibimiento de arresto o se constituyan en su domicilio si fuera necesario, realizando todas las diligencias para el oportuno cumplimiento de la notificación de esta sentencia, pronunciándose sobre las peticiones que hicieran los sentenciados en el acto de la notificación, en especial si presentaran verbalmente recurso de apelación.

Considerando las penas decretadas en contra de los sentenciados y teniendo presente las medidas cautelares vigentes. Fórmese cuaderno separado **“cuaderno de medidas cautelares”** en este proceso. Incorporándose a este lo referente a revisión de medidas cautelares; tales como prisión preventiva, arresto domiciliario total, arresto domiciliario parcial, obligación de firma mensual y arraigos nacionales según corresponda.

Notifíquese a la abogada querellante y al abogado que representa al FISCO de Chile; a través de receptor de turno del presente mes.

En el caso del **querellante Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia y DD.HH**; notifíquese personalmente en Secretaría del Tribunal, a cualquiera de los abogados que tengan su representación.

Sentencia N°93.

Homicidio de Roberto Eder Huaiqui Barría y homicidio frustrado de José Jovin Oporto Del Río.

Sentencia definitiva de 309 fojas.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el **artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal**, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra del sentenciado para informarle sobre las decisiones del presente fallo y en su oportunidad, archívese.

Consúltase si no se apelare y archívese en su oportunidad.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol: 2-2014 Valdivia.-

DICTADA POR DON ÁLVARO MESA LATORRE, MINISTRO EN VISITA EXTRAORDINARIA.

Sentencia N°93.

Homicidio de Roberto Eder Huaiqui Barría y homicidio frustrado de José Jovin Oporto Del Río.

Sentencia definitiva de 309 fojas.

Autoriza don Germán Varas Cicarelli, Secretario de la Itma. Corte de Apelaciones de Temuco.

En Temuco, a veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. frc.-